

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

FACULTAD DE DERECHO

**Departamento de Derecho Administrativo,
Financiero y Procesal**



**LOS ABUSOS COMETIDOS EN NOMBRE DE LA
COLECTIVIDAD O GRUPO EN LOS PROCESOS
COLECTIVOS Y SU RESARCIMIENTO**

Dirección del Prof. Dr. D. Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell

Wilson de Souza Malcher

Salamanca, 2014

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

AGRADECIMIENTOS

La vida es una bendición divina, una oportunidad de perfeccionamiento y de expansión de la conciencia.

La decisión de adquirir nuevos conocimientos es personal y exige dedicación, salud y buena dosis de paciencia. Y, para alcanzar nuestros objetivos recibimos el apoyo y el incentivo de personas que para nosotros tienen un inmenso valor. Cada una de ellas ejerciendo un papel fundamental en el alcance de las metas y de los objetivos trazados.

Queremos agradecer a los familiares y a los amigos por el incentivo y por el apoyo. Y, principalmente, a Él por las bendiciones y por los frutos recibidos.

SUMARIO

ABREVIATURAS	13
INTRODUCCIÓN.....	15
1. ASPECTOS GENERALES DE LA TUTELA COLECTIVA.....	19
2. EL ACCESO A LA JUSTICIA	37
2.1. LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA.....	40
2.2 EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA CUESTIONES METAINDIVIDUALES.....	60
2.3 .CONCLUSIÓN PARCIAL	66
3. LOS PROCESOS COLECTIVOS BRASILEÑOS.....	69
3.1. LA ACCIÓN POPULAR	69
3.2 .LA ACCIÓN CIVIL PÚBLICA.....	75
3.3. LA ACCIÓN DE IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA.....	81

3.4. LA ACCIÓN CIVIL COLECTIVA	88
3.5 EL MANDATO DE SEGURIDAD COLECTIVO.....	92
3.6. CONCLUSIÓN PARCIAL	94
4. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LOS PROCESOS COLECTIVOS.....	97
4.1. LA LEGITIMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO	110
4.2. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN COLECTIVA	115
4.3. CONCLUSIÓN PARCIAL	123
5. LA REPRESENTACIÓN ADECUADA	129
6. LA PRUEBA EN LOS PROCESOS COLECTIVOS	137
6.1. LA PRUEBA Y LA GENERALIDAD DE LOS SISTEMAS PROCESALES CIVILES	137
6.2. LOS PROCESOS COLECTIVOS Y LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.....	140
6.3. LA PRUEBA EN EL CÓDIGO MODELO DE PROCESOS COLECTIVOS PARA IBEROAMÉRICA.....	145

6.4. EL CARÁCTER PUBLICISTA DEL PROCESO Y LA PRUEBA	147
6.5. LOS PODERES DE INSTRUCCIÓN DE LOS JUECES EN LOS PROCESOS COLECTIVOS	149
6.6. CONCLUSIÓN PARCIAL	151
7. LA ANTICIPACIÓN DE LA TUTELA EN LOS PROCESOS COLECTIVOS.....	153
7.1. LA PERSPECTIVA DE ACCESO AL DERECHO Y DE EFECTIVIDAD DEL PROCESO	153
7.2. LA DEMANDA CAUTELAR DE URGENCIA	155
7.3 LA ANTICIPACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA TUTELA.....	161
7.4. LA ANTICIPACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA TUTELA EN LOS PROCESOS COLECTIVOS.....	175
7.5 .CONCLUSIÓN PARCIAL	178
8. LA COSA JUZGADA EN LOS PROCESOS COLECTIVOS	179
8.1. ASPECTOS GENERALES DE LA COSA JUZGADA: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN.....	179

8.2. LA COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL	183
8.3. LOS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA.....	185
8.4. LA RELATIVIZACIÓN DE LA COSA JUZGADA.....	192
8.5. EL RÉGIMEN DE LA COSA JUZGADA EN LOS PROCESOS COLECTIVOS.....	196
8.5.1. La cosa juzgada colectiva y la restricción territorial - LACP	201
8.6. CONCLUSIÓN PARCIAL	204
9. EL ABUSO PROCESAL.....	207
9.1. LA TEORÍA DEL ABUSO DE DERECHO	210
9.2. LA SISTEMATIZACIÓN DE LA TEORÍA.....	213
9.2.1. Tesis subjetivista	214
9.2.2 .Tesis objetivista	216
9.2.3. Tesis mixta	218
9.3. EL ABUSO DE DERECHO EN LA DOCTRINA BRASILEÑA.....	218
9.4. EL ABUSO DE DERECHO EN LA DOCTRINA ESPAÑOLA	221
9.5. EL ABUSO PROCESAL: TIPIFICACIONES	222
9.6 CONCLUSIÓN PARCIAL	225

10. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS PROCESOS COLECTIVOS	227
10.1. LA RESPONSABILIDAD: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ASPECTOS FUNDAMENTALES.....	229
10.2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL: SIGNIFICACIÓN Y FINALIDADES	257
10.3 LOS MODELOS DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA	262
10.3.1. El modelo de responsabilidad por acto ilícito.....	263
10.3.2. El modelo de responsabilidad por equidad.....	269
10.3.3. La responsabilidad contractual y extracontractual	271
10.3.4. El modelo de responsabilidad por el riesgo.....	274
10.4. LAS CIRCUNSTANCIAS EXONERADORAS DE LA RESPONSABILIDAD.....	276
10.5. EL DEBER JURÍDICO DE DECIR LA VERDAD	280
10.6. LA VOLUNTAD PROCESAL	284
10.7. EL PRINCIPIO DE PROBIDAD	286
10.8. LOS DEBERES DE LAS PARTES	288
10.9 LA POSIBILIDAD DE CONDENA DEL ABOGADO DE LA PARTE POR LITIGAR DE MALA FE.....	293

10.10. LOS DAÑOS PROCESALES EN LOS PROCESOS COLECTIVOS.....	297
10.11. LA RESPONSABILIDAD POR EL ABUSO PROCESAL COMO "ACTO ILÍCITO"	299
10.12. CONCLUSIÓN PARCIAL	303
 11. LA DEMANDA COLECTIVA PRESENTADA CON TEMERIDAD	 311
11.1. LA TENTATIVA DE INTERVENCIÓN EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO.....	311
11.2 EL ENSAYO DE INTERVENCIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA	313
11.3. LA INADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	317
11.4. EL RESPECTO AL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN	318
11.5. LA TENTATIVA DE PREVALENCIA DE POSICIONES IDEOLÓGICAS Y RELIGIOSAS.....	321
11.6. LA TENTATIVA DE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA UNICIDAD SINDICAL	324
11.7. LA TENTATIVA DE POSICIÓN PERSONAL EN RELACIÓN AL ATENCIÓN BANCARIA	325
11.8. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA - PAGO A LA PERSONA DEL ABOGADO.....	326

11.9 CONCLUSIÓN PARCIAL	329
CONCLUSIONES.....	331
BIBLIOGRAFÍA.....	341
JURISPRUDENCIA.....	371
PÁGINAS WEB.....	375
ANEXOS.....	377
I. Lei brasileira nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.....	377
II. Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberomérica.....	389
III. Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos de Ada Pellegrini Grinover.....	411
IV. Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos da Universidade de Rio de Janeiro y da Universidade Estácio de Sá.....	429

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

ABREVIATURAS

- ADCT** - Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – Brasil
- AgRg** - Agravo Regimental – Brasil
- AJURIS** – Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – Brasil
- BOC** – Boletín Oficial de las Cortes
- CC** – Código Civil español
- CCb** – Código Civil brasileiro
- CDC** – Código de Defesa del Consumidor – Brasil
- CEDAM** – Casa Editrice Dott. Antonio Milani
- CEF** – Caixa Econômica Federal - Brasil
- CF** - Constitución brasileña de 1988
- CJF** – Conselho de Justiça Federal – Brasil
- CNJ** – Consejo Nacional de la Justicia - Brasil
- CPC** – Código de Processo Civil brasileiro
- DF** – Desembargador Federal - Brasil
- DJe** - Diario de la Justicia electrónico - Brasil
- DJ** – Diario de la Justicia - Brasil
- FGV** – Fundação Getúlio Vargas – Brasil
- INSS** – Instituto Nacional de Seguridad Social - Brasil
- JF** – Juez federal - Brasil
- FRCP** – *Federal Rules of Civil Procedure* (USA)
- LACP** – Ley de la Acción Civil Pública (7.347/1985) - Brasil
- LEC** – Ley de Enjuiciamiento Civil
- LGDCU** – Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio de 1984.
- LICC** – Ley de Introducción al Código Civil - Brasil

LOMPU – Ley Orgánica del Ministerio Público de Brasil (Ley Complementar
núm. 75, de 20 de mayo)

LOPJ – Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985

REsp – Recurso Especial – Brasil

TRF – Tribunal Regional Federal, Brasil

STF – Supremo Tribunal Federal - Brasil

STJ – Superior Tribunal de Justicia - Brasil

UFPR – Universidad Federal del Paraná - Brasil

INTRODUCCIÓN

La preocupación que se presenta y que justifica el proceso de investigación que se pretende emprender, afecta los posibles abusos o excesos cometidos en nombre de la colectividad o del grupo social representado a partir de pretensiones impropias y que puedan acarrear perjuicios económicos, con consecuente resarcimiento de los daños sufridos.

Hay, incluso, excesos en la “colectivización” de situaciones eminentemente individuales y subjetivas, o sea, intereses individuales tratados como colectivos. Se olvida que los *derechos individuales homogéneos* son derechos eventualmente clasificados como colectivos y para que merezcan ser tutelados de manera colectiva debemos de considerar su naturaleza práctica o jurídica.

Es bueno recordar, aún, que el actor legitimado en la demanda colectiva pide, con cierta frecuencia, la concesión de medidas cautelares o de anticipación de tutela, que acaban imponiéndole al Estado la adopción de cierta postura que conllevará alteraciones de estrategias previamente definidas, redundando en nuevos costos.

Muchas veces la propia pretensión provoca repercusión en la prensa, que desprovista de mayores informaciones o elementos probatorios, alcanza de forma negativa la imagen del administrador y pone en duda la credibilidad de la institución gubernamental involucrada.

No deseamos aquí desestimular el uso de la acción colectiva, sino al contrario, la preocupación es la utilización de acciones temerarias, precipitadas

y movidas por motivos personales o políticos, propuestas por representantes de asociaciones y demás personas jurídicas legitimadas, incluso por miembros del Ministerio Público.

Lo que se pretende investigar, analizar y quizás intentar evitar es la desviación de la tutela colectiva - instrumento de solución de conflictos de masas, útil y necesario para la efectividad de la prestación jurisdiccional - ante un nuevo orden de concienciación de derechos por parte de los ciudadanos.

La comisión de un acto desleal e ilícito merece, es verdad, una pronta contestación por parte del perjudicado, que en el presente caso no debe y no puede soportar el abuso de la demanda, dando oportunidad a una nueva pretensión de resarcimiento de los daños sufridos por la persona jurídica promotora de la demanda colectiva y/o de sus representantes legales.

El objetivo de este estudio es justamente investigar y analizar los abusos y excesos cometidos por los legitimados en las acciones colectivas, a partir de los pleitos temerarios, muchas veces livianos, que puedan traer, por ejemplo, perjuicios al Estado y a sus administradores.

Nos parece necesario llamar la atención para el mejor criterio en la decisión de entrar con tales pleitos judiciales, principalmente por las repercusiones de orden civil y criminal que podrán devenir a las personas jurídicas legitimadas y a los respectivos representantes en razón de los perjuicios sufridos por el demandado.

Sabemos del carácter multidisciplinar de esta investigación, situada en una zona fronteriza, envolviendo simultáneamente aspectos de Derecho procesal, constitucional y civil. Sin embargo, es una visión propia del Derecho procesal moderno, a partir de la conciencia de que los institutos procesales son concebidos en relación con el Derecho material. En un mecanismo de

reaproximación del derecho procesal al material, una vez reconocida y consolidada su autonomía científica.

Se busca desarrollar una investigación a partir de la verificación de un problema que debe ser solucionado, aspirándose a un cambio de comportamiento de los agentes activos en la búsqueda de una solución.

En efecto, este trabajo estará lleno de informaciones del derecho y de la práctica forense brasileña, un modelo jurídico equipado, a lo largo de la historia reciente, de un substancial número de especies y de remedios procesales de índole colectiva; no olvidando jamás de hacer un paralelo con el Derecho procesal y con la práctica forense española, como instrumento de Derecho comparado y en el intento de contribuir, de forma sencilla, con los estudios jurídico-procesales de las dos naciones.

CONCLUSIONES

I

Desde el punto de vista general del acceso a la justicia ha sido posible constatar que tanto en España como en Brasil se busca crear mecanismos y garantías de acceso a los derechos y a la justicia, como reconocimiento y valorización del derecho fundamental de protección jurisdiccional garantizado a todos. En los últimos años, como forma de incrementar la celeridad en la tramitación de los procedimientos procesales y garantizar la seguridad de todo el proceso, así como de permitir un mayor acceso a la justicia, los poderes judiciales se están tomando más en serio además la oportunidad de la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

II

Una administración de justicia justa y lejana es un obstáculo de fundamental importancia para la concreción de la garantía de acceso al derecho idealizada ya desde la *Magna Carta* de Juan Sin Tierra de 1215. Y, a partir de esta visión particular, se parte hacia una dimensión colectiva de pacificación social, o sea, para el reconocimiento de una tutela jurídica de los intereses de grupos, mediante la efectiva posibilidad de la protección jurisdiccional de los *derechos colectivos*, sean difusos, colectivos propiamente dichos o individuales homogéneos.

III

Se ha puesto de manifiesto que el sistema procesal brasileño posee una cantidad expresiva de demandas colectivas para la defensa de los intereses de grupos. Pero, por muy diversificado y extensivo que esté el rol de acciones colectivas utilizadas en el ordenamiento jurídico brasileño, aún no hay ninguna previsión legal de pertinencia del *proceso colectivo pasivo*. Lo que podría ser corregido por el Código Brasileño de Procesos Colectivos (art. 39), que por inspiración del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, contiene la previsión de la posibilidad de proponer la *pretensión colectiva pasiva*, o sea, cualquier especie de pretensión en contra de una colectividad organizada o que tenga representante adecuado, en los términos del párrafo 2º del artículo 2, cuya decisión tendrá calidad de cosa juzgada *erga omnes*, para vincular a los miembros del grupo, la categoría o clase, siempre que el bien jurídico a ser protegido sea transindividual y se desprenda de él un claro interés social.

IV

En ocasión del análisis de la legitimación colectiva en los procesos colectivos lo que llama la atención y asombro es el hecho de las complejidades que ha conllevado el concepto de legitimación. Esta expresión, no utilizada en precepto alguno de la LEC de 1881, llevó a la eminente doctrina española a forzar la letra de la ley, para sostener que la legitimación era uno de los elementos integrantes del concepto complejo de "personalidad". Es por otro lado de gran interés la opción adoptada por el legislador español, ya en la LEC 1/2000, pues usó la expresión "legitimación" sólo al tratar de la legitimación colectiva para la defensa de derechos e intereses de los consumidores y usuarios (art. 11), prefiriendo denominar como "condición de parte procesal

legítima”, al tratar de la legitimación individual, muy probablemente, por influencia del texto anterior, vigente durante muchos años.

V

Es de hacer constar el avance interpretativo del fenómeno jurídico de la legitimación, sin embargo, a partir de la Constitución Española de 1978, como expresión de un concepto estrictamente procesal, distinto, por lo tanto, del Derecho material, propio de la definición clásica que enreda la legitimación con la titularidad del derecho. Como, a decir verdad, ocurre en el derecho brasileño, que permanece fiel al principio de la obligatoria coincidencia entre los sujetos de la relación jurídico-material controvertida y los sujetos de la relación procesal.

VI

El legislador brasileño se siente orgulloso de ser lo responsable por la introducción, en los sistemas de *Civil Law*, de la tutela de los intereses y derechos colectivos, difusos y, principalmente, de los individuales homogéneos, a pesar de atribuirse a Italia el origen del estudio moderno de los intereses difusos y colectivos. Ese ordenamiento ganó impulso a partir de la Carta Magna de 1988, cuando la protección de los referidos intereses fue elevada a nivel constitucional. Sin hablar de la promulgación de la ley específica para la “*acción civil pública*” (de 1985) y, sobre todo, de la elaboración del CDC, que de manera explícita, llegó a distinguir los intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos. España, a su vez, empezó a tratar del tema al final de los años setenta, no obstante, es en los años noventa que los manuales empiezan a reflejar los estudios y las investigaciones desarrolladas por los autores nacionales, en el área procesal civil. Sin embargo, hasta la fecha de 1984, no se

produce en el ordenamiento jurídico-procesal el reconocimiento explícito del fenómeno de la legitimación colectiva.

VII

En relación a la legitimación colectiva, tanto en el sistema continental como el anglosajón, los modelos adoptados son reducidos y, de una forma o de otra, se repiten, de manera aislada o compartida. La legitimación para actuar, no raramente, es atribuida al particular, de forma individual, como ocurre en las *class actions* norteamericanas y en las acciones populares brasileña y portuguesa. El modelo común adoptado es aquel que atribuye a los grupos sociales (asociaciones civiles, entidades legalmente reconocidas o grupos de afectados), a ejemplo de lo que ocurre en España (art. 11 LEC), o a los entes políticos y órganos públicos, en especial al Ministerio Público. Este último, por supuesto, adquirió relevante importancia en el ordenamiento jurídico brasileño.

VIII

En Brasil, actualmente, es conocida la hegemonía del Ministerio Público para la iniciativa de las acciones civiles públicas. Con tristeza, tal vez, por la historia reciente del proceso democrático brasileño -poco más de veinte años de apertura política-, los órganos de clase y las asociaciones civiles, aún son muy poco activas en la defensa de sus intereses o de sus representados. Por otro lado, constatamos un movimiento social, aunque tímido, contra lo que se denominó como “uso abusivo de la acción civil pública”, principalmente en procesos en los que están implicados derechos individuales homogéneos, por parte del Ministerio Público. En España, sin embargo, la actuación del Ministerio Público está, en la práctica, restringida principalmente a los procesos penales. Este órgano que podría ser un agente activo de la defensa de los intereses del

grupo, en realidad hasta hoy, no ha asumido ampliamente esta función. Además, desde el punto de vista normativo, ahora el Ministerio Público tiene asegurada legitimación activa solo para la interposición de la acción colectiva de cesación, tanto la de nulidad de cláusulas como la de prácticas ilícitas.

IX

Los legisladores españoles y brasileños optaron por legitimar a algunos entes institucionales para la demanda colectiva. El ordenamiento español, en especial, para la protección exclusiva de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, dejando fuera otros derechos e intereses de relevancia colectiva. Sin embargo, el art. 11 LEC se muestra excesivamente restrictivo, puesto que se concentra, básicamente en la actuación de las asociaciones de consumidores y usuarios. Por otro lado, acoge algunas hipótesis de legitimación colectiva, que nos ayuda en el estudio de la materia: la legitimación de las *asociaciones de consumidores y usuarios*, de los *grupos de afectados*, del *Ministerio Fiscal* y de las *entidades habilitadas* conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los difusos de los consumidores y usuarios.

X

El Brasil, aún excesivamente condicionado por el procesalismo clásico, ha tenido que concebir valientes y creativas soluciones para avanzar en la regulación de la legitimación colectiva. Terminó el legislador por decidirse por una solución plural, atribuyendo la legitimación, de manera concurrente y disyuntiva, a ciertos grupos sociales y los órganos estatales o personas jurídicas

de derecho público. El gran progreso, realmente, se sintió con el CDC (Ley n. 8.078/90, art. 82, I a IV), que incrementó la legitimación de los entes públicos, aun sin personalidad jurídica, de modo específico, destinados a la defensa de los intereses y derechos protegidos por la ley. Y las asociaciones empezaron a tener legitimación activa solo o por autorización en sus estatutos. La gran brecha, realmente, es la falta de autorización para la legitimación individual para la defensa de los intereses y derechos supraindividuales, pues se restringe a la tutela de los intereses a título individual, a excepción de la acción popular atribuida a cualquier ciudadano. Este equívoco, sin embargo, será corregido pronto, pues el anteproyecto de Código Brasileño de Procesos Colectivos ya contempla la legitimación activa a la cualquier persona para la acción civil pública (art. 21, I).

XI

En relación a la naturaleza jurídica de la legitimación colectiva, nuestra conclusión, después del análisis de las posiciones doctrinales que se presentan, se trata de hipótesis de *legitimación autónoma* u *originaria específica*, pues no podemos aceptar la idea de legitimación extraordinaria, a excepción de la protección de los intereses y derechos individuales homogéneos, conjunto de derechos subjetivos individualizados que, por permiso legal, pasaron a ser tutelados de manera colectiva. No se puede decir que los legitimados legales (entes políticos, Ministerio Público, órganos estatales y asociaciones), en defensa de los intereses difusos y colectivos, estén actuando en nombre propio, en la defensa de los intereses jurídicos de otras personas. En el aspecto sustancial, los titulares de intereses y derechos colectivos *lato sensu* (o sea, difuso y colectivo) son indeterminables y de objeto indivisible. Ni siquiera ordinaria, pues no están defendiendo intereses que les sean propios.

XIII

Con alegría se percibió una evolución y una tendencia de las legislaciones procesales civiles, tanto de países de *civil law* como de *common law*, de ampliación de los poderes de instrucción de los jueces, con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, principalmente delante de la realidad de los procesos colectivos, como instrumento de defensa y de preservación de los derechos difusos y colectivos.

XIV

Como forma de seleccionar mejor la ecuación siguiente: *cómo garantizar la rapidez y a la vez la seguridad del proceso*, los procesalistas modernos pensaron en la anticipación de los resultados de las demandas judiciales, incluso, en los procesos colectivos, para evitar soluciones tardías y/o eventualmente injustas: *anticipar los efectos de la tutela jurisdiccional*.

XV

Nos permitimos decir que la responsabilidad jurídica es fruto de una experiencia social evolutiva. Los modelos jurídicos emanan de los flujos de las experiencias, que, a su vez, emergen de los hechos sociales. El instituto jurídico de la *responsabilidad civil* está directamente ligado a las manifestaciones de las actividades humanas. Y, como tal, ha recibido diversas significaciones a lo largo de la historia del Derecho. Con tal certeza, la *responsabilidad civil* está situada entre la reparación del daño, la prevención de nuevos perjuicios y la sanción por el comportamiento lesivo.

XVI

De todo el estudio realizado, se percibe que no se pueden comprender los modelos de responsabilidad de forma aislada. No se trata sólo de juzgar las conductas de las personas, sino también de atribuir eventos a los responsables. El modelo de *responsabilidad por acto ilícito o subjetivo*, por ejemplo, centra su perspectiva en el acto humano, o sea, evalúa los actos humanos a partir de su referencia a un deber contenido en una norma social. Mientras, el modelo de *responsabilidad por equidad* centra su foco sobre los resultados de la interferencia humana sobre el mundo, o sea, sobre la distribución social de los eventos onerosos. Se hace evidente, por lo tanto, que el centro del examen en la responsabilidad subjetiva es el acto ilícito, o sea, una conducta que no está en conformidad con el derecho, con origen en una *acción* (una conducta positiva), al violar una prohibición, una conducta prohibida por el ordenamiento jurídico. O, en una *omisión*, donde se deja de cumplir un deber de actuar, o sea, no se realiza algo determinado por ley.

XVII

Como afirmamos, la aceptación de la idea de que el abuso de derecho pueda redundar en responsabilidad civil por parte de quien inadvertidamente extrapoló los límites legales pasa necesariamente, aunque con reservas doctrinales, por su configuración como *acto ilícito específico*, distinto, evidentemente, del acto ilícito común. Y ante los casos concretos juzgados por los tribunales españoles y brasileños se puede concluir que, en ciertos casos, la voluntad proteccionista oscurece la visión de los “protectores” y no permite percibir que el grupo no necesita de protección.

XVIII

No nos fue posible constatar, infelizmente, en la jurisprudencia brasileña y, mucho menos, en la española la tentativa de obtención de eventuales resarcimientos por parte de quien se haya sentido perjudicado por procesos colectivos que jamás debieran haber sido instaurados.

XIX

Sabemos que la posibilidad estimación de una pretensión de indemnización por eventual daño moral o material es cuestión delicada, pues existe la garantía constitucional relacionada con el derecho de acción, pero seguimos creyendo que es perfectamente factible la posibilidad de resarcimiento de daños sufridos como consecuencia de procesos colectivos abusivos. Ciertamente, no se puede soportar el abuso de la demanda, en especial a partir de la desviación del objetivo de la tutela colectiva, un instrumento importante en la solución de conflictos de masa, útil y necesario a la efectividad de la prestación jurisdiccional.

NOTA FINAL

Consideramos que es preciso destacar que todas las referencias al Código de Proceso Civil de Brasil, en este trabajo, se refieren a la Ley 5.869/1973, de 11 de Enero. Esta puntualización puede ser de porque nos encontramos ante una inminente aprobación de un anteproyecto de ley, de este

modo el Brasil pasará a contar con un nuevo código procesal. El Código de 1973 ha sufrido sucesivas reformas, principalmente, a partir de los años 90, en su mayor parte por un grupo capitaneado por dos grandes procesalistas, hablamos de los Ministros Athos Gusmão Carneiro y Sálvio de Figueiredo Teixeira, que nos brindaron significativas modificaciones, por ejemplo la introducción de la anticipación de la tutela, como tuvimos oportunidad de mencionar en el capítulo séptimo. El nuevo código procesal nacerá con una misión importante: volver más rápida y efectiva la prestación jurisdiccional, en sintonía perfecta con las disposiciones del artículo 7º de la Enmienda Constitucional núm. 45/2004 – la hemos mencionada en el capítulo-. Pero ha sido creado sólo para la resolución de procesos individuales como opción específica de los juristas elegidos para formular el nuevo código.

BIBLIOGRAFIA

ABREU, Pedro Manoel. *Acesso à Justiça e Juizados Especiais*. Disponible en HTTP://br.geocities.com/esmec_2000/pagina1803a.htm. Acceso el 08.06.2008.

ABREU DE MEDEIROS, Bernardo. *Clássicos da Teoria do Direito*, 2006.

AGUIAR DIAS, José de. *Da responsabilidade civil*. Volume I, 8ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

AGUIRREZABAL GRÜNSTEIN, Maite. “La legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y la exigencia de representatividad adecuada”, en *Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje*, I. Tomo XVII, Enero, 2006, pp. 21-40.

ALBINO ZAVASCKI, Teori. *Processo Coletivo. Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos*. 3ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

_____. “Reforma do processo coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais homogêneos e para direitos transindividuais”, en *Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos*. Coord. Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes y Kazuo Watanabe. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 33-38.

_____. “Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos”, en *Revista de Informação Legislativa*. Brasília: Senado Federal, v. 32, num. 127, Jul-Sept 1995, p. 83-96.

ALCADE SANTOS, José A. Artículos Doctrinales: Derecho Procesal Civil. *La interpretación jurisprudencial Del artículo 400 de la LEC*. Disponible en HTTP://noticias.juridicas.com/articulos/60-Derecho%20Procesal%20Civil/200805-544844644645547.html#sys_inicio.

Acceso el 24.07.2013.

ALMAGRO NOSETE, José. “La protección procesal de los intereses difusos en España”, en *Justicia*, 1983, pp. 69-86.

_____. “La responsabilidad judicial civil (España)”, en *La responsabilidad civil y su problemática actual*. Coord. MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, pp. 15-34. Madrid: Dykinson, 2007.

ALMEIDA COSTA, M.J. “Reflexões sobre a obrigação de indemnização. Confrontos luso-brasileiros”, en *Revista de Legislação e de Jurisprudência*. Núm. 3931 e 3932. Feb/2002, pp. 290-299.

ALMEIDA NETO, Amaro Alves. *Processo civil e interesses difusos e coletivos. Questões resolvidas pela doutrina e pela jurisprudência*. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

ÁLVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. “O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais”, en *Processo e Constituição*. Coord. ÁLVARO DE OLIVEIRA, C.A. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 1-16.

_____. “O juiz e o princípio do contraditório”, en *Revista de Processo* Núm. 71, Año 18. JUL-SEP 1993, pp. 31-38.

AMARAL SANTOS, Moacyr. *Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. Processo de conhecimento*. 25ª. ed. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2007.

ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; PELLEGRINI GRINOVER, Ada y RANGEL DINAMARCO, Cândido. *Teoria geral do processo*. 24ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

ARRUDA ALVIM. *Manual de; Direito Processual Civil*. Vol. 1. 11ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

_____. “Deveres das partes e dos procuradores no Direito Processual Civil brasileiro (A lealdade no processo)”, en *Revista de Processo*. Año 18. Jan-Mar 1993. Núm. 69, pp. 7-20.

ARRUDA ALVIM; Thereza, ARRUDA ALVIM, Eduardo y MARINS, James. *Código do Consumidor Comentado*, 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.

ARRUDA ALVIM, Eduardo. “Apontamentos sobre o processo das ações coletivas”, en *Processo Civil Coletivo*, pp. 27-64. Coordinación MAZZEI, Rodrigo y NOLASCO, Rita Dias. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

ARTAVIA BARRANTES, Sergio. “Tutela anticipatoria, cautelar y provisional en el Proceso Civil su estado actual”, en *Estudios en Homenaje al Profesor Enrique Vescovi*. Montevideo 2000, ed. F.C.U. p. 548.

ASSAGRA DE ALMEIDA, Gregório. *Codificação do Direito Processual Coletivo brasileiro*. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

AZEVEDO LOPES, Othon de. *Responsabilidade Jurídica: horizontes, teoria e linguagem*. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. *Curso de Processo Civil*. Volume 1. 4ª. ed. São Paulo: Revista do Tribunais, 1998.

_____. “Direitos individuais homogêneos” e relações jurídicas comunitárias”, en Revista da AJURIS. Ano XXVI. Núm. 79. SEP/2000, pp. 174-192.

_____. “Racionalismo e tutela preventiva em processo civil”, en *Revista dos Tribunais*. São Paulo: RT, num. 801, 2002, p. 40.

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. y GOMES, Fábio. L. *Teoria Geral do processo civil*. 4ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

BAPTISTA MARTINS, Pedro. *O abuso do direito e o ato ilícito*. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados “interesses difusos””, en *Revista de Processo*. Ano VII. Núm. 28. OCT/DEZ 1982, pp. 7-17.

_____. “Responsabilidade das partes por dano processual”, en *Revista de Processo*, Núm. 10. Año 3. ABR-JUN 1978.

_____. “Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos”, en *Revista de Processo*. Ano X. Núm. 39. JUL/SEP 1985, pp. 55-77.

_____. “Ações coletivas na Constituição Federal de 1988”, en *Revista de Processo*. Ano 16. Núm. 619. ENE/MAR 1991, pp. 187-200.

_____. “La iniciativa en la defensa judicial de los intereses difusos y colectivos (un aspecto de la experiencia brasileña)”, en *Temas de Direito Processual*, Quinta Série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 166.

_____. “A ação civil pública e a língua portuguesa”, en *Revista do Ministério Público*, Rio de Janeiro. Núm. 13, 2001, pp. 185-189.

_____. “La definizione di cosa giudicata sostanziale nel Codice di Procedura Civile brasiliano”, en *Revista de Processo*. Ano 29. Núm. 117. SEP/OCT 2004, pp. 42-48.

BELTRAMI, FÁBIO. “Princípios como solução dos ‘hard cases’. Teoria Dwarkiniana”, *Âmbito Jurídico*. Disponible en http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10222&revista_caderno=15. Acceso el 15.02.2013.

BENTHAM, Jeremías, *Tratado de las pruebas judiciales*. E. Dumont (Org.). Manuel Ossorio Florit (trad.). Buenos Aires: Valleta Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971, v. 1.

BERIZONCE, Roberto Omar. “Problemas fundamentales del sistema de justicia civil en Iberoamérica y propuestas de solución” en *Direito Processual Comparado – XIII World Congress of Procedural Law*, pp. 699-706. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

BERNARDINA DE PINHO, Humberto Dalla. “A tutela do interesse coletivo como instrumento polarizador da participação do Ministério Público no processo civil brasileiro”, en *Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro*. Núm. 13. ENE/JUN 2001, pp. 159-173.

BEVILÁQUA, Clóvis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brazil comentado*. Vol. 1. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1959.

BOBBIO, Norberto. *O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito*. Traducción: Márcio Pugliese, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995.

BORGES RETAMOSO, Mariana. “O abuso de direito à luz da teoria geral do direito”, en *Revista de Direito Privado*. Núm. 34. ABR/JUN 2008, pp. 221-285.

BOTELHO JUNQUEIRA, Eliane. "Acesso à justiça: um olhar retrospectivo", en *Revista Estudos Históricos*, n. 18, 1996.

BUJOSA VADELL, Lorenzo-Mateo. *La protección jurisdiccional de los intereses de grupo*. Barcelona: Jose Maria Bosch, 1995.

_____. "La protección de los consumidores y usuarios en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil", en *Revista Jurídica de Catalunya*, 2001, Núm. 4, pp. 969 y ss.

_____. "El procedimiento de las acciones de grupo (class actions) en los Estados Unidos de América", en *Justicia*, 1994, I, pp. 67-124.

_____. "La protección jurisdiccional de los intereses de grupo (colectivos y difusos): estado de la cuestión en España", en *El Tribunal Supremo, su doctrina legal y el recurso de casación. Estudios en Homenaje del Profesor Almagro Nosete*. Director: Vicente Gimeno Sendra. Madrid: Iustel, 2007, pp. 599-668.

BUZAID, Alfredo. "Processo e verdade no direito brasileiro", en *Revista de Processo*. Año XII. Jul-Set 1987. Núm. 47, pp. 92-99.

CABAÑAS GARCÍA, Juan Carlos. *Los procesos civiles sobre consumidores y usuarios y de control de las cláusulas generales de los contratos (con jurisprudencia asociada)*. Madrid: Tecnos, 2005.

_____. *Comentarios prácticos a la nueva ley de enjuiciamiento civil*. Colección estudios procesales. Madrid: Trivium Editorial, 2000.

CALABRESI, Guido. "Acerca de la causa y el derecho de la responsabilidad extracontractual. Un ensayo en honor de Harry Kalven, Jr.", en *La*

responsabilidad extracontractual. Rosenkrantz, Carlos F. (comp.). Barcelona, Gedisa, 2005.

CALAMANDREI, Piero. *Instituciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo código*. Traducción: Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Depalma, 1943.

CAMARGO MANCUSO, Rodolfo. *Jurisdição coletiva e coisa julgada. Teoria Geral das ações coletivas*. 2ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

_____. *Interesses difusos: conceito e legitimação para agir*. 4ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

_____. *Ação popular*. 3ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

_____. “A concomitância de ações coletivas, entre si, e em face das ações individuais”, en *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*. Vol. 96, 2001, pp. 371-409.

CAMEJO FILHO, Walter. “Garantia de acesso à justiça”, en *Processo e Constituição*. Coord. ÁLVARO DE OLIVEIRA, C.A. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 17-46.

CAPPELLETTI, Mauro y GARTH, Bryant. *Acesso à justiça*. Traducción: Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988.

_____. *Processo e ideologie*. Bologna: Il Mulino, 1969.

_____. *Governmental and Private Advocates for the Public Interest in civil litigation: A comparative study*, en AAVV, Book 2, pp 769 y ss.

CARDOSO ARAGÃO, Valdenir. “Um dos caminhos para uma ordem jurídica justa”, en *Constituição, Jurisdição e Processo. Estudos em homenagem aos 55*

anos da revista *Jurídica*. Coord. MOLINNO, Carlos Alberto y GURREIRO MILHORANZA, Mariangela, pp. 623-644.

CARMONA, Carlos Alberto. “A prova pericial e a recente alteração do CPC”, en *Revista de Processo* Núm. 71, Año 18. JUL-SEP 1993, pp. 121-129.

CARNELUTTI, Francesco. *Sistema del diritto processuale*. Volume I. Pádua: CEDAM, 1936.

_____. *Sistema de Direito Processual Civil*. Volumes I e III. São Paulo: Classic Book, 2000. Traducción: Hiltomar Martins Oliveira.

CARPES, Artur. *Ônus dinâmico da prova*. Coleção ALVARO DE OLIVEIRA. Estudos de Processo e Constituição. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2010.

CARPI, Federico. “Flashes sulla tutela giurisdizionale differenziata”, en *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Milano, v. 34, n. 1, p. 237-42, 1980.

CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. *Processo civil. Processo cautelar. Série leituras jurídicas*. São Paulo: Ed. Atlas, 2007.

CASTÁN VÁZQUES, José Maria. “Los conceptos básicos de la responsabilidad civil en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española”, en *Estudios de Responsabilidad Civil en homenaje al Profesor Roberto López Cabaña*, pp. 69-75. Madrid: Dykinson, 2001.

CASTRO MENDES, Aluisio Gonçalves de. *Ações coletivas no direito comparado e nacional. Coleção Temas Atuais de Direito Processual Civil. Vol. 4*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

_____. “O anteprojeto de Código-Modelo de procesos coletivos para os países Íbero-Americanos e a legislação brasileira”, en *Revista de Processo* Núm.117, Año 29. SEP-OCT 2004, pp. 109-128.

CHAMORRO BERNAL, Francisco. *La tutela judicial efectiva (Derechos y garantías procesales del artículo 24.1 de la Constitución)*. Barcelona: Bosch, 1994.

_____. *El artículo 24.1 de la Constitución. Tomo I (El derecho de libre acceso a los tribunales)*. Barcelona: Iura, 2005.

CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de Direito Processual Civil*. Volume. II. 3ª. ed. Traducción: Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 2002.

CONSTANTINO, Giorgio. “Note sulle tecniche di tutela collettiva (disegni di legge sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori)”, en *Rivista di Diritto Processuale*. Año LIX (Secunda Serie). Núm. 4, OCT/DIC 2004.

CORDÓN MORENO, Faustino. “El acceso a la justicia civil de los derechos de los consumidores”, en *Estudios sobre consumo* Núm. 16/1989, pp. 123-130.

CORREIA DE ALMEIDA, Flávio Renato, en *Revista de Processo* Núm. 71, Año 18. JUL-SEP 1993, pp. 46-63.

COUTURE, Eduardo J. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Tercera ed. Buenos Aires: Depalma, 1993.

CRUZ ARENHART, Sérgio. “As ações coletivas e o controle das políticas públicas pelo poder público”, en *Processo Civil Coletivo*, pp. 504-524. Coordinación MAZZEI, Rodrigo y NOLASCO, Rita Dias. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Tempo e processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

_____. *Processo civil realidade e justiça*. São Paulo: Saraiva, 1994.

CUÉLLAR, Leila. *As agências reguladoras e seu poder normativo*. São Paulo: Dialética, 2001.

CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. *Abuso de direito*. Coimbra: Livraria Almedina, 1997.

CUNHA LUNA, Everardo da. *Abuso de Direito*. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1988.

DA COSTA, Susana Henriques. *O processo coletivo na tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa. Ação de improbidade administrativa, ação civil pública e ação popular*. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

_____. “A tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa por meio da ação civil pública e da ação de improbidade administrativa”, en *Processo Civil Coletivo*, pp. 566-588. Coordinación MAZZEI, Rodrigo y NOLASCO, Rita Dias. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

DA SILVA, José Afonso. “Constituição e segurança jurídica”, en *Constituição e Segurança Jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada: estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence*. Coord. Carmen Lúcia Antunes. 2ª. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 16.

DE ARAÚJO, Rodrigo Souza Mendes. “A ação para a tutela dos interesses individuais homogêneos: a class action for damages brasileira?”, en *Processo Civil Coletivo*, pp. 695-719. Coordinación MAZZEI, Rodrigo y NOLASCO, Rita Dias. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

DE ASSIS, Araken. “Garantia de acesso à justiça: benefício da gratuidade”, en *Garantias constitucionais do processo civil*, pp. 9-46. Coord. CRUZ E TUCCI, José Rogério. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

DE CARVALHO, Ruy Cesar Klegen. “A atuação do defensor público na defesa de pessoa juridicamente não-necessitada”. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 11, n. 1261, 14 DEZ 2006.

Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9274>>. Acesso el 04 JUN 2008.

DE JESUS, Damásio E. *Código de Processo Penal anotado*. 13ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.

DE LA OLIVA SANTOS, Andrés; DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio y VEGAS TORRES, Jaime. *Derecho procesal. Introducción*. Tercera ed. Madrid: Ramón Areces, 2004.

_____. *Derecho procesal. El proceso de declaración*. Tercera ed. Madrid: Ramón Areces, 2004

DE MORAES, Alexandre. *Direito Constitucional*. 14ª. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

DE OLIVEIRA, Francisco Antonio. *Ação civil pública*, 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

DEL PINHO, Humberto Dalla Bernardina. “A dimensão da garantia do acesso à justiça na jurisdição coletiva”, en *Temas Contemporâneos de Direito Processual*, pp. 1-16. Organizador: DEL PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

DESTEFENNI, Marcos. *Curso de Processo Civil*. Volume 1. São Paulo: Saraiva, 2006.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 17°. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

DÍAZ ALABART, Silvia. “Nuevas tendencias en la responsabilidad de los menores: el art. 19 de la LORPM”, en *Estudios de Responsabilidad Civil en homenaje al Profesor Roberto López Cabaña*, pp. 79-100. Madrid: Dykinson, 2001.

DIDIER JUNIOR, Fredie. “O controle jurisdicional da legitimação coletiva e as ações coletivas passivas (o art. 82 do CDC)”, en *Revista Dialética de Direito Processual*. Núm. 25, ABR 2005, pp. 50-56.

DIDIER JUNIOR, Fredie, SARNO BRAGA, Paula y OLIVEIRA, Rafael. *Curso de Direito Processual Civil*. Volumes 1, 2 y 4. 7ª. ed. Salvador. Bahia, 2012.

DÍEZ-PICAZO, Luis. “La culpa en la responsabilidad civil extracontractual”, en *Estudios de Responsabilidad Civil en homenaje al Profesor Roberto López Cabaña*, pp. 103-120. Madrid: Dykinson, 2001.

DINIZ, Maria Helena. *Código Civil anotado*. São Paulo: Saraiva, 1997.

DOURADO DE GUSMÃO, Pedro. “O abuso de direito”, en *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 118, p. 359-371, jul. 1948.

DWORKIN, Ronald. *A virtude soberana. A teoria e a prática da igualdade*. Tradução: Jussara Simões. São Paulo WMF Martinsfontes, 2012.

FERNANDES DE SOUZA, Luiz Sérgio. *Abuso de direito processual. Uma teoria pragmática*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. *Abuso del derecho*. Buenos Aires: Ed. Astrea, 1992.

FIDÉLIS DOS SANTOS, Ernane. *Manual de Direito Processual Civil*. Volumes 1, 2 y 3. 12ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela. *El derecho a la tutela judicial efectiva*. Madrid: Tecnos, 1990.

FIUZA, César. “Algumas linhas de processo civil Romano”, en *Direito Processual na história*. Coord. FIUZA, César, pp. 15-58. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.

FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. “Pontos nervosos da tutela coletiva: legitimação, competência e coisa julgada”, en *Processo Civil Coletivo*, pp. 65-80. Coordinación MAZZEI, Rodrigo y NOLASCO, Rita Dias. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

_____. “Os poderes do juiz nas ações coletivas e breves sugestões ‘de lege ferenda’ ao aprimoramento do processo coletivo”, en *Revista de Processo* Núm. 117, Año 29. SEP-OCT 2004, pp. 129-134.

FREITAS CÂMARA, Alexandre. *Lições de Direito Processual Civil*. Volume I. 16ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

FIUZA, Ricardo; ALCOFORADO ASSUNÇÃO, Alexandre Guedes; DABUS MALUF, Carlos Alberto; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; FIGUEIREDO ALVES, Jones; DINIZ, Maria Helena; DELGADO RÉGIS, Mário Luiz; TAVARES DA

SILVA, Regina Beatriz; e, VELOSO, Zeno. *Novo Código Civil comentado*. Coord. FIUZA, Ricardo. São Paulo: Saraiva, 2003.

FURTADO FABRÍCIO, Adroaldo. “A coisa julgada nas ações de alimentos”, en *Revista de Processo*. N. 62 Año 16, Apr-Jun 191, pp. 9-27.

GARDERES, Santiago. “El sistema de La responsabilidad cautelar”, en *Revista Uruguya de Derecho Procesal* 1/2003, pp. 23-41.

GARNICA MARTÍN, Juan F. “Las acciones de grupo en la LEC 1/2000” (I y II), en *La Ley* Año XXII. Núm. 5391 y 5392 OCT/2001.

GASPARETTO LUNARDI, Soraya Regina. “As ideologias do processo e a ação civil pública”, en *Processo Civil Coletivo*, pp. 203-214. Coordinación MAZZEI, Rodrigo y NOLASCO, Rita Dias. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

GIDI, Antonio. *Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos y individuales en Brasil. Un modelo para países de derecho civil*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.

_____. *La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un código modelo para Iberoamérica*. México: Porrúa, 2003.

_____. *A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. As ações coletivas em uma perspectiva comparada*. São Paulo: Revista dos tribunais, 2007.

_____. “Las acciones colectivas en Estados Unidos”, en *Direito e Sociedade*, v. 3, Núm. 1, ENE/JUN 2004, pp. 115-148.

_____. "A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta", en *Revista de Processo*. Ano 27. OCT/DEC 2002, pp. 61-70.

_____. "Código de Processo Civil Coletivo. Um modelo para países de direito escrito", en *Direito e Sociedade*. Vol. 3. Núm. 1. ENE/JUN 2004, pp. 87-114.

_____. "Class actions in Brazil – a model for civil law countries", en *The American Journal of Comparative Law*. Vol. LI. Núm. 2, 2003.

_____. "The class action code: a model for civil law countries", en *Arizona Journal of International and Comparative Law*. Vol. 23. Núm 1, 2005.

GOMES CANOTILHO, J.J. *Direito Constitucional*. Coimbra: Almedina, 1996.

GOMES CANOTILHO, J.J. Y VITAL MOREIRA. *Constituição da República Portuguesa. Lei do Tribunal Constitucional*. 7ª. ed. Coimbra: Coimbra ed., 2005.

GOMES JUNIOR, Luiz Manoel. *Curso de Direito Processual Civil Coletivo*. 2ª. ed. São Paulo: SRS Editora, 2008.

GOMES JUNIOR, Luiz Manoel y DE OLIVEIRA, Ricardo Alves. "O sistema da responsabilidade civil e os danos processuais nas ações coletivas", en *Revista dos Tribunais*. Año 96. Set/2007. Vol. 863. São Paulo, pp. 36-56.

GOMES SANTORO, Fernando J. "Medidas cautelares y anticipativas", en *Revista Uruguaya de Derecho Procesal* 2/2005, pp. 341-349.

GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, F., "La legitimación colectiva y el art. 7 de la L.O.P.J.", *Justicia*, 1988, nº3, pp. 549-576.

GONZÁLEZ CANO, Maria Isabel. *La tutela colectiva de consumidores y usuarios en el proceso civil*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.

GONÇALVES CORREIA, Marcus Orione. *Direito Processual Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2002.

GRECO FILHO, Vicente. *Direito Processual Civil brasileiro*, Volume 1, 19ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

GREIF, Jaime. “La cosa juzgada. En especial en los procesos colectivos”, **en** *Revista Uruguaya de Derecho Procesal* 2/2005, pp. 351-365.

GUSMÃO CARNEIRO, Athos. *Da antecipação de tutela*. Exposição didática. 7ª. Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, *La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos*. Navarra: Aranzadi, 1999.

JIMENO BLUNES, María del Mar. “La protección judicial de los consumidores en el ámbito comunitario: el “libro verde” de acceso a la justicia”, en *Revista de Estudios Europeos*, Núm. 9. Enero-Abril 1995, pp. 13-38.

_____. “Nuevas perspectivas sobre la legitimación colectiva: el modelo social anglosajón”, en *Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje*. Núm. 3. Tomo XII, Septiembre, 2000. pp. 537-569.

KELSEN, Hans. *Teoria geral do direito e do Estado*. Trad. Luís Carlos Borges. Brasília: Ed. Univeridade de Brasília, 1990.

_____. *Teoría pura del Derecho*. Trad. M. Nilve. 4ª. ed., 9ª. reimpressão. Buenos Aires: Eudeba, 2009.

KOCHENBORGER SCARPARO, Eduardo. "O processo como instrumento dos direitos fundamentais", en *Revista de Direito UFPR*. Núm. 45-2006, pp. 169-186.

LAFUENTE TORRALBA, Alberto José. "La evolución de la tutela cautelar desde una perspectiva internacional: Hacia la autonomía de las medidas anticipatorias", en *Revista de Derecho Procesal dirigida a Iberoamérica*. Año 2007, pp. 507-537.

LANDONI SOSA, Angel. "El abuso Del proceso y el exceso en el ejercicio de los poderes del juzgador en el ámbito de las medidas cautelares", en *Revista Uruguaya de Derecho Procesal* 3/2004, pp. 249-266.

LANDONI SOSA, Angel y GARDERES, Santiago. "La acción colectiva pasiva", en *Revista Uruguaya de Derecho Procesal* 3/2004, pp. 321-326.

LAURIA TUCCI, Rogério y CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Constituição de 1988 e processo*. São Paulo: Saraiva, 1989.

_____. "Ação civil pública: abusiva utilização pelo Ministério Público e distorção pelo Poder Judiciário", en *Revista Síntese de Direito Civil e Direito Processual Civil*, núm. 18, julio-agosto/2002, pp. 355-392

LEBRE DE FREITAS, José. *Código de Processo Civil Anotado*. Volume 1º. Lisboa: Coimbra Editora, 1999.

_____. "A acção popular do direito português", en *Revista Sub Judice Justiça e Sociedade* Núm. 24 Jan/Mar 2003, PP. 15-26. Coimbra.

LEE, Thomas R. "Preliminary Injunctions and the status quo". *Washington and Lee Law Review*. N. 58, 2001, pp. 109-167.

LETTIERE, Juliana. "O acesso à justiça e a mediação", en *Direito Constitucional temas atuais, homenagem à Professora Leda Pereira da Mota*. Coord. Riberto B. Dias da Silva. São Paulo: Método, 2007, pp. 75-92.

LIEBMAN, Enrico Tullio. *Eficácia e Autoridade da Sentença e outros escritos sobre a coisa julgada (Com aditamentos relativos ao direito brasileiro)*. Traducción: Alfredo Buzaid y Benvindo Aires. Rio de Janeiro: Forense, 1945.

LOPES MEIRELLES, Hely. *Mandado de Segurança*, 15ª. ed. Actualizada por Arnald Wald. São Paulo: Malheiros, 1994.

LORCA NAVARRETE, Antonio María, "La garantía de acceso a la demanda de tutela judicial efectiva por los titulares: las partes procesales". *Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje*, Vol. 21, núm. 1, 2009, pp. 21-28.

_____. "La garantía a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de intereses legítimos. La legitimación de la parte", *Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje*, Vol. 21, núm. 2, 2009, pp. 315-318.

LOZANO HIGUERO-PINTO, Manuel, *La protección procesal de los intereses difusos*. Madrid: 1983.

_____. *Introducción al Derecho procesal*. Madrid: Ministerio de Justicia, 1990.

LUCAS, J.R. *Responsability*. New York: Clarendon Press, 1993.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Teoria geral do processo*. Volume 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

_____. *Tutela cautelar e tutela antecipatória*. 1ª. ed. 2ª. tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

_____. *Novas linhas do processo civil*. São Paulo, Malheiros, 1999.

_____. “El derecho de acción en La Constitución Brasileña”, en *Revista de Derecho Procesal dirigida a Iberoamérica*, Año 2007, pp. 471-496.

_____. “Do processo civil clássico à noção de direito à tutela adequada ao direito material e à realidade social”. *Jus Navigandi*. Disponible en <http://jus.com.br/texto/5046/> Acceso el 19.02.2013.

MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. *Manual do Processo de Conhecimento*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. *Fundamentos constitucionais do processo (sob a perspectiva da eficácia dos direitos e garantias fundamentais)*. São Paulo, Malheiros, 2002.

MARTÍN BERNAL, José Manuel. *El abuso del derecho*. Madrid: Montecorvo, 1982.

MARTIN OSTOS, José dos Santos. *Las diligencias para mejor proveer em processo civil*. Madrid: Editorial MONTecarvo S.A., 1981.

MARTINS RIBEIRO, Rodrigo Pereira. “O Ministério Público na jurisdição coletiva: a tutela do direito individual homogêneo”, en *Temas Contemporâneos de Direito Processual*, pp. 149-203. Organizador: DEL PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

MENDONÇA LIMA, Alcides de. “O princípio da proibidade no Código de Processo Civil brasileiro”, en *Revista de Processo*. Núm. 16. Año 4. Out–Dic 1979. Núm. 16, pp. 15-42.

_____. “Abuso do direito de demandar”, en *Revista de Processo*. Año V. Jul-Set 1980. Núm. 19, pp. 57-66.

MENEZES VIGLIAR, José Marcelo. *Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos – Apontamentos*. Volume III. Coleção temas de processo civil. Coord. Fredie Didier Júnior. Salvador: Podivm, 2005.

_____. *Ação civil pública – Lei 7.347/1985 – 15 anos*. Coord. Édis Milaré. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pp. 406-407 y 416.

MIRANDA, Jorge. *Manual de Direito Constitucional*. Tomo I, 6ª. ed. Lisboa: Coimbra, 1997.

_____. *Manual de Direito Constitucional*. Tomo IV, 3ª. ed. Lisboa: Coimbra, 2000.

_____. *Constituição e processo civil, en Direito e Justiça – Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa*. Volume VIII. Tomo 2, 1994, pp 9-26.

MIRANDA BARBOSA, Mafalda. “Reflexões em torno da responsabilidade civil: teleologia e teleonomologia em debate”. *Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra*. Vol. LXXXI, 2005.

MIYASATO DE FARIA, RENATO LUIZ. “Entendendo os principios através de Ronald Dworkin”. *Jus Navigandi*.

Disponibile en <http://jus.com.br/revista/texto/14581/entendendo-os-principios-atraves-de-ronald-dworkin>. Acceso el 15.02.2013.

MONROY GÁLVEZ, Juan. *Introducción al proceso civil. Tomo I. Santa Fé de Bogotá: Temis de Belaunde & Monroy, 1996*.

MONTENEGRO FILHO, Misael. “A importância da ação civil pública no panorama da abarrotada justiça brasileira: vicissitudes e perigo da ação em estudo”, en *Processo Civil Coletivo*, pp. 172-182. Coordinación MAZZEI, Rodrigo y NOLASCO, Rita Dias. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

MONTERO AROCA, Juan. *La legitimación en el proceso civil*. Madrid: Civitas. 1994.

_____. “En torno al concepto y contenido del derecho jurisdiccional”, en *Revista de derecho procesal iberoamericana*, 1976, pp. 155-189.

MONTÉS PENADES, VICENTE L. “La responsabilidad por dolo”, en *La responsabilidad civil y su problemática actual*. Coord. MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, pp. 719-746. Madrid: Dykinson, 2007.

MULHERON, Rachel. *The Class Action in Common Law Legal Systems*. Oxford – Portland Oregon: Hart Publishing, 2004.

MULLENIX, Linda S. “New Trends in Standing and Res Judicata in Collective Suits. General Report – Common Law” en *Direito Processual Comparado – XIII World Congress of Procedural Law*, pp. 500-533. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

MUÑOZ ALFONSO, Bisel. *El abuso del derecho y La tutela del medio ambiente*. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos15/abuso-derecho/abuso-derecho.shtml>. Acceso el 23.10.2009.

NAJJAR ABDO, Helena. *O abuso do processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

NERY JÚNIOR, Nelson. *Princípios do processo civil na Constituição Federal*. 7ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

NERY JÚNIOR, Nelson y ANDRADE NERY, Rosa Maria de. *Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante*. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

NICASTRO, Gustavo, SÁNCHEZ, Verónica y ZANELLA, Natalia. “La regla moral en el desarrollo del proceso”, *en Revista Uruguaya de Derecho Procesal* 1-2003, pp. 43-70.

NIGRO MAZZILLI, Hugo. *O acesso à justiça e o Ministério Público*. 5ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. *A defesa dos interesses difusos em juízo*. 17ª. ed. São Paulo, 2004.

_____. *Inquérito civil*. São Paulo: Saraiva, 2000.

OLIVEIRA LIMA, Maria Rosynete. *Devido processo legal*. Porto Alegre: Safe, 1999.

PALACIO HINCAPIÉ, Juan Angel. *Derecho Procesal Administrativo*. Sexta edición. Medellín: Librería Jurídica Sanchez R. Ltda., 2006.

PALLARETTI CALCINI, Fábio. “Abuso do direito e o novo Código Civil”, *en Revista dos Tribunais*. Año 93. Volume 830. Dec/2004, pp.27-39.

PAYAN MARTINS, António. *Class actions em Portugal? Lisboa: Cosmos, 1999*.

PELLEGRINI GRINOVER, Ada; VASCONCELOS E BENJAMIN, Antônio Herman; ROBERTO FINK, Daniel; BRITO FILOMENO, José Geraldo; WATANABE, Kazuo; NERY JÚNIOR, Nelson; y, DENARI, Zelmo. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto*. São Paulo, Forense Universitária, 1995.

PELLEGRINI GRINOVER, Ada. *O processo em evolução*. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998.

_____. “As garantias constitucionais do processo nas ações coletivas”, *em Revista de Processo* n. 43. Ano 11, junho-setembro, 1986, pp. 19-30.

_____. “Ações coletivas ibero-americanas: novas questões sobre a legitimação e a coisa julgada”, *em Revista Forense* n. 36, Rio de Janeiro, 2002.

_____. “Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações coletivas. Relatório Geral – Civil Law”, *em Direito Processual Comparado – XIII World Congress of Procedural Law*, pp. 326-499. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

PEREIRA CAMPOS, Santiago. “Los procesos colectivos. Anteproyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica”, *em Revista Uruguay de Derecho Procesal* 3/2003, pp. 333-366.

PÉREZ RAGONE, Alvaro J.D. “¿ Necesitamos los procesos colectivos? En torno a La justificación y legitimidad jurídica de la tutela de intereses multisubjetivos”, *em Revista de Derecho Procesal dirigida a Iberoamerica*. Año 2005, pp. 611-671.

PEYRANO, Jorge W. “Medida autosatisfactiva y tutela anticipada de urgência”, *em La Ley* 21/09/2012.

PREUSS DUARTE, Ronnie. *Garantia de acesso à justiça*. Coimbra: Coimbra, 2007.

_____. “Boa-fé, abuso de direito e o novo Código Civil brasileiro”, *em Revista dos Tribunais*. Año 92. Volume 817. Nov 2003, pp. 50-78.

PROTO PISANI, Andrea. *Le azioni a tutela di interessi collettivi*. Padova: CEDAM, 1976.

PUNZI, Carmine. “La tutela giudiziale degli interessi collettivi”, en *Rivista di Diritto Processuale*. Año LVII (Secunda Serie). Núm. 3, JUL/SEP 2002.

_____. “La tutela giudiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi”, **en** *La tutela giudiziale degli interessi collettivi e diffusi*. Coordinación Lucio Lanfranchi. Torino: Colimus, 2003, pp. 17-41.

RAMOS ROMEU, Francisco. *Las medidas cautelares civiles. Un análisis jurídico-económico*. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2006.

RANGEL DINAMARCO, Cândido. *A instrumentalidade do processo*. 3ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 1993.

_____. *Instituições de Direito Processual Civil*. Volumes I y II, 5ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

_____. *Fundamentos do Processo Civil moderno*. Tomo I. 5ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

REALE, Miguel. *Da ação civil pública. Questões de Direito Público*. São Paulo: Saraiva, 1997.

REGLERO CAMPOS, L. Fernando. *Lecciones de responsabilidad civil*. Coord. REGLERO CAMPOS, L. Fernando. Navarra: Aranzadi, 2002.

_____. “La responsabilidad civil de abogados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en *Revista Jurídica Interdisciplinar Internacional*. Núm. 11-2007, pp. 785-813.

RENAULT GODINHO, Robson. “O Ministério Público e a tutela jurisdiccional coletiva dos direitos dos idosos”, en *Processo Civil Coletivo*. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 608-639.

RIBEIRO DE OLIVEIRA, Eduardo. “O acesso à justiça e alguns novos instrumentos processuais”. Conferencia pronunciada en “Ciclo de Conferencias para Jueces Federales”, Dec/1991, en *Revista de processo*, n. 71 Año 18 – Jul-Sept. 1993.

RIBEIRO LOPES, Maurício Antonio. “*Garantia de acesso à justiça: assistência judiciária e seu perfil constitucional*”, en *Garantias constitucionais do processo civil*, pp. 47-90. Coord. CRUZ E TUCCI, José Rogério. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

RIBERTO SCHETTINO, José Gomes. “A tutela dos direitos individuais homogêneos pelo Ministério Público”, en *Temas Contemporâneos de Direito Processual*, pp. 149-203. Organizador: DEL PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

ROCA, Encarna. *Derechos de daños: Textos y materiales*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1996.

ROSA TESHEINER, José Maria. “*Situações subjetivas e processo*” en *Revista de Processo*. Año 27. Jul-Set 2002, pp. 18-23.

ROSAS, Roberto. “Abuso de direito e dano processual”, en *Revista de Processo*. Año VIII. Oct-Dic 1983. Núm. 32, pp. 28-38.

SAHIONE FADEL, Sergio. *Antecipação da tutela no processo civil*. 2ª. ed. São Paulo: Dialética, 2002.

SALVO VENOSA, Sílvio de. *Direito Civil. Responsabilidade civil*. 4ª. ed. São Paulo: Atlas Ed., 2004.

SANTOS BEDAQUE, José Roberto dos. *Direito e processo. Influência do direito material sobre o processo*. 2ª. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.

_____. *Poderes instrutórios do juiz*. 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

SANTOS BEZERRA, Paulo César. *Acesso à justiça Um problema ético-social no plano da realização do direito*. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

_____. “O acesso aos direitos e à justiça”, en *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*. Vol. LXXXI, 2005, pp. 775-796.

SANTOS LUCON, Paulo Henrique. “Garantia do tratamento paritário das partes”, en *Garantias constitucionais do processo civil*, pp.9-46. Coord. CRUZ E TUCCI, José Rogério. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

SCARPINELLA BUENO, Cassio. *Curso sistematizado de Direito Processual Civil*. Volume I. São Paulo: Saraiva, 2007.

SERPA LOPES. *Curso de Direito Civil*. Vol. 1. Rio de Janeiro: Livraria Freitas, 1960.

SHERIDAN, L.A. *Injunctions and Similar Orders*. Barry Rose Law Publishers.

SHIMURA, Sérgio. “O papel da associação na ação civil pública”, en *Processo Civil Coletivo*, pp. 142-169. Coordenação MAZZEI, Rodrigo y NOLASCO, Rita Dias. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

SILGUERO ESTAGNAN, Joaquín. *La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos*. Madrid: Dykinson. 1995.

_____. “La protección procesal del interés colectivo de los consumidores”, en *Estudios sobre consumo*, Núm. 49/1999, pp. 73 y ss.

_____. “Las acciones colectivas de grupo”, en *Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje*. Núm. 3. Tomo XV, Septiembre, 2003. pp. 615 y ss.

_____. “Las acciones colectivas de grupo en España”, en *Procesos Colectivos. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en una perspectiva comparada*. Coordinadores Antonio Gidi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor. México: Editorial Porruá, 2004, pp. 337-379.

SILVA DINAMARCO, Pedro. *Ação civil pública*. São Paulo: Saraiva, 2001.

SILVA MARTINS, Ives Gandra da. “Ação civil pública para a defesa de direitos individuais disponíveis e divisíveis – inadequação do veículo processual – Constitucionalidade de taxas para prestação de serviços públicos específicos e divisíveis da prefeitura de Taubaté”, **en** *Revista de Processo*, n. 75, julho/setembro de 1994.

SIMÓN, Luis María. “La aplicación del Código Procesal Civil Modelo en Iberoamérica”, en *Revista Uruguaya de Derecho Procesal* 3/2003, pp. 379-397

SOUZA CRUZ, Álvaro Ricardo de. *Hermenêutica e jurisdição constitucional*. Coordinadores: José Adércio Leite Sampaio y Álvaro Ricardo de Souza Cruz. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

SOUZA MALCHER, Wilson. *Intervenção de terceiros nas ações coletivas*. Curitiba: Juruá, 2008.

STIGLITZ, Gabriel A. *Protección jurídica del consumidor*. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1986.

TALAMINI, Eduardo. “Partes, terceiros e coisa julgada (os limites subjetivos da coisa julgada)”, en *Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins*. Coordinación: Fredie Didier Júnior y Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: TR, 2004, p. 203.

TARUFFO, Michele. “Modelli di tutela giurisdizionale degli interessi collettivi”, en *La tutela giudiziale degli interessi collettivi e diffusi*. Coordinación Lucio Lanfranchi. Torino: Colimus, 2003, pp.53-65.

TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel. *A legitimidade popular na tutela dos interesses difusos*. Lisboa: Lex, 2003.

_____. “Aspectos metodológicos e didáticos do Direito Processual Civil”, en *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*. Volume XXXV, 1994, pp. 337-438.

_____. “Apreciação de Alguns Aspectos da “Revisão do Processo Civil – Projecto”, en *Revista da Ordem dos Advogados*. Ano 55. Lisboa, 1995.

_____. “A tutela jurisdicional dos interesses difusos no direito português”, *Estudos de Direito do Consumidor*, Núm. 6, Centro de Direito do Consumo da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra, 2004.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil*. Volume I. 47ª. ed. Rio de Janeiro: Forense 2007.

TOHARIA CORTÉS, José Juan. “¿De qué se quejan los españoles cuando hablan de su administración de justicia”?, **en** *Manuales de Formación*

Continuada 24/2004, Ética del juez y garantías procesales, Consejo General del Poder Judicial, pp. 99-136. Madrid, 2004.

TOMMASEO, Ferruccio. "Intervento", en *Les mesures provisoires en procédure civile*. Colloquio Internazionale, 1984, Milano, *Atti del...* Milano, Giuffrè, 1985, p. 301-7

VALLESPIN PÉREZ, David. *El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil*. Barcelona: Atelier, 2002.

VARANDAS ARARUNA, Eduardo. *A tutela coletiva dos interesses homogêneos*. Monografía de Maestría en Ciencias jurídico-procesal, presentada a la Facultad de Derecho de La Universidad de Coimbra – Portugal, 2005.

VARGAS, Abraham Luis. *Tutela anticipada. Perfiles actuales*, en *Sup. Procesal* 2005 (octubre) 11/10/2005, 174.

VIGORITI, Vincenzo. *Interessi collettivi e processo. La legittimazione ad agire*. Milano: A. Giuffrè, 1979.

_____. "Due Processo of Law", en *Digesto delle discipline provatistiche*. Sezione Civile. Turim: UTET, 1991.

VILLAR FUENTES, Isabel Maria. "Algunas reflexiones sobre la legitimación para la protección de los intereses de los consumidores y usuarios", en *Justicia*, 2001, Núm. 1, pp. 123-148.

VITAL NAVES, Nilson. *Acesso à justiça*, conferencia de abertura del "Seminario sobre el acceso a la justicia", Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil, 24/04/2003, **en** R. CEJ N. 22, pp. 5-7

YOSHIDA, C. Y. (2005). “Eficácia das tutelas urgentes nas ações coletivas. Efeitos dos recursos. Suspensão de liminar e de sentença”. En: R. M. Nolasco, *Processo Civil Coletivo* (p. 363/391). São Paulo: Quartier Latin. *Apud* Kazuo Watanabe, *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor*, p. 767.

JURISPRUDENCIA

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 170.768/SP. Partes: Wady Mucare y otros y Carlos Eduardo Mendonça Melluso. Relator: Min. Ilmar Galvão. DJ 13.09.1999.

<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=218664>.

Acceso el 11.10.2008.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp 910.625/RJ. Partes: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro y Edio Diniz Ferreira y otros y *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valença*. Relator: Ministro Francisco Falcão. DJe 04.09.2008.

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=773538&sReg=200602732272&sData=20080904&formato=PDF. Acceso el 13.09.2010.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp 579.541/SP. Partes: Paschoal Thomeu y Empresa Jornalística Folha Metropolitana S / A. Relator: Min. José Delgado. DJ: 19.04.2004.

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=455883&sReg=200301298896&sData=20040419&formato=PDF. Acceso el 23.10.2009.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp 474.475 / SP. Partes: Prefeitura Municipal de Bady Bassit y otros y João Luiz Donzellini y otros. Relator: Min. Luiz Fux. DJ: 25.02.2003.

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=449166&sReg=200201089461&sData=20040225&formato=PDF. Acceso el 23.10.2009.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp 818.725 Relator: Ministro Luiz Fux, DJ. 13.05.2008.

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=779822&sReg=200600300254&sData=20080616&formato=PDF. Acceso el 09.09.2010.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.173.848. Partes: Osvaldo Salles y CSZ Administradora de Cartões de Crédito, Comércio e Participações Ltda. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 10.05.2010. Disponible en https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=954948&sReg=200801197294&sData=20100510&formato=PDF. Acceso el 10.11.2010.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1060753 / SP. Segunda Turma. Ministra ELIANA CALMON. Data de juzgamiento 01/12/2009. DJe 14/12/2009). Partes: RODRIMAR S/A Transportes Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais e Fazenda do Estado de São Paulo. Disponible en https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=933448&sReg=200801130826&sData=20091214&formato=PDF. Acceso el 21.02.2013.

_____. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Agravo em Recurso Especial 294.672/DF. Data de juzgamiento 02/05/2013. DJe 16/05/2013. Partes: Fazenda Nacional e Maria Aparecida de Souza e outros. Disponible <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=%28mandado+e+seguran%27a+e+paradigma+e+1.243.887%2FPR%29+E+%28%22HUMBERTO+MARTINS%22%29.min.&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=2>. Acceso el 09.08.2013.

_____. Tribunal Regional Federal da 4ª. Região. Apelação Civil num. 2004.70.00017083-1/PR. Partes: Ministério Público Federal y União Federal y CEF. Relator: DF Edgard Antonio Lippmann Júnior. DE 11.09.2007. http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=1750739&hash=999696925d71cdcfad166176573c63b6. Acceso el 09.09.2010.

_____. Tribunal Regional Federal da 4ª. Região. Apelação Civil num. 2006.71.00.028262-0/RS. Partes: CEF y Oscar Bacilicia da Conceição. Relator: JF Nicolau Konkl Junior. DE 28.01.2010. http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=3302640&hash=b5abe88e022321e8a2fbc80e6eefa057. Acceso el 03.10.2010.

_____.Tribunal Regional Federal da 4ª. Região. Apelação Civil num. 2008.70.00.014491-6/PR. Partes: Américo Augusto Nogueira Vieira y Universidade Federal do Paraná. Relator: JF Sérgio Renato Tejada. http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=3165413&hash=e6347add1c9b9965ada7cdf9d824a929. Acceso el 06.10.2010.

_____. Tribunal Regional da 4ª. Região. Apelação Civil num. 2008.72.04.000647-0/SC. Partes: União Federal y Luiz Augusto da Silva Severo. Relator JF Marcos Roberto Araújo dos Santos. http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=3207455&hash=d2e51a262dbbfc0a5d09d00b3fa3903c. Acceso el 07.10.2010.

_____. Tribunal Regional da 4ª. Região. Agravo de Instrumento num. 2009.04.00.028369-4/RS. Partes: Edgard Darcy Schulz Nobert y INSS. Relator DF Celso Kipper. http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=3042619&hash=240e3f6d184d35c40b38218ccd139905. Acceso el 19.05.2010.

PÁGINAS WEB

BRASIL

http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_1862.html.

Acceso el 10.07.2010

http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/brasil/02_892.pdf. Acceso el 11.07.2010.

<http://www.dialogocomosfilosofos.com.br/category/kant/>. Acceso el 10.07.2010.

<http://www.dialogocomosfilosofos.com.br/category/kant/>. Acceso el 10.07.2010.

<http://www.culturabrasil.org/beccaria.htm>. Acceso el 10.07.2010.

<http://jnheck.com/filosofiadodireito2.pdf>. Acceso el 09.07.2010.

<http://www.monografias.com/trabajos28/positivismo-juridico/positivismo-juridico.shtml>. Acceso el 13.08.2010.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.htm. Acceso el 04.05.2013.

ESPAÑA

http://www.datadiar.com/actual/legislacion/ambiente/rdl1_01.htm. Acceso el 19.05.2010.

<http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofia-griega/Filosofia-helenistica/Epicureismo.htm>. Acceso el 19.06.2010.

http://www.webdianoia.com/moderna/descartes/desc_cogito.htm. Acceso el 07.07.2010.

http://www.medynet.com/elmedico/tributaria/ts_11032000.htm. Acceso el 14.06.2009.

<http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Montesquieu>. Acceso el 10.07.2010.

<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/montes.html>. Acceso el 10.07.2010.

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=33723>, acceso el 04.05.2013.

NACIONES UNIDAS

<http://www.un.org/es/documents/udhr/>. Acceso el 04.10.2007.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Departamento de Derecho Internacional.

<http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html>. Acceso el 04.10.2007

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

<http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/SpanishEspagnol.pdf>. Acceso el 04.10.2007.

VENEZUELA

<http://www.ameritalia.id.usb.ve/piazz.studi.storia.002.roma.diritto.htm>. Acceso el 19.06.2010.

ANEXOS

I. Lei brasileira nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências¹

(...)

TÍTULO III

Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

¹ Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (SUPRIMIDO)

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: [\(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995\)](#)

I - o Ministério Público,

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 2º [\(Vetado\)](#).

§ 3º [\(Vetado\)](#).

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Parágrafo único. [\(Vetado\)](#).

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2º A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa ([art. 287, do Código de Processo Civil](#)).

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.

Art. 85. [\(Vetado\)](#).

Art. 86. [\(Vetado\)](#).

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denúncia da lide.

Art. 89. [\(Vetado\)](#)

Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da [Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985](#), inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.

CAPÍTULO II

Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos

Art 91. Os legitimados de que trata o art. 81 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes (SUPRIMIDO).

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. [\(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995\)](#)

Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Parágrafo único. [\(Vetado\)](#).

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Art. 96. [\(Vetado\)](#).

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Parágrafo único. [\(Vetado\)](#).

Art 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 81, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. ([Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995](#))

§ 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2º É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.

Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na [Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985](#) e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela [Lei nº7.347 de 24 de julho de 1985](#), ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela [Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985](#).

CAPÍTULO III

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do [art. 80 do Código de Processo Civil](#). Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal.

§ 1º [\(Vetado\)](#).

§ 2º [\(Vetado\)](#)

CAPÍTULO IV

Da Coisa Julgada

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o [art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985](#), não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

TÍTULO IV

Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições;

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;

X - [\(Vetado\)](#).

XI - [\(Vetado\)](#).

XII - [\(Vetado\)](#)

XIII - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica.

TÍTULO V

Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

Art. 108. [\(Vetado\)](#).

TÍTULO VI

Disposições Finais

Art. 109. [\(Vetado\)](#).

Art. 110. Acrescente-se o seguinte [inciso IV ao art. 1º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985](#):

["IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo"](#).

Art. 111. O inciso II do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo".

Art. 112. O § 3º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa".

Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§ 4º, 5º e 6º ao art. 5º. da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985:

"§ 4.º O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 5.º Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. [\(Vide Mensagem de veto\)](#)
[\(Vide REsp 222582 /MG - STJ\)](#)

§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial". [\(Vide Mensagem de veto\)](#) [\(Vide REsp 222582 /MG - STJ\)](#)

Art. 114. O art. 15 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados".

Art. 115. Suprima-se o [caput do art. 17 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985](#), passando o parágrafo único a constituir o caput, com a seguinte redação:

"Art. 17. "Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente

condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos”.

Art. 116. Dê-se a seguinte redação ao art. 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985:

"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais".

Art. 117. Acrescente-se à Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes:

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor".

II. Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberomérica²

RELATORES

ADA PELLEGRINI GRINOVER

KAZUO WATANABE

ANTONIO GIDI

COMISION DE REVISIÓN

ALUISIO G. DE CASTRO MENDES

ANGEL LANDONI SOSA

ANIBAL QUIROGA LEON

ENRIQUE M. FALCON

JOSE LUIS VAZQUEZ SOTELO

RAMIRO BEJARANO GUZMÁN (VOTO DE ABSTENCIÓN)

ROBERTO BERIZONCE

SERGIO ARTAVIA

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL

INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE DIREITO PROCESSUAL

CÓDIGO MODELO DE PROCESOS COLECTIVOS PARA IBEROAMÉRICA

(APROBADO EN CARACAS EL 28 DE OCTUBRE DE 2004)

² Puede encontrarse en la página web del Instituto Brasileiro de Direito Processual: <http://www.direitoprocessual.org.br/download.php?f=c386737dbbd1e1e8e905ed750a3f42f5>

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sumario: 1 – Significado social y político de la tutela de los intereses o derechos transindividuales; 2 – El sistema de *common law*: las *class actions* norteamericanas; 3 – El sistema de *civil law*: el tratamiento de la materia en los países de Iberoamérica; 4 – La necesidad de un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica; 5 – El modelo del Código: un sistema supra-nacional adecuado a la realidad de los países de la comunidad iberoamericana; 6 – Breve síntesis del contenido del Código; 7 – Conclusión.

1 - Tiene sabor a lugar común la afirmación de que el proceso tradicional no se adecua a la defensa de los derechos e intereses transindividuales, cuyas características los colocan a mitad de camino entre el interés público y el privado, siendo propios de una sociedad globalizada y resultado de conflictos de masa. Asimismo es clara la dimensión social del reconocimiento y tutela de los derechos e intereses transindividuales, por ser comunes a una colectividad de personas, y solamente a éstas. Intereses difusos y dirigidos a la tutela de necesidades colectivas, sintéticamente referibles a la calidad de vida. Intereses de masas, que comportan ofensas de masas y que colocan en contraste a grupos, categorías, clases de personas. No se trata ya de un haz de líneas paralelas, sino de un abanico de líneas que convergen hacia un objeto común e indivisible. Aquí se insertan los intereses de los consumidores, a la protección del ambiente, de los usuarios de servicios públicos, de los inversores, de los beneficiarios de la Previsión Social y de todos aquellos que integran una comunidad compartiendo sus necesidades y sus anhelos.

El reconocimiento y la necesidad de tutela de esos intereses pusieron de relieve su configuración política. En consecuencia, la teoría de las libertades públicas forjó una nueva “generación” de derechos fundamentales. A los derechos clásicos de primera generación, representados por las tradicionales libertades negativas, propias del Estado liberal, con el correspondiente deber de abstención por parte del Poder Público; a los derechos de segunda generación, de carácter económico-social, compuestos por libertades positivas, con el correlativo deber del Estado a un *dar, hacer o prestar*, la teoría constitucional

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

agregó una tercera generación de derechos fundamentales, representados por los *derechos de solidaridad*, resultantes de los referidos intereses sociales. Y, a medida que el derecho constitucional reconoce a esos intereses la naturaleza jurídica de *derechos*, no se justifica ya la clásica discusión en torno de que esas situaciones de ventaja configuren intereses o derechos.

2 – En los sistemas del *common law* la tutela de los intereses o derechos transindividuales es tradicional: el instituto de las *class actions* del sistema norteamericano, basado en la *equity* y con antecedentes en el *Bill of Peace* del siglo XVII, fue siendo ampliado adquiriendo paulatinamente un papel central en el ordenamiento. Las *Federal Rules of Civil Procedure* de 1938 fijaron, en la regla 23, las normas fundamentales rectoras de las *class actions*. Las dificultades prácticas, en cuanto a la configuración y requisitos de una u otra de sus categorías, con tratamiento procesal propio, llevaron al *Advisory Committee on Civil Rules* a modificar la disciplina de la materia en la revisión hecha por las *Federal Rules* de 1966, las cuales están siendo nuevamente trabajadas para eventuales modificaciones.

3 – En los sistemas del *civil law*, correspondió al Brasil la primacía de introducir en el ordenamiento la tutela de los intereses difusos y colectivos, de naturaleza indivisible, en primer término por la reforma de 1977 de la Ley de la Acción Popular; después, mediante la ley específica de 1985 sobre la denominada “acción civil pública”; siguiendo, en 1988, cuando se eleva a nivel constitucional la protección de los referidos intereses; y finalmente, en 1990, por el Código de Defensa del Consumidor (cuyas disposiciones procesales son aplicables a la tutela de todo y cualquier interés o derecho transindividual). Este Código fue más allá de la dicotomía de los intereses difusos y colectivos, creando la categoría de los llamados *intereses individuales homogéneos*, que abrieron camino a las acciones reparatoras de los perjuicios individualmente sufridos (correspondiendo, en el sistema norteamericano, a las *class actions for damages*).

El Código Modelo de Proceso Civil para Iberoamérica recogió la idea brasileña de la tutela jurisdiccional de los intereses difusos, con algunas modificaciones en relación a la legitimación (que incluye cualquier interesado) y al control sobre la representatividad adecuada (que en Brasil no está expresado). Con relación a la cosa juzgada, el régimen brasileño de la eficacia *erga omnes*, salvo insuficiencia de pruebas, fue igualmente adoptado.

En Uruguay, el Código General de Proceso de 1989 repitió las reglas del Código Modelo de Proceso Civil.

En Argentina, primero la jurisprudencia y después el Código de Código Civil y Comercial de la Nación, de 1993, siguieron el Código Modelo Iberoamericano, hasta que la Constitución de 1994 contempló, en el art. 43, los llamados “derechos de incidencia colectiva”, para cuya tutela prevé el “amparo” y la legitimación amplia para el ejercicio de su defensa. Pero la doctrina preconiza la introducción, en el ordenamiento, de acciones específicas, a semejanza de las existentes en el modelo brasileño. La

jurisprudencia, incluso sin textos legales, ha avanzado con creatividad para asegurar la tutela concreta de los derechos e intereses colectivos.

En 1995, Portugal dio un paso al frente, con la Ley de Acción Popular, de la cual también se extrajo la defensa de los derechos individuales homogéneos. En 1996, Portugal también creó acciones inhibitorias para la defensa de los intereses de los consumidores. Y, desde 1985 el sistema ya conocía acciones relativas a las cláusulas generales, con legitimación conferida al Ministerio Público, y por lo tanto diversa de la prevista para la acción popular, que está limitada al ciudadano, a las asociaciones y fundaciones con personería jurídica y a las autarquías locales.

Posteriormente, otros ordenamientos iberoamericanos introdujeron, de alguna forma, la tutela de los intereses difusos y colectivos en sus sistemas. En Chile, fue ampliado el alcance de la acción popular, con reglamentación en varias leyes especiales y en el art. 2.333 del Código Civil. En Paraguay, la Constitución consagra el derecho individual o colectivo de reclamar de la autoridad pública la defensa del ambiente, de la salud pública, del consumidor y otros que por su naturaleza pertenezcan a la colectividad, pero no contempla expresamente instrumentos procesales para ese fin. En Perú, hay alguna legislación dispersa y específica para la tutela de ciertos derechos colectivos, en el campo de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de los consumidores. En Venezuela, la nueva Constitución prevé la posibilidad de que cualquier persona pueda demandar en juicio la tutela de sus derechos o intereses, inclusive colectivos o difusos, pero no hay ley específica que regule la materia. La jurisprudencia venezolana reconoce legitimación para los mismos fines al Ministerio Público, con base en la legitimación general que le confiere la Constitución. En Colombia, la Constitución de 1991 en su art. 88, le otorgó rango constitucional a las acciones populares y de grupo y se autorizó al legislador a definir los casos de responsabilidad objetiva por el daño causado a intereses y derechos colectivos. La ley 472/98 que entró a regir el 5 de agosto de 1999, reglamentó el referido art. 88 de la Carta al dictar el estatuto sobre las acciones populares y de grupo. Por su art. 70 se crea el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y por el art. 80 se crea un registro público de las acciones populares y de grupo, que será organizado y manejado por la Defensoría del Pueblo en forma centralizada (Ramiro Bejarano Guzmán, "Procesos declarativos", ed. Temis, 2001, pp. 159 - 219, en especial 160 - 163).

En España, la reforma procesal civil de 2000 contempla la defensa de intereses transindividuales pero, según parte de la doctrina, de manera incompleta e insuficiente.

4 – Se ve de ahí que la situación de la defensa de los derechos transindividuales en Iberoamérica, es insuficiente y heterogénea, por no decir caótica. Y también se percibe que diversos países están sintiendo la necesidad de legislar sobre la materia.

La idea de un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica surgió en Roma, en mayo de 2002, en una intervención de Antonio Gidi, miembro brasileño del

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el VII Seminario Internacional co-organizado por el “Centro di Studi Giuridici Latino Americani” de la “Università degli Studi di Roma – Tor Vergata”, por el “Istituto Italo-Latino Americano” y por la “Associazione di Studi Sociali Latino-Americani”. Y fue también en Roma que la Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal maduró la idea, incorporándola con entusiasmo. Y, de común acuerdo, fue adoptada la propuesta de emprender un trabajo que llevase a la elaboración de un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, en los moldes de los ya editados Códigos Modelo de Proceso Civil y de Proceso Penal. O sea, de un Código que pudiese servir no sólo como receptor de principios, sino también como modelo concreto para inspirar las reformas, de modo de tornar más homogénea la defensa de los intereses y derechos transindividuales en países de cultura jurídica común. El Código – como su propia denominación dice– debe ser tan sólo un modelo, a ser adaptado a las peculiaridades locales, que serán tomadas en consideración en la actividad legislativa de cada país; pero debe ser, al mismo tiempo, un modelo plenamente operativo.

Interesados por la Presidencia del Instituto para preparar una propuesta de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe y Antonio Gidi presentaron el resultado de su trabajo en las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, de Montevideo, en octubre de 2002, donde la propuesta fue transformada en Anteproyecto.

Luego, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal convocó a una pléyade de profesores de Iberoamérica para que manifestaran su opinión sobre el referido Anteproyecto, tarea que fue coordinada por Antonio Gidi (Brasil) y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México). Los referidos trabajos fueron publicados por la Editorial Porrúa con el título “La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia una Código Modelo para Iberoamérica”, y presentados en el transcurso del XII Congreso Mundial de Derecho Procesal que tuvo lugar en Ciudad de México del 22 al 26 de setiembre de 2003.

Con los referidos aportes, la Comisión Revisora, integrada por los Profesores Ada Pellegrini Grinover, Aluiso G. de Castro Mendes, Anibal Quiroga León, Antonio Gidi, Enrique M. Falcón, José Luis Vázquez Sotelo, Kazuo Watanabe, Ramiro Bejarano Guzmán, Roberto Berizonce y Sergio Artavia procedió a perfeccionarlo, surgiendo así la 2ª. Versión del Anteproyecto, que en su redacción definitiva fue revisada por el profesor uruguayo Angel Landoni Sosa.

El Anteproyecto fue discutido en Roma, recibiendo algunas sugerencias de perfeccionamiento. Éstas fueron acogidas, habiendo los miembros de la Comisión Revisora, por su parte, presentado otras.

Finalmente, votadas las nuevas propuestas, el Anteproyecto se transformó en Proyecto, que fue aprobado en la Asamblea General del Instituto Ibero-americano de Derecho Procesal, en octubre de 2004,

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

durante la realización de las XIX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, en Caracas, convirtiéndose en el Código Modelo de los Procesos Colectivos para Iberoamérica.

5 – El modelo aprobado se inspira, en primer lugar, en aquel que ya existe en los países de la comunidad iberoamericana, completando, perfeccionando y armonizando las reglas existentes, de modo de llegar a una propuesta que pueda ser útil para todos. Evidentemente, se analizaron la sistemática norteamericana de las *class actions* y la brasileña de las acciones colectivas, pero la propuesta ahora presentada se aparta en diversos puntos de los dos modelos, para crear un sistema original, adecuado a la realidad existente en los diversos países iberoamericanos.

Todo esto fue tenido en cuenta para la preparación del Proyecto, que acabó, por eso mismo, perdiendo las características de modelo nacional, para adquirir efectivamente las de un verdadero sistema iberoamericano de procesos colectivos, celoso de las normas constitucionales y legales ya existentes en los diversos países que componen nuestra comunidad.

6 – En líneas extremadamente generales, el Código se compone de VII Capítulos.

El Capítulo I se destina a conceptualizar los intereses o derechos transindividuales, según las categorías de difusos (a los cuales fueran subsumidos los colectivos, por la terminología brasileña) e individuales homogéneos, ya conocidas de diversos países iberoamericanos. Para los intereses individuales homogéneos, se buscaron en el sistema norteamericano los requisitos de la predominancia de las cuestiones comunes sobre las individuales y de la utilidad de la tutela colectiva en el caso concreto (*predominance and superiority*), que la experiencia brasileña demostró ser necesarios. La representatividad adecuada –mencionada en muchos estatutos iberoamericanos- es exigida y detallada, mediante una lista ejemplificativa de criterios que podrán orientar al juez en su evaluación. La legitimación es la más abierta posible, para atender a todos los modelos ya existentes de procesos colectivos en Iberoamérica. Queda claro que la legitimación es concurrente y autónoma, admitiendo el litisconsorcio de los colegitimados. No se descuida el papel de fiscal de la ley del Ministerio Público y se prevé el compromiso administrativo de ajustamiento de conducta, a cargo de los legitimados de naturaleza pública, capaz de evitar o abreviar el proceso, con la formación inmediata de título ejecutivo.

El Capítulo II trata de los proveimientos jurisdiccionales que se pueden obtener por el ejercicio de la acción colectiva: es aquí donde el Código se preocupa preeminentemente por la efectividad del proceso colectivo, que debe conducir a una respuesta jurisdiccional realmente capaz de satisfacer los derechos transindividuales violados o amenazados. Se encuentran ahí normas sobre la anticipación de tutela y sobre su posible estabilización; sobre la acción condenatoria a la reparación de los daños al bien indivisiblemente considerado y al destino de la indemnización para la recuperación del bien dañado o a finalidades conexas; sobre la condenación a una obligación de hacer o no hacer (inhibitoria), en que la indemnización es la *ultima ratio*, a la cual se prefiere el régimen de multas diarias (*astreintes*) o hasta incluso el de mandamientos judiciales aptos a la obtención de un resultado práctico equivalente al cumplimiento de la obligación; sobre la condenación a una obligación de dar.

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

El Capítulo III trata de reglas procesales aplicables, en general, a los procesos colectivos: la competencia, el pedido y las causas de pedir, la tentativa de conciliación y de otras formas de auto y hetero-composición, preservada la indisponibilidad del bien jurídico colectivo. El proceso se desenvuelve por audiencias, ejerciendo el juez varios poderes de control y dirección, inclusive pudiendo decidir desde luego la demanda por el mérito, cuando no hubiere necesidad de prueba. Siguen reglas sobre la distribución de la carga de la prueba, sobre las costas, emolumentos y honorarios, tanto del perito como de los abogados, previéndose incentivos para la persona física, los sindicatos y las asociaciones actoras, sobre la interrupción del plazo de prescripción para las pretensiones individuales como consecuencia de la proposición de acción colectiva, etc. Finalmente se cuida aquí de los efectos de la apelación, en principio meramente devolutiva, y de la ejecución provisoria, materias en que algunos ordenamientos iberoamericanos son omisos.

El Capítulo IV se detiene sobre las acciones colectivas en defensa de intereses o derechos individuales homogéneos y, particularmente, sobre la acción colectiva reparadora de los daños individualmente sufridos (la *class action for damages* norteamericana), promovida por los legitimados sin necesidad de indicación de la identidad de las víctimas. Se da conocimiento del enjuiciamiento de la acción a los posibles interesados, para que puedan intervenir en el proceso, si lo desean, como asistentes o coadyuvantes, siéndoles vedado, por eso, discutir sus pretensiones individuales en el proceso colectivo de conocimiento. Se tomó cuidado especial con las notificaciones. En caso de acogimiento del pedido, la sentencia podrá ser genérica, declarando la existencia del daño general y condenando al vencido a la obligación de indemnizar a todas las víctimas y sus sucesores (aún no identificados). Incumbirá a éstos, individualmente o por los legitimados colectivos, probar en la liquidación de la sentencia su daño personal, el nexo causal con el daño global reconocido por la sentencia, y cuantificar el perjuicio individualmente sufrido. Pero el Código también prevé la posibilidad de que el juez, en la sentencia condenatoria, fije las indemnizaciones individuales, cuando esto fuera posible. Se cuida, también, del caso de concurso de créditos y se prescribe que, transcurrido un año sin la comparecencia de interesados en número compatible con la gravedad del daño, habrá ejecución colectiva de la indemnización debida a título de *daños causados*, cuidando que ellos sean vertidos con destino al Fondo. Aquí el Código adopta la solución de la *fluid recovery* del sistema norteamericano.

El Fondo de los Derechos Difusos e Individuales Homogéneos tiene reglas específicas sobre la gestión y las actividades, a ser controladas por el juez.

En el Capítulo V son tratadas la conexión, la litispendencia y la cosa juzgada. La conexión y la litispendencia tienen reglas claras, incluyendo las relaciones entre las acciones colectivas o entre una acción colectiva y las acciones individuales. También está prevista la posibilidad de transformar varias acciones individuales en una acción colectiva. Para los intereses o derechos difusos, el régimen de la cosa juzgada es siempre la eficacia de la sentencia *erga omnes* (o *ultra partes*), en caso de procedencia o improcedencia del pedido, salvo cuando la improcedencia se diera por insuficiencia de pruebas, hipótesis en que la demanda puede ser repetida, con nuevas pruebas. Esta solución ya es tradicional en los países de Iberoamérica, pero el Código avanza, admitiendo nueva acción, con base en pruebas nuevas, en el plazo de

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

2 (dos) años contado desde el conocimiento de la prueba nueva sobreviniente al proceso colectivo (cosa juzgada *secundum probationem*, como derivación especial de la cláusula *rebus sic stantibus*). Con relación a los intereses o derechos individuales homogéneos, la opción de la legislación brasileña, mantenida en el Código, es de la cosa juzgada *secundum eventum litis*: o sea, la cosa juzgada positiva actúa *erga omnes*, beneficiando a todos los miembros del grupo; pero la cosa juzgada negativa sólo alcanza a los legitimados a las acciones colectivas, pudiendo cada individuo, perjudicado por la sentencia, oponerse a la cosa juzgada, promoviendo su acción individual, en el ámbito personal. Otras normas cuidan de la extensión, *in utilibus*, de la cosa juzgada positiva resultante de una acción en defensa de intereses o derechos difusos o colectivos, en provecho de las víctimas individuales del mismo evento dañoso. Y también se regulan la conexión y la litispendencia entre acciones colectivas o entre una acción colectiva y las acciones individuales.

El Capítulo VI introduce una absoluta novedad para los ordenamientos de *civil law*: la acción colectiva pasiva, o sea la *defendant class action* del sistema norteamericano. Preconizada por la doctrina brasileña, objeto de tímidas tentativas en la práctica, la acción colectiva pasiva aún siendo más rara, no puede ser ignorada en un sistema de procesos colectivos. La acción, en esos casos, es propuesta no por la clase, sino contra ella. El Código exige que se trate de una colectividad organizada de personas, o que el grupo tenga representante adecuado, y que el bien jurídico a ser tutelado sea transindividual y de relevancia social. La cuestión principal que se planteaba, en esos casos, era la del régimen de la cosa juzgada: en obsequio al principio general de que la sentencia sólo puede favorecer a los integrantes del grupo cuando se trata de derechos o intereses individuales homogéneos, el mismo principio debía ser mantenido cuando la clase figurase en el polo pasivo de la demanda. Así, cuando se trata de bienes jurídicos de naturaleza indivisible (intereses difusos), el régimen de la cosa juzgada es *erga omnes* simétricamente a lo que ocurre cuando el grupo litiga en el polo activo (pero sin el temperamento de la improcedencia por insuficiencia de pruebas, inadecuado cuando la clase se coloca en el polo pasivo); pero, cuando se trata de bienes jurídicos de naturaleza divisible (intereses o derechos individuales homogéneos), la cosa juzgada positiva no vinculará a los miembros del grupo, categoría o clase, que podrán promover acciones propias o discutir la sentencia en el proceso de ejecución, para apartar la eficacia de la sentencia en su esfera jurídica individual. *Mutatis mutandis*, es el mismo tratamiento de la cosa juzgada *secundum eventum litis* para los intereses o derechos individuales homogéneos, cuando la clase litiga en el polo activo.

No obstante, tratándose de una acción promovida contra un sindicato, la cosa juzgada positiva alcanzará, sin excepciones, a los miembros de la categoría, dada la posición constitucional que en muchos países ocupa el sindicato y su representatividad adecuada, más sólida que la de las asociaciones.

Por último, el Capítulo VII trata de las disposiciones finales, contemplando una recomendación al intérprete y determinando la aplicación subsidiaria de los diversos Códigos de Proceso Civil y legislaciones especiales pertinentes, en lo que no fueren incompatibles.

8 – En conclusión, el Código ahora presentado, sin despreciar las experiencias de la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses transindividuales de diversos países, crea un modelo original, adherente a las reglas preexistentes en los ordenamientos iberoamericanos, que perfecciona y complementa. De ese modo, acaba perdiendo cualquier característica nacional y se constituye en un verdadero sistema iberoamericano de procesos colectivos, armonioso y completo, que podrá ser tomado como modelo por los países de nuestra comunidad, empeñados en la transformación de un proceso individualista en un proceso social.

Octubre de 2004

Roberto O. Berizonce (Presidente) – Argentina

Ada Pellegrini Grinover – Brasil

Angel Landoni Sosa – Uruguay

CÓDIGO MODELO DE PROCESOS COLECTIVOS PARA IBEROAMÉRICA

Capítulo I – Disposiciones generales

Art 1º. - Ámbito de aplicación de la acción colectiva - La acción colectiva será ejercida para hacer valer pretensiones de tutela de:

I - intereses o derechos difusos, así entendidos los supraindividuales, de naturaleza indivisible, de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho o vinculadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base;

II - intereses o derechos individuales homogéneos, así entendido el conjunto de derechos subjetivos individuales, provenientes de origen común, de que sean titulares los miembros de un grupo, categoría o clase.

Art. 2º. Requisitos de la demanda colectiva. - Son requisitos de la demanda colectiva:

I – la adecuada representatividad del legitimado;

II – la relevancia social de la tutela colectiva, caracterizada por la naturaleza del bien jurídico afectado, por las características de la lesión o por el elevado número de personas perjudicadas.

Par. 1°. Para la tutela de los intereses o derechos individuales homogéneos, además de los requisitos indicados en los n. I y II de este artículo, es también necesaria la demostración del predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales y de la utilidad de la tutela colectiva en el caso concreto.

Par. 2°. En el análisis de la representatividad adecuada el juez deberá analizar datos como:

- a – la credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado;
- b – sus antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de los intereses o derechos de los miembros del grupo, categoría o clase;
- c – su conducta en otros procesos colectivos;
- d – la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda;
- e – el tiempo de constitución de la asociación y la representatividad de ésta o de la persona física respecto del grupo, categoría o clase.

Par. 3° - El Juez analizará la existencia del requisito de la representatividad adecuada en cualquier tiempo y grado del procedimiento, y aplicará, si fuere el caso, lo dispuesto en el parágrafo 4° del art. 3°.

Art. 3°. Legitimación activa.- Están legitimados concurrentemente a la acción colectiva:

I – toda persona física, para la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho;

II – cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base y para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos;

III - el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y la Defensoría Pública;

IV – las personas jurídicas de derecho público interno;

V – las entidades y órganos de la Administración Pública, directa o indirecta, aun aquellos sin personalidad jurídica, específicamente destinados a la defensa de los intereses y derechos protegidos por este Código;

VI - las entidades sindicales, para la defensa de los intereses y derechos de la categoría;

VII – las asociaciones legalmente constituidas desde por lo menos un año y que incluyan entre sus fines institucionales la defensa de los intereses y derechos protegidos en este Código, sin que sea necesaria la autorización de la asamblea;

VIII - los partidos políticos, para la defensa de derechos e intereses ligados a sus finalidades institucionales.

Par. 1°. El requisito de la pre-constitución puede ser dispensado por el juez, cuando haya manifiesto interés social evidenciado por la dimensión o característica del daño, o por la relevancia del bien jurídico a ser protegido.

Par. 2°. Será admitido el litisconsorcio facultativo entre los legitimados.

Par. 3°. En caso de interés social relevante, el Ministerio Público, si no promoviera la acción o no interviniera en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.

Par. 4°. En caso de inexistencia del requisito de la representatividad adecuada, de desistimiento infundado o de abandono de la acción por la persona física, entidad sindical o asociación legitimada, el juez notificará al Ministerio Público y, en la medida de lo posible, a otros legitimados adecuados para el caso a fin de que asuman, voluntariamente, la titularidad de la acción.

Par. 5°. El Ministerio Público y los órganos públicos legitimados podrán requerir de los interesados el compromiso administrativo de ajuste de su conducta a las exigencias legales, mediante conminaciones, que tendrán eficacia de título ejecutivo extrajudicial.

Capítulo II – De los proveimientos jurisdiccionales

Art. 4°. Efectividad de la tutela jurisdiccional.- Para la defensa de los derechos e intereses protegidos por este Código son admisibles todas las acciones aptas para propiciar su adecuada y efectiva tutela.

Art. 5°. Tutela jurisdiccional anticipada.- El juez podrá, a requerimiento de la parte interesada, anticipar, total o parcialmente, los efectos de la tutela pretendida en el pedido inicial, siempre que, con base en prueba consistente, se convenza de la verosimilitud de la alegación y:

I - exista fundado temor de la ineficacia del proveimiento final o

II - esté comprobado el abuso del derecho de defensa o el manifiesto propósito dilatorio del demandado.

Par. 1°. No se concederá la anticipación de la tutela si hubiere peligro de irreversibilidad del proveimiento anticipado, a menos que, en un juicio de ponderación de los valores en juego, la denegación de la medida signifique sacrificio irrazonable de un bien jurídico relevante.

Par. 2°. En la decisión que anticipa la tutela, el juez indicará, de modo claro y preciso, las razones de su convencimiento.

Par. 3°. La tutela anticipada podrá ser revocada o modificada en cualquier tiempo, en decisión fundada.

Par. 4°. Si no hubiere controversia en cuanto a la parte anticipada en la decisión liminar, después de la oportunidad de contradictorio ésta se tornará definitiva y hará cosa

juzgada, y proseguirá el proceso, si fuere el caso, para el juzgamiento de los demás puntos o cuestiones comprendidas en la demanda.

Art. 6º. Obligaciones de hacer y de no hacer. En el proceso que tenga por objeto el cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, el juez concederá la tutela específica de la obligación o determinará las medidas que aseguren el resultado práctico equivalente al del cumplimiento.

Par. 1º. El juez podrá, en la hipótesis de anticipación de la tutela o en la sentencia, imponer una multa diaria al demandado, independientemente del pedido del actor, si fuera suficiente o compatible con la obligación, fijando plazo razonable para el cumplimiento de la resolución.

Par. 2º. El Juez podrá, de oficio, modificar el valor o la periodicidad de la multa, en el caso de que verifique que se tornó insuficiente o excesiva.

Par. 3º. Para la tutela específica o para la obtención del resultado práctico equivalente, podrá el juez determinar las medidas necesarias, tales como la búsqueda y la aprehensión, la remoción de cosas y personas, la demolición de obra, la prohibición de actividades nocivas y podrá requerir el auxilio de la fuerza policial.

Par. 4º. La conversión de la obligación en daños y perjuicios solamente será admisible si por ella optare el actor o si fuere imposible la tutela específica o la obtención del resultado práctico correspondiente.

Par. 5º. La indemnización por daños y perjuicios procederá independientemente de la multa.

Art. 7º. Obligaciones de dar.- En el proceso que tenga por objeto la obligación de entregar cosa, determinada o indeterminada, se aplican, en lo pertinente, las disposiciones del artículo anterior.

Art. 8º. Acción indemnizatoria. En la sentencia que condene a la reparación de los daños provocados al bien indivisiblemente considerado, el juez dispondrá que la indemnización sea vertida al Fondo de los Derechos Difusos e Individuales Homogéneos, administrado por un Consejo Gestor Gubernamental, del que participarán necesariamente miembros del Ministerio Público, jueces y representantes de la comunidad, sus recursos serán destinados a la reconstitución de los bienes lesionados o, si esto no fuere posible, a la realización de actividades tendientes a minimizar la lesión o a evitar que ella se repita, entre otras que beneficien el bien jurídico perjudicado.

Par. 1 - El Fondo será notificado sobre la deducción de toda acción colectiva y sobre las decisiones más importantes en tales procesos y podrá intervenir en los procesos colectivos en cualquier tiempo y grado de la jurisdicción para demostrar la inadecuación del representante o para auxiliarlo en la tutela de los derechos del grupo, categoría o clase.

Par. 2º – El Fondo llevará registros que discriminen el origen y destino de los recursos, e indicará la variedad de bienes jurídicos a ser tutelados y su ámbito regional.

Par. 3º - En atención a la especificidad del bien jurídico dañado, a la extensión territorial afectada y a otras circunstancias consideradas relevantes, el juez podrá determinar, en decisión fundamentada, el destino de la indemnización; dictará las providencias que deban ser tomadas para la reconstitución de los bienes afectados; podrá ordenar la realización de actividades tendientes a minimizar la lesión o a evitar que ella se repita, entre otras, que beneficien el bien jurídico tutelado.

Par. 4º - La decisión que especifique el destino de la indemnización indicará, de modo claro y preciso, las medidas que deberán ser tomadas por el Consejo Gestor del Fondo, así como el plazo razonable para que tales medidas sean practicadas.

Par. 5º - Terminado el plazo fijado por el juez, el Consejo Gestor del Fondo presentará un informe de las actividades realizadas, siéndole posible, según sea el caso, requerir la prórroga del plazo para complementar las medidas fijadas en la decisión judicial.

Capítulo III – De los procesos colectivos en general

Art. 9º. Competencia territorial.- Es competente para la causa el juez:

I – del lugar donde hubiere ocurrido o pudiera ocurrir el daño, cuando sea de ámbito local;

II – de la Capital, para los daños de ámbito regional o nacional, aplicándose las reglas pertinentes de organización judicial.

Art. 10. Objeto y fundamento.- En los procesos colectivos, el pedido y la causa de pedir serán interpretados extensivamente.

Par. 1º. Oídas las partes, el juez permitirá la enmienda de la demanda inicial para alterar o ampliar su objeto o la causa de pedir.

Par. 2º. El juez permitirá la alteración del objeto de proceso en cualquier tiempo y en cualquier grado de jurisdicción, siempre que sea realizada de buena fe, no represente perjuicio injustificado para la parte contraria y el contradictorio sea preservado.

Art. 11. Audiencia preliminar.- Cerrada la fase postulatoria, el juez convocará a la audiencia preliminar, a la cual comparecerán las partes o sus procuradores, habilitados para transigir.

Par. 1º. El juez oír a las partes sobre los motivos y fundamentos de la demanda y de la contestación e intentará la conciliación, sin perjuicio de sugerir otras formas

adecuadas de solución del conflicto, como la mediación, el arbitraje y la evaluación neutral de tercero.

Par. 2°. La evaluación neutral de tercero, obtenida dentro del plazo fijado por el juez, será reservada, inclusive para éste, y no vinculante para las partes, pues su finalidad exclusiva es la de orientarlas en la tentativa de composición amigable del conflicto.

Par. 3°. Preservada la indisponibilidad del bien jurídico colectivo, las partes podrán transigir sobre el modo de cumplimiento de la obligación.

Par. 4°. Obtenida la conciliación, será homologada por sentencia, que constituirá título ejecutivo judicial.

Par. 5°. Si no se obtuviere la conciliación, si ésta fuere parcial, o si, por cualquier motivo, no fuere adoptado otro medio de solución del conflicto, el juez, en forma fundada:

I – decidirá si el proceso tiene condiciones de proseguir en la forma colectiva;

II – podrá separar los pedidos en procesos colectivos distintos, tendientes a la tutela, respectivamente, de los intereses o derechos difusos e individuales homogéneos, siempre que la separación represente economía procesal o facilite la conducción del proceso;

III – fijará los puntos controvertidos, decidirá las cuestiones procesales pendientes y determinará las pruebas a ser producidas, y convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento, si fuere el caso.

IV - esclarecerá a las partes en cuanto a la distribución de la carga de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1° del art. 12.

Art. 12. Pruebas.- Son admisibles en juicio todos los medios de prueba, incluida la prueba estadística o por muestreo, siempre que sean obtenidos por medios lícitos.

Par.1° - La carga de la prueba incumbe a la parte que posea conocimientos científicos, técnicos o informaciones específicas sobre los hechos, o mayor facilidad para su demostración. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, pudiendo requerir pericias a entidades públicas cuyo objeto estuviere ligado a la materia en debate, condenándose al demandado perdidoso al reembolso de los emolumentos devengados. Si a pesar de lo anterior, no es posible aportar la prueba respectiva, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo de los Derechos Difusos e Individuales Homogéneos.

Par. 2° - Durante la fase de instrucción, si surgieren modificaciones de hecho o de derecho relevantes para el juzgamiento de la causa, el juez podrá rever, en decisión fundada, la distribución de la carga de la prueba, y conceder a la parte a quien le fue atribuida un

plazo razonable para la producción de la prueba, respetando las garantías del contradictorio en relación a la parte contraria.

Par. 3° - El juez podrá ordenar de oficio la producción de pruebas, con el debido respeto de las garantías del contradictorio.

Art. 13. Anticipación de la decisión de fondo.- El juez decidirá sin más la demanda en cuanto al mérito, cuando no hubiere necesidad de producción de prueba.

Parágrafo único. El juez podrá decidir sin más trámite, parte de la demanda, cuando no hubiere necesidad de producción de prueba, siempre que ello no implique prejuzgamiento directo o indirecto del litigio que quede pendiente de decisión. En este caso el proceso continuará para la instrucción y juzgamiento de los demás pedidos que se decidirán en resoluciones complementarias.

Art. 14.- Legitimación para la liquidación y ejecución de condena.- Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la sentencia condenatoria quedare firme, sin que el demandante promueva la liquidación o la ejecución, deberá hacerlo el Ministerio Público, cuando se trate de interés social relevante, quedando facultados, asimismo, para dicha iniciativa, en todos los casos, los demás legitimados.

Art. 15. Costas y honorarios.- En los procesos colectivos de que trata este Código, la sentencia condenará al demandado, si fuere vencido, en las costas, emolumentos, honorarios periciales y cualquier otro gasto, así como en los honorarios de los abogados de la parte actora.

Par. 1°. Para el cálculo de los honorarios, el juez tendrá en consideración la ventaja para el grupo, categoría o clase, la cantidad y calidad del trabajo desempeñado por el abogado de la parte actora y la complejidad de la causa.

Par. 2o. Si el legitimado fuere persona física, sindicato o asociación, el juez podrá fijar una gratificación financiera cuando su actuación hubiera sido relevante en la conducción y éxito del proceso colectivo.

Par. 3°. Los actores en los procesos colectivos no adelantarán costas, emolumentos, honorarios periciales y cualquier otro gasto, ni serán condenados, salvo comprobada mala fe, en honorarios de abogados, costas y gastos procesales.

Par. 4°. El litigante de mala fe y los responsables de los respectivos actos serán solidariamente condenados al pago de los gastos del proceso, de los honorarios de los abogados de la parte contraria y al décuplo de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios.

Art. 16. - Procesos de trámite prioritario.- El juez deberá dar prioridad al trámite de los procesos colectivos, cuando haya manifiesto interés social evidenciado por la dimensión del daño o por la relevancia del bien jurídico que deba ser protegido.

Art. 17. - Interrupción de la prescripción.- La citación válida en los procesos colectivos interrumpe el plazo de prescripción de las pretensiones individuales y transindividuales directa o indirectamente relacionadas con la controversia, y retrotrae sus efectos a la fecha de la presentación de la demanda.

Art. 18 - Efectos de la apelación.- La apelación de la sentencia definitiva tendrá efecto meramente devolutivo, salvo cuando la fundamentación fuere relevante y pudiere resultar para la parte una lesión grave y de difícil reparación, caso en el cual el juez podrá atribuir al recurso efecto suspensivo.

Art. 19 - Ejecución definitiva y ejecución provisional.- La ejecución es definitiva cuando la sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada; es provisoria cuando están pendientes los recursos admisibles.

Par. 1º - La ejecución provisoria corre por cuenta y riesgo del ejecutante, quien responderá por los perjuicios causados al ejecutado, en caso de que la sentencia recurrida fuere modificada.

Par. 2º - La ejecución provisoria permite la práctica de actos que importen la enajenación del dominio o el levantamiento de depósito en dinero.

Par. 3º - A pedido del ejecutado, el juez podrá suspender la ejecución provisoria cuando de ella pudiere resultar una lesión grave o de difícil reparación.

Capítulo IV –De los procesos colectivos para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos.

Art. 20 - Pretensión colectiva de responsabilidad civil.- Los legitimados podrán proponer, en nombre propio y en el interés de las víctimas o de sus sucesores, entre otras (art. 4º), la pretensión civil colectiva de responsabilidad por los daños individualmente sufridos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

Parágrafo único.- La determinación de los interesados podrá producirse en el momento de la liquidación o ejecución de lo juzgado, por lo que no será necesario que la petición inicial esté acompañada de la relación de miembros del grupo, clase o categoría. Según el caso, el juez podrá exigir, al demandado o al tercero, la presentación de la relación y datos de las personas que integran el grupo, categoría o clase.

Art. 21. Citación y notificaciones.- Estando en forma la petición inicial, el juez ordenará la citación del demandado y la publicación de edictos en el Órgano Oficial, con la finalidad de que los interesados puedan intervenir en el proceso como asistentes o coadyuvantes.

Par. 1º - Sin perjuicio de la publicación de edictos, el juez ordenará que sean notificados los órganos y entidades de defensa de los intereses o derechos protegidos en este Código, acerca de la existencia de la demanda colectiva y de su trámite a fin de que cumplan con lo dispuesto en el acápite de este artículo.

Par. 2º - Cuando fuere posible la ejecución de lo juzgado, incluso en forma provisoria, o estuviere precluida la decisión anticipatoria de los efectos de la tutela pretendida, el juez ordenará la publicación de edictos en el Órgano Oficial, a costa del demandado, a quien impondrá, también, el deber de divulgar nueva información por los medios de comunicación social, observando el criterio del costo reducido. Sin perjuicio de las referidas providencias, el juez dispondrá la comunicación a los órganos y entidades de defensa de los intereses o derechos protegidos en este Código, para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Par. 3º -. Los intervinientes no podrán discutir en el proceso colectivo de conocimiento sus pretensiones individuales.

Art. 22. Sentencia de condena.- En caso de procedencia del pedido, la condena podrá ser genérica y fijará la responsabilidad del demandado por los daños causados así como el deber de indemnizar.

Par. 1º. Siempre que fuere posible, el juez determinará en la propia sentencia colectiva el monto de la indemnización individual debida a cada miembro del grupo.

Par. 2º - Cuando el valor de los daños individuales sufridos por los miembros del grupo fuere uniforme, prevalentemente uniforme o pudiere ser reducido a una fórmula matemática, la sentencia colectiva indicará el valor o la fórmula de cálculo de la indemnización individual.

Par. 3º - El miembro del grupo que no esté de acuerdo con el monto de la indemnización individual o la fórmula para su cálculo establecidos en la sentencia colectiva, podrá deducir una pretensión individual de liquidación.

Art. 23. Liquidación y ejecución individuales.- La liquidación y la ejecución de la sentencia podrán ser promovidas por la víctima y sus sucesores, así como por los legitimados para la acción colectiva.

Parágrafo único – En el proceso de liquidación de la sentencia, que podrá ser promovido ante el juez del domicilio del ejecutante, corresponderá a éste probar, tan sólo, el daño personal, el nexo de causalidad y el monto de la indemnización.

Art. 24. Ejecución colectiva.- La ejecución podrá ser colectiva si es promovida por los legitimados en el proceso colectivo y abarcará a las víctimas cuyas indemnizaciones ya hubieran sido fijadas en liquidación, sin perjuicio del trámite de otras ejecuciones.

Parágrafo único. La ejecución colectiva se hará en base a las decisiones de liquidación certificadas, en las cuales constará si se encuentran o no firmes.

Art. 25. Competencia para la ejecución – Es competente para la ejecución el juez:

I - de la liquidación de la sentencia o de la pretensión condenatoria, en el caso de ejecución individual;

II - de la pretensión condenatoria, cuando sea colectiva la ejecución.

Art. 26 – De los pagos. El pago de las indemnizaciones o el levantamiento del depósito será hecho personalmente a los beneficiarios.

Art. 27. Liquidación y ejecución por los daños globalmente causados. - Transcurrido el plazo de un año sin la comparecencia de los interesados en número representativo y compatible con la gravedad del daño, podrán los legitimados del artículo 3 promover la liquidación y ejecución colectiva de la indemnización debida por los daños causados.

Parágrafo único - El valor de la indemnización será fijado en atención al daño globalmente causado, que será demostrado a través de todas las pruebas en derecho admitidas. Si fuere difícil o imposible la producción de pruebas, en razón de la extensión del daño o de su complejidad, la cuantía de la indemnización será fijada por peritaje arbitral.

Art. 28. - Concurrencia de créditos.- En caso de concurso de créditos derivados de la condena de que trata el artículo 6º y de indemnizaciones por los perjuicios individuales resultantes del mismo evento dañoso, éstas tendrán preferencia en el pago.

Parágrafo único. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la entrega de las cantidades que deba percibir el Fondo quedará suspendida mientras estén pendientes de decisión de segundo grado las acciones de indemnización por los daños individuales, salvo en la hipótesis de que el patrimonio del deudor sea manifiestamente suficiente para responder por la totalidad de las deudas.

Capítulo V - De la conexión, de la litispendencia y de la cosa juzgada.

Art. 29. - Conexión.- Si hubiere conexión entre las causas colectivas, se produce prevención en favor del juez que conoció del primer proceso, quien de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la acumulación de todos los litigios, aun cuando en éstos no actúen la totalidad de los mismos sujetos procesales.

Art. 30. - Litispendencia.- El primer proceso colectivo produce litispendencia respecto de los posteriores en los que se hagan valer pretensiones sobre el mismo bien jurídico, aún cuando sean diferentes los legitimados activos o las causas de pedir.

Art. 31. - Relación entre la acción colectiva y las acciones individuales.- La acción colectiva no genera litispendencia respecto de las acciones individuales, pero los efectos de la cosa juzgada colectiva (art. 33) no beneficiarán a los actores en los procesos individuales, si no fuera requerida la suspensión del proceso individual en el plazo de 30 (treinta) días, a contar desde el conocimiento efectivo del proceso colectivo.

Parágrafo único.- Corresponde al demandado informar en el proceso por la acción individual sobre la existencia de una acción colectiva con el mismo fundamento bajo la pena de que, de no hacerlo, el actor individual se beneficiará de la cosa juzgada colectiva aún en el caso de que la demanda individual sea rechazada.

Art. 32 . Conversión de las acciones individuales en una acción colectiva.- Si el juez tuviere conocimiento de la existencia de diversos procesos individuales tramitados contra el mismo demandado, con el mismo fundamento, notificará al Ministerio Público y en la medida de lo posible, a otros representantes adecuados, a fin de que si lo desearan propongan una acción colectiva, pero quedará a salvo para los actores individuales la facultad prevista en el artículo anterior.

Art. 33.- Cosa juzgada.- En los procesos colectivos de que trata este Código, la sentencia hará cosa juzgada *erga omnes*, excepto cuando la pretensión fuere rechazada por insuficiencia de pruebas, caso en el cual cualquier legitimado podrá intentar otra acción, con idéntico fundamento, si se valiere de nueva prueba.

Par. 1°. Asimismo, en la hipótesis de rechazo basado en las pruebas producidas, cualquier legitimado podrá intentar otra acción, con idéntico fundamento, en el plazo de 2 (dos) años contados desde el conocimiento de nueva prueba superveniente, que no hubiera podido ser producida en el proceso, siempre que ella sea idónea, por sí sola, para modificar el resultado del proceso.

Par. 2° - Tratándose de intereses o derechos individuales homogéneos, en caso de rechazo de la pretensión, los interesados podrán deducir la acción de indemnización a título individual.

Par. 3°. Los efectos de la cosa juzgada en los procesos de tutela de intereses o derechos difusos, no perjudicarán las acciones de indemnización por daños personalmente sufridos, propuestas individualmente o en la forma prevista en este Código, pero si hubiera sido declarado procedente el pedido, tales efectos beneficiarán a las víctimas y a sus sucesores quienes podrán solicitar la liquidación y la ejecución en los términos de los artículos 22 a 24.

Par. 4°. Lo dispuesto en el parágrafo anterior, es aplicable a la sentencia penal condenatoria.

Par. 5°. La competencia territorial del órgano juzgador no implicará una limitación para la cosa juzgada *erga omnes*.

Art. 34. Relaciones jurídicas continuadas. En las relaciones jurídicas continuadas, si sobreviniere modificación en el estado de hecho o de derecho, la parte podrá pedir la revisión de lo que fue decidido por sentencia.

Capítulo VI – De las acciones contra un grupo, categoría o clase.

Art. 35.- Acciones contra el grupo, categoría o clase. Cualquier clase de pretensión puede ser propuesta contra una colectividad organizada o que tenga representante adecuado, en los términos del párrafo 2° del artículo 2° de este Código, siempre que el bien jurídico a ser tutelado sea supraindividual (artículo 1°) y esté revestido de interés social.

Art. 36 - Cosa juzgada pasiva: intereses o derechos difusos. Cuando se trate de intereses o derechos difusos, la cosa juzgada tendrá eficacia *erga omnes* y vinculará a los miembros del grupo, categoría o clase.

Art. 37. - Cosa juzgada pasiva: intereses o derechos individuales homogéneos. Cuando se trate de intereses o derechos individuales homogéneos, la cosa juzgada tendrá eficacia *erga omnes* en el plano colectivo, pero la sentencia que acoja la demanda, no vinculará a los miembros del grupo, categoría o clase, que podrán plantear pretensiones o defensas propias en el proceso de ejecución para dejar sin efecto la eficacia de la decisión en su esfera jurídica individual.

Parágrafo único – Cuando la pretensión colectiva fuere promovida contra un sindicato, como sustituto procesal de la categoría, la cosa juzgada tendrá eficacia *erga omnes* y vinculará individualmente a todos los miembros, aún en el caso de procedencia del pedido.

Art. 38. Aplicación supletoria a las acciones pasivas. Es aplicable complementariamente a las acciones colectivas pasivas lo dispuesto en este Código para las acciones colectivas activas, en lo que no fuera incompatible.

Capítulo VII – Disposiciones finales

Art. 39. Principios de interpretación. Este Código será interpretado de forma abierta y flexible, compatible con la tutela colectiva de los intereses y derechos de que trata.

Art. 40. Especialización de los magistrados. Siempre que sea posible, los procesos colectivos serán procesados y juzgados por magistrados especializados.

Art. 41. Aplicación subsidiaria de las normas procesales generales y especiales.-

Aplíquense subsidiariamente, en lo que no fueren incompatibles, las disposiciones del Código de Proceso Civil y de la legislación especial pertinente.

III. Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos³

DEZEMBRO DE 2.005
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – ÚLTIMA VERSÃO
 REDAÇÃO DE ADA PELLEGRINI GRINOVER APÓS REUNIÕES COM
 MINISTÉRIO PÚBLICO E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL

Capítulo I – Das demandas coletivas

Art. 1º Conteúdo do Código – Este Código dispõe sobre os processos coletivos relativos às ações coletivas ativas, à ação coletiva passiva, ao mandado de segurança coletivo, à ação popular constitucional e à ação de improbidade administrativa.

Art. 2º Efetividade da tutela jurisdicional – Para a defesa dos direitos e interesses indicados neste Código são admissíveis todas as espécies de ações e provimentos capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela, inclusive os previstos no Código de Processo Civil e em leis especiais.

§ 1º O juiz, instaurado o contraditório, poderá desconsiderar a pessoa jurídica, nas hipóteses previstas no Código Civil.

§ 2º Para a tutela dos interesses e direitos previstos nas alíneas II e III do artigo 3º e observada a disponibilidade do bem jurídico protegido, as partes poderão estipular convenção de arbitragem, a qual se regerá pelas disposições do Código de Processo Civil e da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Art. 3º Objeto da tutela coletiva – A demanda coletiva será exercida para a tutela de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas, entre si ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Parágrafo único. Não se admitirá ação coletiva que tenha como pedido a declaração de inconstitucionalidade, mas esta poderá ser objeto de questão prejudicial, pela via do controle difuso.

Art. 4º Pedido e causa de pedir – Nas ações coletivas, a causa de pedir e o pedido serão interpretados extensivamente, em conformidade com o bem jurídico a ser protegido.

³ http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/cpbc_versao24_02_2006.pdf

Parágrafo único. A requerimento da parte interessada, até a prolação da sentença, o juiz permitirá a alteração do pedido ou da causa de pedir, desde que seja realizada de boa-fé, não represente prejuízo injustificado para a parte contrária e o contraditório seja preservado, mediante possibilidade de nova manifestação de quem figure no pólo passivo da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, observado o parágrafo 3º do artigo 10.

Art. 5º Relação entre demandas coletivas – Observado o disposto no artigo 20 deste Código, as demandas coletivas de qualquer espécie poderão ser reunidas, de ofício ou a requerimento das partes, ficando prevento o juízo perante o qual a demanda foi distribuída em primeiro lugar, quando houver:

I – conexão, pela identidade de pedido ou causa de pedir, conquanto diferentes os legitimados ativos, e para os fins da ação prevista no Capítulo III, os legitimados passivos;

II – continência, pela identidade de partes e causa de pedir, observado o disposto no inciso anterior, sendo o pedido de uma das ações mais abrangente do que o das demais.

§ 1º Na análise da identidade do pedido e da causa de pedir, será considerada a identidade do bem jurídico a ser protegido.

§ 2º Na hipótese de conexão entre ações coletivas referidas ao mesmo bem jurídico, o juiz prevento deverá obrigatoriamente determinar a reunião de processos para julgamento conjunto.

§ 3º Aplicam-se à litispendência as regras dos incisos I e II deste artigo, quanto à identidade de legitimados ativos ou passivos, e a regra de seu parágrafo 1º, quanto à identidade do pedido e da causa de pedir.

Art. 6º Relação entre demanda coletiva e ações individuais – A demanda coletiva não induz litispendência para as ações individuais em que sejam postulados direitos ou interesses próprios e específicos de seus autores, mas os efeitos da coisa julgada coletiva (art. 12 deste Código) não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência efetiva da demanda coletiva nos autos da ação individual.

§ 1º Cabe ao demandado informar o juízo da ação individual sobre a existência de demanda coletiva que verse sobre idêntico bem jurídico, sob pena de, não o fazendo, o autor individual beneficiar-se da coisa julgada coletiva mesmo no caso de a ação individual ser rejeitada.

§ 2º A suspensão do processo individual perdurará até o trânsito em julgado da sentença coletiva, facultado ao autor requerer a retomada do curso do processo individual, a qualquer tempo, independentemente da anuência do réu, hipótese em que não poderá mais beneficiar-se da sentença coletiva.

§ 3º O Tribunal, de ofício, por iniciativa do juiz competente ou a requerimento da parte, após instaurar, em qualquer hipótese, o contraditório, poderá determinar a suspensão de processos individuais em que se postule a tutela de interesses ou direitos referidos a relação jurídica substancial de caráter incindível, pela sua própria natureza ou por força de lei, a cujo respeito as questões devam ser decididas de modo uniforme e globalmente, quando houver sido ajuizada demanda coletiva versando sobre o mesmo bem jurídico.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, a suspensão do processo perdurará até o trânsito em julgado da sentença coletiva, vedada ao autor a retomada do curso do processo individual antes desse momento.

Art. 7º Comunicação sobre processos repetitivos. O juiz, tendo conhecimento da existência de diversos processos individuais correndo contra o mesmo demandado, com identidade de fundamento jurídico, notificará o Ministério Público e, na medida do possível, outros legitimados, a fim de que proponham, querendo, demanda coletiva, ressalvada aos autores individuais a faculdade prevista no artigo anterior.

Parágrafo único. Caso o Ministério Público não promova a demanda coletiva, no prazo de 90 (noventa) dias, o juiz, se considerar relevante a tutela coletiva, fará remessa das peças dos processos individuais ao procurador-geral, e este ajuizará a demanda coletiva, designará outro órgão do Ministério Público para fazê-lo, ou insistirá, motivadamente, no não ajuizamento da ação, informando o juiz.

Art. 8º Efeitos da citação – A citação válida para a demanda coletiva interrompe o prazo de prescrição das pretensões individuais e transindividuais direta ou indiretamente relacionadas com a controvérsia, retroagindo o efeito à data da propositura da ação.

Art. 9º Prioridade de processamento e utilização de meios eletrônicos – O juiz deverá dar prioridade ao processamento da demanda coletiva, servindo-se preferencialmente dos meios eletrônicos para a prática de atos processuais do juízo e das partes, observados os critérios próprios que garantam sua autenticidade.

Art. 10. Provas – São admissíveis em juízo todos os meios de prova, desde que obtidos por meios lícitos, incluindo a prova estatística ou por amostragem.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 333 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade em sua demonstração.

§ 2º O ônus da prova poderá ser invertido quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, segundo as regras ordinárias de experiência, ou quando a parte for hipossuficiente.

§ 3º Durante a fase instrutória, surgindo modificação de fato ou de direito relevante para o julgamento da causa (parágrafo único do artigo 4º deste Código), o juiz poderá rever, em decisão motivada, a distribuição do ônus da prova, concedendo à parte a quem for atribuída a incumbência prazo razoável para sua produção, observado o contraditório em relação à parte contrária (artigo 23, parágrafo 5º, inciso IV).

§ 4º O juiz poderá determinar de ofício a produção de provas, observado o contraditório.

Art. 11. Motivação das decisões judiciais. Todas as decisões deverão ser especificamente fundamentadas, especialmente quanto aos conceitos jurídicos indeterminados.

Parágrafo único. Na sentença de improcedência, o juiz deverá explicitar, no dispositivo, se rejeita a demanda por insuficiência de provas.

Art. 12. Coisa julgada – Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada *erga omnes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova.

§ 1º Tratando-se de interesses ou direitos individuais homogêneos (art. 3º, III, deste Código), em caso de improcedência do pedido, os interessados poderão propor ação a título individual, salvo quando a demanda coletiva tiver sido ajuizada por sindicato, como substituto processual da categoria.

§ 2º Os efeitos da coisa julgada nas ações em defesa de interesses ou direitos difusos ou coletivos (art. 3º, I e II, deste Código) não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 28 e 29 deste Código.

§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

§ 4º A competência territorial do órgão julgador não representará limitação para a coisa julgada *erga omnes*.

§ 5º Mesmo na hipótese de sentença de improcedência, fundada nas provas produzidas, qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, no prazo de 2 (dois) anos contados do conhecimento geral de descoberta de prova nova, superveniente, que não poderia ser produzida no processo, desde que idônea, por si só, para mudar seu resultado.

§ 6º A faculdade prevista no parágrafo anterior, nas mesmas condições, fica assegurada ao demandado da ação coletiva julgada procedente.

Art. 13. Efeitos do recurso da sentença definitiva – O recurso interposto contra a sentença tem efeito meramente devolutivo, salvo quando a fundamentação for relevante e puder resultar à parte lesão grave e de difícil reparação, hipótese em que o juiz, ponderando os valores em jogo, poderá atribuir ao recurso efeito suspensivo.

Art. 14. Legitimação à liquidação e execução da sentença condenatória – Na hipótese de o autor da demanda coletiva julgada procedente não promover, em 120 (cento e vinte) dias, a liquidação ou execução da sentença, deverá fazê-lo o Ministério Público, quando se tratar de interesse público relevante, facultada igual iniciativa, em todos os casos, aos demais legitimados (art. 19 deste Código).

Art. 15. Execução definitiva e execução provisória – A execução é definitiva quando passada em julgado a sentença; e provisória, na pendência dos recursos cabíveis.

§ 1º A execução provisória corre por conta e risco do exequente, que responde pelos prejuízos causados ao executado, em caso de reforma da sentença recorrida.

§ 2º A execução provisória permite a prática de atos que importem em alienação do domínio ou levantamento do depósito em dinheiro.

§ 3^o A pedido do executado, o tribunal pode suspender a execução provisória quando dela puder resultar lesão grave e de difícil reparação.

Art. 16. Custas e honorários – Nas demandas coletivas de que trata este código, a sentença condenará o demandado, se vencido, nas custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, bem como em honorários de advogados, calculados sobre a condenação.

§ 1^o Tratando-se de condenação a obrigação específica ou de condenação genérica, os honorários advocatícios serão fixados levando-se em consideração a vantagem para o grupo, categoria ou classe, a quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido pelo advogado e a complexidade da causa.

§ 2^o O Poder Público, quando demandado e vencido, incorrerá na condenação prevista neste artigo.

§ 3^o Se o legitimado for pessoa física, entidade sindical ou de fiscalização do exercício das profissões, associação civil ou fundação de direito privado, o juiz, sem prejuízo da verba da sucumbência, poderá fixar gratificação financeira, a cargo do Fundo dos Direitos Difusos e Coletivos, quando sua atuação tiver sido relevante na condução e êxito da demanda coletiva, observados na fixação os critérios de razoabilidade e modicidade.

§ 4^o Os autores da demanda coletiva não adiantarão custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem serão condenados, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

§ 5^o O litigante de má-fé e os responsáveis pelos respectivos atos serão solidariamente condenados ao pagamento das despesas processuais, em honorários advocatícios e em até o décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 17. Juízos especializados – Sempre que possível, as demandas coletivas de que trata este Código serão processadas e julgadas em juízos especializados.

Parágrafo único. Quando se tratar de liquidação e execução individuais dos danos sofridos em decorrência de violação a interesses ou direitos individuais homogêneos (artigo 31 deste Código), a competência para a tramitação dos processos será dos juízos residuais comuns.

Capítulo II – Da ação coletiva ativa

Seção I – Disposições gerais

Art. 18. Cabimento da ação coletiva ativa. A ação coletiva ativa será exercida para a tutela dos interesses e direitos mencionados no artigo 3^o deste Código.

Parágrafo único. Não se admitirá ação coletiva que tenha como pedido a declaração de inconstitucionalidade, mas esta poderá ser objeto de questão prejudicial, pela via do controle difuso.

Art. 19. Legitimação. São legitimados concorrentemente à ação coletiva ativa:

I – qualquer pessoa física, para a defesa dos interesses ou direitos difusos, desde que o juiz reconheça sua representatividade adequada, demonstrada por dados como:

a – a credibilidade, capacidade e experiência do legitimado;

b – seu histórico na proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos difusos e coletivos;

c – sua conduta em eventuais processos coletivos em que tenha atuado;

II – o membro do grupo, categoria ou classe, para a defesa dos interesses ou direitos coletivos, e individuais homogêneos, desde que o juiz reconheça sua representatividade adequada, nos termos do inciso I deste artigo;

III - o Ministério Público, para a defesa dos interesses ou direitos difusos e coletivos, bem como dos individuais homogêneos de interesse social;

IV – a Defensoria Pública, para a defesa dos interesses ou direitos difusos e coletivos, quando a coletividade ou os membros do grupo, categoria ou classe de pessoas forem necessitados, do ponto de vista organizacional, e dos individuais homogêneos, quando os membros do grupo, categoria ou classe de pessoas forem, ao menos em parte, hipossuficientes;

V – as pessoas jurídicas de direito público interno, para a defesa dos interesses ou direitos difusos e, quando relacionados com suas funções, dos coletivos e individuais homogêneos;

VI - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, bem como os órgãos do Poder Legislativo, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos indicados neste Código;

VII – as entidades sindicais e de fiscalização do exercício das profissões, restritas as primeiras à defesa dos interesses e direitos ligados à categoria;

VIII - os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas ou nas Câmaras Municipais, conforme o âmbito do objeto da demanda, para a defesa de direitos e interesses ligados a seus fins institucionais;

IX - as associações civis e as fundações de direito privado legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses ou direitos indicados neste Código, dispensadas a autorização assemblear ou pessoal e a apresentação do rol nominal dos associados ou membros.

§ 1º Na defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, qualquer legitimado deverá demonstrar a existência do interesse social e, quando se tratar de direitos coletivos e individuais homogêneos, a coincidência entre os interesses do grupo, categoria ou classe e o objeto da demanda;

§ 2º No caso dos incisos I e II deste artigo, o juiz poderá voltar a analisar a existência do requisito da representatividade adequada em qualquer tempo e grau de jurisdição, aplicando, se for o caso, o disposto no parágrafo seguinte.

§ 3º Em caso de inexistência do requisito da representatividade adequada (incisos I e II deste artigo), o juiz notificará o Ministério Público e, na medida do possível, outros legitimados, a fim de que assumam, querendo, a titularidade da ação.

§ 4º Em relação às associações civis e às fundações de direito privado, o juiz poderá dispensar o requisito da pré-constituição, quando haja manifesto interesse social evidenciado pelas características do dano, pela relevância do bem jurídico a ser protegido ou pelo reconhecimento de representatividade adequada (inciso I deste artigo).

§ 5º Os membros do Ministério Público poderão ajuizar a ação coletiva perante a Justiça federal ou estadual, independentemente da pertinência ao Ministério Público da União, do Distrito Federal ou dos Estados, e, quando se tratar da competência da Capital do Estado (artigo 24, inciso III) ou do Distrito Federal (artigo 24, inciso IV), independentemente de seu âmbito territorial de atuação.

§ 6º Será admitido o litisconsórcio facultativo entre os legitimados, inclusive entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados.

§ 7º Em caso de relevante interesse social, cuja avaliação ficará a seu exclusivo critério, o Ministério Público, se não ajuizar a ação ou não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.

§ 7º Havendo vício de legitimação, desistência infundada ou abandono da ação, o juiz aplicará o disposto no parágrafo 3º deste artigo.

§ 8º Em caso de inércia do Ministério Público, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 7º deste Código.

§ 9º O Ministério Público e os órgãos públicos legitimados, agindo com critérios de equilíbrio e imparcialidade, poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante fixação de prazos para o cumprimento das obrigações assumidas e de multas por seu descumprimento.

§ 10 O termo de ajustamento de conduta terá natureza jurídica de transação, com eficácia de título executivo extrajudicial, sem prejuízo da possibilidade de homologação judicial do compromisso, hipótese em que sua eficácia será de título executivo judicial.

Art. 20. Competência territorial – É absolutamente competente para a causa o foro:

I – do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II – de qualquer das comarcas ou sub-seções judiciárias, quando o dano de âmbito regional compreender até 3 (três) delas, aplicando-se no caso as regras de prevenção;

III - da Capital do Estado, para os danos de âmbito regional, compreendendo 4 (quatro) ou mais comarcas ou sub-seções judiciárias;

IV – de uma das Capitais do Estado, quando os danos de âmbito interestadual compreenderem até 3 (três) Estados, aplicando-se no caso as regras de prevenção;

IV- do Distrito Federal, para os danos de âmbito interestadual que compreendam mais de 3 (três) Estados, ou de âmbito nacional.

§ 1º A amplitude do dano será aferida conforme indicada na petição inicial da demanda.

§ 2º Ajuizada a demanda perante juiz territorialmente incompetente, este remeterá incontinenti os autos ao juízo do foro competente, sendo vedada ao primeiro juiz a apreciação de pedido de antecipação de tutela.

Art. 21. Inquérito civil. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, nos termos do disposto em sua Lei Orgânica, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias.

§ 1º Aplica-se às atribuições do Ministério Público, em relação ao inquérito civil, o disposto no parágrafo 5º do artigo 19 deste Código.

§ 2º Nos casos em que a lei impuser sigilo, incumbe ao Ministério Público, ao inquirido e a seu advogado a manutenção do segredo.

§ 3º A eficácia probante, em juízo, das peças informativas do inquérito civil dependerá da participação do investigado, em sua colheita, ressalvadas as perícias, que poderão ser submetidas a contraditório posterior.

§ 4º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação coletiva, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ 5º Os demais legitimados (art. 21 deste Código) poderão recorrer da decisão de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento.

§ 6º O membro do Ministério Público que promover o arquivamento do inquérito civil ou das peças informativas encaminhará, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de falta grave, os respectivos autos ao Conselho Superior do Ministério Público, para homologação e para as medidas necessárias à uniformização da atuação ministerial.

§ 7º Deixando o Conselho de homologar a promoção do arquivamento, designará, desde logo, outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

§ 7º Constituem crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação coletiva, quando requisitados pelo Ministério Público.

Art. 22. Da instrução da inicial e do valor da causa – Para instruir a inicial, o legitimado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias.

§ 1º As certidões e informações deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizados para a instrução da ação coletiva.

§ 2º Somente nos casos em que a defesa da intimidade ou o interesse social, devidamente justificados, exigirem o sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.

§ 3º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, requisitá-las; feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça.

§ 4º Na hipótese de ser incomensurável ou inestimável o valor dos danos coletivos, fica dispensada a indicação do valor da causa.

Art. 23 - Audiência preliminar – Encerrada a fase postulatória, o juiz designará audiência preliminar, à qual comparecerão as partes ou seus procuradores, habilitados a transigir.

§ 1º O juiz ouvirá as partes sobre os motivos e fundamentos da demanda e tentará a conciliação, sem prejuízo de sugerir outras formas adequadas de solução do conflito, como a mediação, a arbitragem e a avaliação neutra de terceiro.

§ 2º A avaliação neutra de terceiro, de confiança das partes, obtida no prazo fixado pelo juiz, é sigilosa, inclusive para este, e não vinculante para as partes, sendo sua finalidade exclusiva a de orientá-las na tentativa de composição amigável do conflito.

§ 3º Preservada a indisponibilidade do bem jurídico coletivo, as partes poderão transigir sobre o modo de cumprimento da obrigação.

§ 4º Obtida a transação, será homologada por sentença, que constituirá título executivo judicial.

§ 5º Não obtida a conciliação, sendo ela parcial, ou quando, por qualquer motivo, não for adotado outro meio de solução do conflito, o juiz, fundamentadamente:

I – decidirá se a ação tem condições de prosseguir na forma coletiva, certificando-a como tal;

II – poderá separar os pedidos em ações coletivas distintas, voltadas à tutela, respectivamente, dos interesses ou direitos difusos e coletivos, de um lado, e dos individuais homogêneos, do outro, desde que a separação represente economia processual ou facilite a condução do processo;

III – decidirá a respeito do litisconsórcio e da intervenção de terceiros, esta admissível até o momento do saneamento do processo, vedada a denunciação da lide na hipótese do artigo 13, parágrafo único, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

IV – fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se for o caso;

V – Na hipótese do inciso anterior, esclarecerá as partes sobre a distribuição do ônus da prova, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 10 deste Código, e sobre a

possibilidade de ser determinada, no momento do julgamento, sua inversão, nos termos do parágrafo 2º do mesmo artigo;

VI – Se não houver necessidade de audiência de instrução e julgamento, de acordo com a natureza do pedido e as provas documentais juntadas pelas partes ou requisitadas pelo juiz, sobre as quais tenha incidido o contraditório, simultâneo ou sucessivo, julgará antecipadamente a lide.

Art. 24. Ação reparatoria – Na ação reparatoria dos danos provocados ao bem indivisivelmente considerado, sempre que possível e independentemente de pedido do autor, a condenação consistirá na prestação de obrigações específicas, destinadas à compensação do dano sofrido pelo bem jurídico afetado, nos termos do artigo 461 e parágrafos do Código de Processo Civil.

§ 1º Dependendo da especificidade do bem jurídico afetado, da extensão territorial abrangida e de outras circunstâncias consideradas relevantes, o juiz poderá especificar, em decisão fundamentada, as providências a serem tomadas para a reconstituição dos bens lesados, podendo indicar a realização de atividades tendentes a minimizar a lesão ou a evitar que se repita, dentre outras que beneficiem o bem jurídico prejudicado;

§ 2º Somente quando impossível a condenação do réu no cumprimento de obrigações específicas, o juiz condenará o réu, em decisão fundamentada, ao pagamento de indenização, independentemente de pedido do autor, a qual reverterá ao Fundo de Direitos Difusos e Coletivos, de natureza federal ou estadual, de acordo com a Justiça competente (art. 25 deste Código).

Art. 25. Do Fundo dos Direitos Difusos e Coletivos. O Fundo será administrado por um Conselho Gestor federal ou por Conselhos Gestores estaduais, dos quais participarão necessariamente, em composição paritária, membros do Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à realização de atividades tendentes a minimizar as lesões ou a evitar que se repitam, dentre outras que beneficiem os bens jurídicos prejudicados, bem como a antecipar os custos das perícias necessárias à defesa dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos e a custear o prêmio previsto no parágrafo 3º do artigo 16.

§ 1º Além da indenização oriunda da sentença condenatória, prevista no parágrafo 2º do artigo 24, e da execução pelos danos globalmente causados, de que trata o parágrafo 3º do artigo 34, ambos deste Código, constituem receita do Fundo o produto da arrecadação de multas, inclusive as decorrentes do descumprimento de compromissos de ajustamento de conduta.

§ 2º O representante legal do Fundo, considerado funcionário público para efeitos legais, responderá por sua atuação nas esferas administrativa, penal e civil.

§ 3º O Fundo será notificado da propositura de toda ação coletiva e sobre as decisões mais importantes do processo, podendo nele intervir em qualquer tempo e grau de jurisdição na função de “amicus curiae”.

§ 4º O Fundo manterá e divulgará registros que especifiquem a origem e a destinação dos recursos e indicará a variedade dos bens jurídicos a serem tutelados e seu âmbito regional;

§ 5º Semestralmente, o Fundo dará publicidade às suas demonstrações financeiras e atividades desenvolvidas.

Seção II – Da ação coletiva para a defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos

Art. 26. Da ação coletiva para a defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos – A ação coletiva para a defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos será exercida para a tutela do conjunto de direitos ou interesses individuais, decorrentes de origem comum, de que sejam titulares os membros de um grupo, categoria ou classe.

§ 1º Para a tutela dos interesses ou direitos individuais homogêneos, além dos requisitos indicados no artigo 19 deste Código, é necessária a aferição da predominância das questões comuns sobre as individuais e da utilidade da tutela coletiva no caso concreto.

§ 2º A determinação dos interessados poderá ocorrer no momento da liquidação ou execução do julgado, não havendo necessidade de a petição inicial estar acompanhada da relação de membros do grupo, classe ou categoria.

Art. 27. Ação de responsabilidade civil – Os legitimados poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, dentre outras (artigo 2.º deste Código), ação coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.

Art. 28. Citação e notificações – Estando em termos a petição inicial, o juiz ordenará a citação do réu e a publicação de edital, de preferência resumido, no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como assistentes, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo.

§ 1º Sem prejuízo da publicação do edital, o juiz determinará sejam os órgãos e entidades de defesa dos interesses ou direitos indicados neste Código notificados da existência da demanda coletiva e de seu trânsito em julgado.

§ 2º Concedida a tutela antecipada e sendo identificáveis os beneficiários, o juiz determinará ao demandado que informe os interessados sobre a opção de exercerem, ou não, o direito à fruição da medida.

§ 3º Descumprida a determinação judicial de que trata o parágrafo anterior, o demandado responderá, no mesmo processo, pelos prejuízos causados aos beneficiários.

§ 4º Quando for possível a execução do julgado, ainda que provisória, o juiz determinará a publicação de edital no órgão oficial, às custas do demandado, impondo-lhe, também, o dever de divulgar, pelos meios de comunicação social, nova informação, compatível com a extensão ou gravidade do dano, observado o critério da modicidade do custo. Sem prejuízo das referidas providências, o juízo providenciará a comunicação aos órgãos e entidades de defesa dos interesses ou direitos indicados neste Código.

§ 5º Os intervenientes não poderão discutir suas pretensões individuais no processo coletivo de conhecimento.

Art. 29. Efeitos da transação - As partes poderão transacionar, ressalvada aos membros do grupo, categoria ou classe a faculdade de não aderir à transação, propondo ação a título individual.

Art. 30 - Sentença condenatória – Sempre que possível, o juiz fixará na sentença o valor da indenização individual devida a cada membro do grupo, categoria ou classe.

§ 2º Quando o valor dos danos individuais sofridos pelos membros do grupo, categoria ou classe for uniforme, prevalentemente uniforme ou puder ser reduzido a uma fórmula matemática, a sentença coletiva indicará o valor ou a fórmula de cálculo da indenização individual.

§ 3º O membro do grupo, categoria ou classe que divergir quanto ao valor da indenização individual ou à fórmula para seu cálculo, estabelecidos na sentença coletiva, poderá propor ação individual de liquidação.

§ 4º Não sendo possível a prolação de sentença condenatória líquida, a condenação poderá ser genérica, fixando a responsabilidade do demandado pelos danos causados e o dever de indenizar.

Art. 31. Competência para a liquidação e execução – É competente para a liquidação e execução o juízo:

I - da ação condenatória ou da sede do legitimado à ação de conhecimento, quando coletiva a liquidação ou execução.

II – da ação condenatória, observado o disposto no artigo 17 deste Código, ou do domicílio da vítima ou sucessor, no caso de liquidação ou execução individual.

Parágrafo único. O exequente poderá optar pelo juízo do local onde se encontrem bens sujeitos à expropriação.

Art. 32. Liquidação e execução individuais. A liquidação e execução serão promovidas individualmente pelo beneficiário ou seus sucessores, que poderão ser representados, mediante instrumento de mandato, por associações, entidades sindicais ou de fiscalização do exercício das profissões e defensorias públicas, ainda que não tenham sido autoras no processo de conhecimento, observados os requisitos do artigo 15 deste Código.

§ 1º Na liquidação da sentença caberá ao liquidante provar, tão só, o dano pessoal, o nexo de causalidade e o montante da indenização.

§ 2º A liquidação da sentença poderá ser dispensada quando a apuração do dano pessoal, do nexo de causalidade e do montante da indenização depender exclusivamente de prova documental, hipótese em que o pedido de execução por quantia certa será acompanhado dos documentos comprobatórios e da memória do cálculo.

§ 3º Os valores destinados ao pagamento das indenizações individuais serão depositados em instituição bancária oficial, abrindo-se conta remunerada e individualizada para cada beneficiário, regendo-se os respectivos saques, sem expedição de alvará, pelas normas aplicáveis aos depósitos bancários.

§ 4º Na hipótese de o exercício da ação coletiva ter sido contratualmente vinculado ao pagamento de honorários por serviços prestados, o montante destes será deduzido dos valores destinados ao pagamento previsto no parágrafo anterior, ficando à disposição da entidade legitimada.

§ 5º A carta de sentença para a execução provisória poderá ser extraída em nome do credor, ainda que este não tenha integrado a lide no processo de conhecimento.

Art. 33. Liquidação e execução coletivas – Se possível, a liquidação e a execução serão coletivas, sendo promovidas por qualquer dos legitimados do artigo 19 deste Código.

Art. 34. Liquidação e execução pelos danos globalmente causados – Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 19 deste Código promover a liquidação e execução coletiva da indenização devida pelos danos causados.

§ 1º Na fluência do prazo previsto no caput deste artigo a prescrição não correrá.

§ 2º O valor da indenização será fixado de acordo com o dano globalmente causado, que poderá ser demonstrado por meio de prova pré-constituída ou, não sendo possível, mediante liquidação.

§ 3º O produto da indenização reverterá ao Fundo (art. 26 deste Código), que o utilizará para finalidades conexas à proteção do grupo, categoria ou classe beneficiados pela sentença.

Art. 35. Concurso de créditos – Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação de que trata o artigo 24 deste Código e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância a ser recolhida ao Fundo ficará sustada enquanto pendentes de decisão de recurso ordinário as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

Capítulo III – Da ação coletiva passiva

Art. 36. Ações contra o grupo, categoria ou classe – Qualquer espécie de ação pode ser proposta contra uma coletividade organizada, mesmo sem personalidade jurídica, desde que apresente representatividade adequada (artigo 19, I, “a”, “b” e “c”), se trate de tutela de interesses ou direitos difusos e coletivos (artigo 3º) e a tutela se revista de interesse social.

Parágrafo único. O Ministério Público e os órgãos públicos legitimados à ação coletiva ativa (art. 19, incisos III, IV, V e VI e VII deste Código) não poderão ser considerados representantes adequados da coletividade, ressalvadas as entidades sindicais.

Art. 37. Coisa julgada passiva – A coisa julgada atuará *erga omnes*, vinculando os membros do grupo, categoria ou classe e aplicando-se ao caso as disposições do artigo 12 deste Código, no que dizem respeito aos interesses ou direitos transindividuais.

Art. 38. Aplicação complementar às ações coletivas passivas – Aplica-se complementarmente às ações coletivas passivas o disposto no Capítulo I deste Código, no que não for incompatível.

Parágrafo único. As disposições relativas a custas e honorários, previstas no artigo 16 e seus parágrafos, serão invertidas, para beneficiar o grupo, categoria ou classe que figurar no pólo passivo da demanda.

Capítulo IV - Do mandado de segurança coletivo

Art. 39. Cabimento do mandado de segurança coletivo – Conceder-se-á mandado de segurança coletivo, nos termos dos incisos LXIX e LXX do artigo 5^o da Constituição federal, para proteger direito líquido e certo relativo a interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 3^o deste Código).

Art. 40. Legitimação ativa – O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

I – Ministério Público;

II – Defensoria Pública;

III – partido político com representação no Congresso Nacional;

IV – entidade sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, dispensada a autorização assemblear.

Parágrafo único – O Ministério Público, se não impetrar o mandado de segurança coletivo, atuará como fiscal da lei, em caso de interesse público ou relevante interesse social.

Art. 41. Disposições aplicáveis - Aplicam-se ao mandado de segurança coletivo as disposições do Capítulo I deste Código, inclusive no tocante às custas e honorários (art. 16 e seus parágrafos) e as da Lei n.º 1.533/51, no que não for incompatível.

Capítulo V - Das ações populares

Seção I – Da ação popular constitucional

Art. 42 - Disposições aplicáveis – Aplicam-se à ação popular constitucional as disposições do Capítulo I deste Código e as da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965.

Seção II – Ação de improbidade administrativa

Art. 43. Disposições aplicáveis – A ação de improbidade administrativa rege-se pelas disposições do Capítulo I deste Código, com exceção do disposto no artigo 4^o e seu parágrafo único, devendo o pedido e a causa de pedir ser interpretados restritivamente, e pelas disposições da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992,

Capítulo VI – Disposições finais

Art. 46. Do Cadastro Nacional de Processos Coletivos – O Conselho Nacional de Justiça organizará e manterá o Cadastro Nacional de Processos Coletivos, com a finalidade de permitir que todos os órgãos do Poder Judiciário e todos os interessados tenham acesso ao conhecimento da existência de ações coletivas, facilitando a sua publicidade.

§ 1º Os órgãos judiciários aos quais forem distribuídos processos coletivos remeterão, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da petição inicial ao Cadastro Nacional de Processos Coletivos.

§ 2º O Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 90 (noventa) dias, editará regulamento dispondo sobre o funcionamento do Cadastro Nacional de Processos Coletivos, incluindo a forma de comunicação pelos juízos quanto à existência de processos coletivos e aos atos processuais mais relevantes, como a concessão de antecipação de tutela, a sentença e o trânsito em julgado, a interposição de recursos e seu andamento, a execução provisória ou definitiva; disciplinará, ainda, os meios adequados a viabilizar o acesso aos dados e seu acompanhamento por qualquer interessado.

Art. 47. Instalação de órgãos especializados - A União, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e os Estados criarão e instalarão órgãos especializados, em primeira e segunda instância, para o processamento e julgamento de ações coletivas.

Art. 48. Cumprimento dos provimentos e da sentença pela Fazenda Pública – Se a Fazenda Pública opuser obstáculos injustificados à execução da sentença, provisória ou definitiva, ou ao cumprimento de provimentos mandamentais exarados no processo coletivo, o agente responsável por seu descumprimento responderá pelo crime de desobediência previsto no Código Penal, sem prejuízo da incidência de multa, que o juiz fixará de acordo com a gravidade da conduta.

Art. 49. Deveres dos procuradores das pessoas jurídicas de direito público - Os procuradores das pessoas jurídicas de direito público, da administração direta ou indireta, deverão pautar sua conduta, nos processos coletivos, observando sempre o interesse público e os princípios da administração previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como o estipulado no artigo 14, caput, do Código de Processo Civil.

§ 1º Verificado o descumprimento dos deveres impostos ao procurador neste artigo, o juiz o advertirá, fundamentadamente, sobre o desvio de conduta, podendo, em caso de reincidência, aplicar-lhe multa, fixada de acordo com a gravidade da atuação e com os princípios e interesse público ofendidos.

§ 2º Independentemente da imposição da multa, o juiz poderá determinar a extração de cópias do processo e seu encaminhamento ao Ministério Público, para apuração de eventual responsabilidade.

Art. 50. Princípios de interpretação – Este Código será interpretado de forma aberta e flexível, compatível com a tutela coletiva dos direitos e interesses de que trata.

Art. 51. Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil – Aplicam-se subsidiariamente às ações coletivas, no que não forem incompatíveis, as disposições do Código de Processo Civil, independentemente da Justiça competente para o processamento e julgamento.

Parágrafo único – Os recursos cabíveis e seu processamento seguirão o disposto no Código de Processo Civil e legislação correlata, no que não for incompatível.

Art. 52. Nova redação – Dê-se nova redação aos artigos de leis abaixo indicados:

a – O artigo 273 do Código de Processo Civil passa a vigorar com a seguinte redação, acrescidos os arts. 273-A, 273-B, 273-C e 273-D:

“Art.273

.....

§ 4º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada, fundamentadamente, enquanto não se produza a preclusão da decisão que a concedeu (§1º do art. 273-B e art. 273-C)”.

§ 5 “Na hipótese do inciso I deste artigo, o juiz só concederá a tutela antecipada sem ouvir a parte contrária em caso de extrema urgência ou quando verificar que o réu, citado, poderá torná-la ineficaz”.

Art.273-A. “A antecipação de tutela poderá ser requerida em procedimento antecedente ou na pendência do processo”.

Art.273-B. “Aplicam-se ao procedimento antecedente, no que couber, as disposições do Livro III, Título único, Capítulo I deste Código”.

§ 1 “Concedida a tutela antecipada, é facultado, até 30 (trinta) dias contados da preclusão da decisão concessiva:

a– ao réu, propor demanda que vise à sentença de mérito;

b – ao autor, em caso de antecipação parcial, propor demanda que vise à satisfação integral da pretensão.”

§ 2º “Não intentada a ação, a medida antecipatória adquirirá força de coisa julgada nos limites da decisão proferida”.

Art. 273-C. “Concedida a tutela antecipada no curso do processo, é facultado à parte interessada, até 30 (trinta) dias contados da preclusão da decisão concessiva, requerer seu prosseguimento, objetivando o julgamento de mérito.”

Parágrafo único. “Não pleiteado o prosseguimento do processo, a medida antecipatória adquirirá força de coisa julgada nos limites da decisão proferida”.

Art. 273-D. “ Proposta a demanda (§ 1º do art. 273-B) ou retomado o curso do processo (art. 273-C), sua eventual extinção, sem julgamento do mérito, não ocasionará a ineficácia da medida antecipatória, ressalvada a carência da ação, se incompatíveis as decisões.”

b – O artigo 10 da Lei n. 1.533, de 31 de dezembro de 1951, passa a ter a seguinte redação:

Artigo 10: “Findo o prazo a que se refere o item I do art. 7º e ouvido, dentro de 5 (cinco) dias, o representante da pessoa jurídica de direito público, responsável pela conduta impugnada, os autos serão conclusos ao juiz, independentemente de solicitação da parte, para a decisão, a qual deverá ser proferida em 5 (cinco) dias, tenham sido ou não prestadas as informações pela autoridade coatora”.

c - O artigo 7º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 4717, de 29 de junho de 1965, passa a ter a seguinte redação:

Art. 7º - “.....

I -

a - além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público, que poderá intervir no processo como litisconsorte ou fiscal da lei, devendo fazê-lo obrigatoriamente quando se tratar, a seu exclusivo critério, de interesse público relevante, vedada, em qualquer caso, a defesa dos atos impugnados ou de seus autores.”

d - Acrescente-se ao artigo 18 da Lei n. 4717, de 29 de junho de 1965 um parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 18 - “.....

Parágrafo único - Mesmo na hipótese de improcedência fundada nas provas produzidas, qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, no prazo de 2 (dois) anos contados do conhecimento geral da descoberta de prova nova, superveniente, que não poderia ser produzida no processo, desde que idônea, por si só, para mudar seu resultado.”

e - Acrescentem-se ao artigo 17 da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, dois parágrafos, numerados como 1º e 2º, renumerando-se os atuais parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 como 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14.

Art.17 - “.....

§ 1º - Nas hipóteses em que, pela natureza e circunstâncias de fato ou pela condição dos responsáveis, o interesse social não apontar para a necessidade de pronta e imediata intervenção do Ministério Público, este, a seu exclusivo critério, poderá, inicialmente, provocar a iniciativa do Poder Público co-legitimado, zelando pela observância do prazo prescricional e, sendo proposta a ação, intervir nos autos respectivos como fiscal da lei, nada obstando que, em havendo omissão, venha a atuar posteriormente, inclusive contra a omissão, se for o caso.

§ 2º - No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada integrará a lide na qualidade de litisconsorte, cabendo-lhe apresentar ou indicar os meios de prova de que disponha.

§ 3º

§ 4 ^o	
§ 5 ^o	
§ 6 ^o	
§ 7 ^o	
§ 8 ^o	
§ 9 ^o	
§ 10.....	
§ 11.....	
§ 12.....	
§ 13.....	
§ 14.....”	

f – O artigo 80 da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a ter a seguinte redação:

Artigo 80: “As ações individuais movidas pelo idoso serão propostas no foro de seu domicílio, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa”.

Art. 53. Revogação – Revogam-se a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; os artigos 81 a 104 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990; o parágrafo 3^o do artigo 5^o da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965; os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989; o artigo 3º da Lei n. 7.913, de 7 de dezembro de 1989; os artigos 210, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 222, 223 e 224 da Lei n. 8.069, de 13 de junho de 1990; o artigo 2º da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997; e os artigos 81, 82, 83, 85, 91, 92 e 93 da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003.

Art. 54. Vigência - Este Código entrará em vigor dentro de cento e oitenta dias a contar de sua publicação.

Dezembro de 2005.

IV. Anteprojecto de Código Brasileiro de Processos Coletivos⁴**ANTEPROJETO
DE
CÓDIGO BRASILEIRO DE PROCESSOS COLETIVOS****APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO ELABORADO EM
CONJUNTO NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO*
SENSU DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(UERJ) E DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA)**

1. Em termos legislativos, a história recente dos processos coletivos no Brasil encontra-se indissolúvelmente marcada por três diplomas: a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347), de 1985; a Constituição da República de 1988; e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078), de 1990. Ao longo dos últimos vinte anos, pode-se dizer que houve não apenas o florescimento de um conjunto de normas pertinentes, mas também o desabrochar de substancial doutrina relacionada com as ações coletivas e a ocupação de um espaço crescente por parte da preocupação de docentes e discentes no meio acadêmico, consubstanciando o surgimento de uma nova disciplina: o Direito Processual Coletivo.
2. A experiência brasileira em torno das ações coletivas, englobando a ação popular, desde 1934, é rica e vem servindo de inspiração até mesmo para outros países. Nesse sentido, forçosa é a menção ao Código Modelo de Processos Coletivos, editado pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, no ano de 2004, que foi elaborado com a participação de quatro professores brasileiros: Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Antonio Gidi e Kazuo Watanabe.
3. Os processos coletivos passaram a servir de instrumento principalmente para os denominados novos direitos, como o do meio ambiente e dos consumidores, desdobrando-se, ainda, em estatutos legislativos específicos, como a Lei n. 7.853, dispondo sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência; a Lei n. 7.913, para proteção dos investidores em valores mobiliários; a Lei n. 8.069, para a defesa das crianças e dos adolescentes; a Lei n. 8.429, contra a improbidade administrativa; a Lei n. 8.884, contra as

⁴ <http://www.direitouerj.org.br/2005/download/outros/cbpc.doc>

infrações da ordem econômica e da economia popular e a Lei n. 10.741, dispondo sobre o Estatuto do Idoso, prevendo expressamente a defesa coletiva dos respectivos interesses e direitos. Entretanto, o caminho legislativo percorrido não foi apenas de avanços. Em determinados momentos, a tutela jurisdicional coletiva sofreu reveses, ressaltando-se as restrições impostas ao objeto das ações coletivas, pela Medida Provisória n. 2.180-35, e a tentativa de confinamento dos efeitos do julgado coletivo nos limites da competência territorial do órgão prolator da sentença, ditado pela Lei n. 9.494.

4. Os resultados colhidos do dia-a-dia forense e dos debates acadêmicos demonstram que as soluções oferecidas pelos processos coletivos podem e devem ser aperfeiçoados. Os princípios e normas gerais pertinentes aos processos coletivos precisam ser reunidos em um estatuto codificado, dando tratamento sistemático e atual para a tutela coletiva, bem como preenchendo as lacunas existentes e dando respostas às dúvidas e controvérsias que grassam no meio jurídico. A elaboração recente do Código Modelo para Processos Coletivos, no âmbito dos países ibero-americanos, reavivou e consolidou a vontade de se repensar a legislação brasileira em torno das ações coletivas. Nesse sentido, foi elaborado, sob a coordenação da Professora Ada Pellegrini Grinover, na esfera da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), um primeiro Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, oferecido à discussão e sendo nesse sentido enviado aos membros do Instituto Brasileiro de Direito Processual.
5. Os programas de Mestrado em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Estácio de Sá (UNESA) foram pioneiros na introdução de disciplinas voltadas para o estudo dos processos coletivos, respectivamente denominadas de Direito Processual Coletivo e Tutela dos Interesses Coletivos. Procurando honrar a tradição de eminentes processualistas do Estado do Rio de Janeiro, como Machado Guimarães, José Carlos Barbosa Moreira, Luiz Fux, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, Sérgio Bermudes, Leonardo Greco e Carreira Alvim, a discussão em torno do Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos desenvolveu-se, paralela e concomitantemente, ao longo de todo o primeiro semestre letivo de 2005, dando prosseguimento aos debates realizados no ano de 2004, em torno do Código Modelo de Processos Coletivos e de reflexões comparativas, que procuravam, em especial, apontar para uma maior efetividade do processo coletivo, com o seu fortalecimento e consecução dos seus escopos de acesso à Justiça, de economia processual e judicial, de celeridade na prestação jurisdicional, de preservação do princípio da isonomia em relação ao direito material e do equilíbrio entre as partes na relação processual.
6. Por felicidade, o grupo reunido, sob a coordenação do Professor e Juiz Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, docente das supramencionadas disciplinas, contou com a participação de pessoas com larga experiência em termos de atuação junto a processos coletivos e uma ampla diversidade e pluralidade, em termos de origem e experiência profissional, o que enriqueceu os debates e permitiu que as questões fossem vistas de modo multifacetário. Elaboraram propostas e participaram das discussões os seguintes integrantes dos programas de pós-graduação *stricto sensu* da UERJ e da UNESA: Adriana Silva de Britto (Defensora Pública), Cláudia Abreu Lima Pisco (Juíza do

Trabalho), Diogo Medina Maia (Advogado), Guadalupe Louro Turos Couto (Procuradora do Trabalho), Luiz Norton Baptista de Mattos (Juiz Federal), Márcio Barra Lima (Procurador da República), Maria Carmen Cavalcanti de Almeida (Promotora de Justiça), Mariana Romeiro de Albuquerque Mello (Advogada), Marília de Castro Neves Vieira (Procuradora de Justiça), Paula Maria de Castro Barbosa (Advogada e Pesquisadora), Ana Paula Correia Hollanda (Promotora de Justiça), Andrea Cruz Salles (Advogada), Caio Márcio G. Taranto (Juiz Federal), Carlos Roberto de Castro Jatahy (Procurador de Justiça), Heloisa Maria Daltro Leite (Procuradora de Justiça), José Antônio Fernandes Souto (Promotor de Justiça), José Antônio Ocampo Bernárdez (Promotor de Justiça), Larissa Ellwanger Fleury Ryff (Promotora de Justiça), Marcelo Daltro Leite (Procurador de Justiça), Miriam Tayah Chor (Promotora de Justiça), Mônica dos Santos Ferreira (Advogada) e Vanice Lírio do Valle (Procuradora do Município).

7. A idéia inicial, voltada para a apresentação de sugestões e propostas para a melhoria do anteprojeto formulado em São Paulo, acabou evoluindo para uma reestruturação mais ampla do texto original, com o intuito de se oferecer uma proposta coerente, clara e comprometida com o fortalecimento dos processos coletivos, culminando com a elaboração de um novo Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, que ora é trazido à lume e oferecido ao Instituto Brasileiro de Direito Processual, aos meios acadêmicos, aos estudiosos e operadores do Direito e à sociedade, como proposta para ser cotejada e discutida.
8. O Anteprojeto formulado no Rio de Janeiro encontra-se estruturado em cinco partes: I – Das ações coletivas em geral; II – Das ações coletivas para a defesa dos direitos ou interesses individuais homogêneos; III – Da ação coletiva passiva; IV – Dos procedimentos especiais; V – Disposições finais.
9. Na primeira parte, o Capítulo I contém dois artigos introdutórios, que estatuem a admissibilidade de todas as espécies de ações para a consecução da tutela jurisdicional coletiva, bem como o seu objeto, mediante a tradicional divisão ternária dos interesses e direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, além de afastar a possibilidade de pedido de declaração de inconstitucionalidade, salvo como questão prejudicial, na via do controle difuso. O Capítulo II, que trata dos pressupostos processuais e das condições da ação coletiva, possui três Seções. Na primeira – Do órgão judiciário, encontram-se disciplinados a competência territorial, a prioridade de processamento para os processos coletivos, a especialização de juízos para o processamento e julgamento de processos coletivos e a conexão, ficando prevento o juízo perante o qual foi distribuída a primeira demanda coletiva, para os demais processos conexos, ainda quando diversos os sujeitos processuais. A segunda Seção regula a litispendência, deixando expressa a sua existência quando houver o mesmo pedido, causa de pedir e interessados, e a continência, dando a este último instituto um tratamento inovador e consentâneo com a sua natureza. A terceira Seção do Capítulo II dispõe sobre as condições específicas da ação coletiva, estabelecendo, como requisitos, a representatividade adequada e a relevância social da tutela coletiva, bem como o rol dos legitimados ativos, que, consentâneo com a perspectiva de ampliação do acesso à Justiça, do fortalecimento dos instrumentos coletivos de prestação

jurisdicional e com as diretrizes do Código Modelo de Processos Coletivos, passa por um alargamento substancial, na qual figuram a pessoa natural, para a defesa dos direitos ou interesses difusos; o membro do grupo, categoria ou classe, para a proteção dos direitos ou interesses coletivos e individuais homogêneos; o Ministério Público, para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de interesse social; a Defensoria Pública, quando os interessados forem predominantemente hipossuficiente; as pessoas jurídicas de direito público interno; as entidades e órgãos da Administração Pública; as entidades sindicais, para a defesa da categoria; os partidos políticos e as associações legalmente constituídas. O Capítulo III cuida da comunicação sobre processos repetitivos, do inquérito civil e do compromisso de ajustamento de conduta. O Capítulo IV – Da postulação, estabelece regramento em termos de custas e honorários, da instrução da petição inicial, do pedido, dos efeitos da citação e da audiência preliminar, além de prever a possibilidade do juiz ouvir a parte contrária, com prazo de 72 (setenta e duas) horas, antes de conceder liminar ou tutela antecipada, quando entender conveniente e não houver prejuízo para a efetividade da medida. Em seguida, o Capítulo V prevê a denominada carga dinâmica da prova, com a incumbência do ônus da prova recaindo sobre a parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos ou maior facilidade em sua demonstração. O Capítulo VI, cuidando do julgamento, do recurso e da coisa julgada, inova ao unificar o sistema de coisa julgada para os direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou seja, em todas as hipóteses haverá a coisa julgada *erga omnes*, salvo se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Por conseguinte, a sentença proferida, em processo coletivo, em torno dos direitos individuais homogêneos é fortalecida, pois será vinculativa também quando houver julgamento de improcedência do pedido fora das hipóteses de insuficiência de provas. O texto proposto estabelece, ainda, expressamente, que a competência territorial do órgão julgador não representará limitação para a coisa julgada *erga omnes*. O Capítulo VII trata das obrigações específicas de fazer, não fazer e de dar, bem como da reparação de danos provocados ao bem indivisivelmente considerado. No Capítulo VIII, são reguladas a liquidação e a execução em geral. Por fim, o Capítulo IX da Parte I cria o Cadastro Nacional de Processos Coletivos, sob a incumbência do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de permitir que todos os órgãos do Poder Judiciário e todos os interessados tenham conhecimento da existência das ações coletivas, e edita norma geral pertinente ao Fundo dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, que será administrado por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais.

10. A Parte II, destinada às ações coletivas para a defesa dos direitos ou interesses individuais homogêneos, talvez seja a mais inovadora no Anteprojeto formulado no Rio de Janeiro. As modificações procuraram atentar para uma realidade de certo modo perversa que vem se mantendo ao longo dos últimos vinte anos: as ações coletivas não estavam obtendo pleno sucesso no sentido de serem, de fato, as grandes catalisadoras desses anseios e de serem realmente o instrumento efetivo e útil para a solução dos problemas individuais decorrentes de origem comum. Não lograram, assim, ser um

modo capaz de resolver o conflito de muitos mediante um único processo coletivo. Por conseguinte, o Poder Judiciário continuou e continua a receber centenas, milhares e milhões de demandas individuais, que poderiam encontrar solução muito mais econômica mediante um processo coletivo, levando a um crescente esgotamento por parte dos órgãos judiciais, que se vêem envolvidos com um número enorme e comprometedor, em termos de qualidade e celeridade dos serviços prestados. Os exemplos são inúmeros: expurgos nas cadernetas de poupança e no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), reajuste de benefícios previdenciários, de vencimentos e de salários, questões tributárias nas esferas municipais, estaduais e federal etc. O motivo pode ser facilmente percebido: o sistema vigente banaliza os processos coletivos, ao permitir o surgimento e tramitação concomitantes destes com os processos individuais, que podem ser instaurados até mesmo quando já existe decisão coletiva transitada em julgado, ensejando insegurança e certa perplexidade diante da possibilidade da lide estar sendo apreciada, ao mesmo tempo, no âmbito coletivo e individual. Propõe-se, assim, uma remodelagem no sistema, a partir do fortalecimento e da priorização do processo coletivo, sem que haja, contudo, prejuízo para o acesso individual. O ajuizamento ou prosseguimento de ação individual versando sobre direito ou interesse, que esteja sendo objeto de ação coletiva, pressupõe a exclusão tempestiva e regular do processo coletivo. Para tanto, se prevê a comunicação dos interessados, que poderá ser feita pelo correio, por oficial de justiça, por edital ou por inserção em outro meio de comunicação ou informação, como contracheque, conta, fatura, extrato bancário etc. O ajuizamento da ação coletiva ensejará a suspensão, por trinta dias, dos processos individuais que versem sobre direito ou interesse que esteja sendo objeto no processo coletivo. Dentro do prazo de suspensão, os autores individuais poderão requerer a continuação do respectivo processo individual, sob pena de extinção sem o julgamento do mérito. Os interessados que, quando da comunicação, não possuírem ação individual ajuizada e não desejarem ser alcançados pelos efeitos das decisões proferidas na ação coletiva poderão optar entre o requerimento de exclusão ou o ajuizamento de ação individual no prazo assinalado, hipótese que equivalerá à manifestação expressa de exclusão. Como requisito específico para a ação coletiva para a defesa dos direitos ou interesses individuais homogêneos, estabelece o Anteprojeto a necessidade de aferição da predominância das questões comuns sobre as individuais e a utilidade da tutela coletiva no caso concreto. O Anteprojeto procura afastar, ainda, os riscos de indeferimento indevido ou de retardamento do andamento do processo em razão da falta inicial de determinação dos interessados, que poderá ocorrer no momento da liquidação ou execução do julgado. Os artigos 30 a 40 regulam detalhadamente os processos coletivos para a defesa dos direitos e interesses individuais homogêneos, com regras pertinentes à citação e notificações, à relação entre ação coletiva e ações individuais, à possibilidade de intervenção dos interessados mediante a assistência e aos efeitos da transação. Em relação à sentença condenatória, o Anteprojeto estabelece que, sempre que for possível, o juiz fixará na sentença do processo coletivo o valor da indenização individual devida a cada membro do grupo, categoria ou classe, procurando, assim, dar maior efetividade e celeridade para

a satisfação plena, procurando romper com a sistemática da condenação genérica no processo coletivo e as subseqüentes liquidações e execuções individuais, que acabam sendo complexas e demoradas, não sendo sequer realizadas por uma boa parte dos interessados em potencial, devendo, assim, ser deixada para um segundo plano, ou seja, apenas quando for impossível a prolação de sentença líquida. Em termos de competência para a liquidação e execução, o texto proposto estabelece prioridade também para as liquidações e execuções coletivas, que serão processadas perante o juízo da sentença condenatória. Mas, quando houver liquidações ou execuções individuais, o foro competente será o do domicílio do demandante individual ou do demandado, pois a concentração de milhares ou milhões de liquidações e/ou execuções individuais no juízo da ação coletiva condenatória propiciaria a inviabilização do órgão judicial especializado ou preventivo para as demandas coletivas. O Anteprojeto deixa claro, também, que, quando a execução for coletiva, os valores destinados ao pagamento das indenizações individuais serão depositados em instituição bancária oficial, abrindo-se conta remunerada e individualizada para cada beneficiário. Previu, ainda, regras subsidiárias pertinentes às liquidações e execuções individuais e ao concurso de créditos entre condenações pelos prejuízos coletiva e individualmente considerados.

11. A Parte III foi destinada à ação coletiva passiva, que passaria a ser mencionada expressamente na nova legislação. A redação prevista no Anteprojeto inicialmente formulado na USP estabelecia expressamente, em termos de direitos e interesses individuais homogêneos, que “a coisa julgada atuará *erga omnes* no plano coletivo, mas a sentença de procedência não vinculará os membros do grupo, categoria ou classe, que poderão mover ações próprias ou defender-se no processo de execução para afastar a eficácia da decisão na sua esfera jurídica individual”. Da simples leitura, pode-se constatar a inocuidade da norma, impondo-se indagar: quem iria propor uma demanda coletiva passiva, sabendo, de antemão, que o melhor resultado possível, ou seja, o julgamento de procedência do pedido, praticamente nenhum valor teria, pois a ninguém vincularia? Portanto, o demandante estaria fadado a perder ou a não ganhar nada, podendo-se antever, desde já, que a nova regulação estaria por soterrar a malfadada ação coletiva passiva, tal qual nos moldes propostos. O texto proposto no Anteprojeto ora apresentado corrige o problema, estabelecendo simplesmente a vinculação dos membros do grupo, categoria ou classe.
12. A Parte IV, destinada aos procedimentos especiais em termos de tutela coletiva, encontra-se subdividida em quatro capítulos: Do mandado de segurança coletivo; Do mandado de injunção coletivo; Da ação popular; e Da ação de improbidade administrativa. Cogita-se, ainda, da elaboração de um quinto capítulo, para a regulação dos dissídios coletivos. Procurou-se respeitar, nessa parte, as normas vigentes, salvo em relação ao mandado de injunção coletivo, diante da lacuna legal existente. Registre-se, na espécie, que a redação originária do anteprojeto formulado em São Paulo, corretamente, procurava dispor o instituto nos moldes pugnados pela doutrina, para dar à sentença concessiva do mandado a formulação, com base na equidade, de norma regulamentadora para o caso concreto. A nova redação, agora apresentada, mantém a orientação, sem descuidar, no entanto, do

aspecto pertinente ao controle e regularização da omissão existente, estabelecendo, para tanto, o litisconsórcio obrigatório entre a autoridade ou órgão público competente para a edição da norma regulamentadora e a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que impossibilite o exercício do direito no caso concreto, e, na sentença, a comunicação da caracterização da mora legislativa constitucionalmente qualificada ao Poder competente, para que possa ser suprida, conciliando, assim, a consagrada jurisprudência conferida pelo Supremo Tribunal Federal com a pretendida efetividade do mandado de injunção coletivo para a regulação do caso concreto.

13. Por último, a Parte V, que cuida das disposições finais, dispõe sobre os princípios de interpretação, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às ações coletivas, a instalação de órgãos especializados para o processamento e julgamento de demandas coletivas, no âmbito da União e dos Estados, e a vigência do Código Brasileiro de Processos Coletivos, dentro de um ano a contar da publicação da lei. O Anteprojeto procura, ainda, corrigir e adaptar algumas normas vigentes em outros estatutos legais, bem como revogar expressamente os dispositivos incompatíveis com o novo texto.
14. Na esperança que o presente Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos possa representar uma efetiva contribuição para o aprimoramento do acesso à Justiça, para a melhoria na prestação jurisdicional e para a efetividade do processo, leva-se à lume a proposta formulada, submetendo-a aos estudiosos do assunto, aos profissionais do Direito e a toda a sociedade, para que possa ser amplamente analisada e debatida.

Rio de Janeiro, agosto de 2005.

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes

Professor Doutor de Direito Processual Civil na UERJ e UNESA

Juiz Federal

Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual,
do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual
e da Associação Internacional de Direito Processual.

ANTEPROJETO DE CÓDIGO BRASILEIRO DE PROCESSOS COLETIVOS

PARTE I – DAS AÇÕES COLETIVAS EM GERAL

Capítulo I – Da tutela coletiva

Art. 1º. Da tutela jurisdicional coletiva Para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos são admissíveis, além das previstas neste Código, todas as espécies de ações e provimentos capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Art. 2º. Objeto da tutela coletiva A ação coletiva será exercida para a tutela de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os direitos subjetivos decorrentes de origem comum.

Parágrafo único - Não se admitirá ação coletiva que tenha como pedido a declaração de inconstitucionalidade, mas esta poderá ser objeto de questão prejudicial, pela via do controle difuso.

Capítulo II – Dos pressupostos processuais e das condições da ação

Seção I – Do órgão judiciário

Art. 3º. Competência territorial É competente para a causa o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano.

§1º. Em caso de abrangência de mais de um foro, determinar-se-á a competência pela prevenção, aplicando-se as regras pertinentes de organização judiciária.

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

§ 2º. Em caso de dano de âmbito nacional, serão competentes os foros das capitais dos estados e do distrito federal.

Redação aprovada na UNESA: Art. 3º. Competência territorial É competente para a causa o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano.

Parágrafo único. Em caso de abrangência de mais de um foro, determinar-se-á a competência pela prevenção, aplicando-se as regras pertinentes de organização judiciária.

Art. 4º. Prioridade de processamento O juiz dará prioridade ao processamento da ação coletiva.

Art. 5º. Juízos especializados As ações coletivas serão processadas e julgadas em juízos especializados, quando existentes.

Art. 6º. Conexão Se houver conexão entre causas coletivas, de qualquer espécie, ficará prevento o juízo perante o qual a demanda foi distribuída em primeiro lugar, devendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a reunião de todos os processos, mesmo que nestes não atuem integralmente os mesmos sujeitos processuais.

Seção II – Da litispendência e da continência

Art. 7º. Litispendência e continência A primeira ação coletiva induz litispendência para as demais ações coletivas que tenham o mesmo pedido, causa de pedir e interessados.

§ 1º. Estando o objeto da ação posteriormente proposta contido no da primeira, será extinto o processo ulterior sem o julgamento do mérito.

§ 2º. Sendo o objeto da ação posteriormente proposta mais abrangente, o processo ulterior prosseguirá tão somente para a apreciação do pedido não contido na primeira demanda, devendo haver a reunião dos processos perante o juiz prevento em caso de conexão.

§ 3º. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, as partes poderão requerer a extração ou remessa de peças processuais, com o objetivo de instruir o primeiro processo instaurado.

Seção III – Das condições específicas da ação coletiva e da legitimação ativa

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

Art. 8º. Requisitos específicos da ação coletiva São requisitos específicos da ação coletiva, a serem aferidos em decisão especificamente motivada pelo juiz:

I – a adequada representatividade do legitimado;

II – a relevância social da tutela coletiva, caracterizada pela natureza do bem jurídico, pelas características da lesão ou pelo elevado número de pessoas atingidas.

§ 1º. Na análise da representatividade adequada o juiz deverá examinar dados como:

- a) a credibilidade, capacidade e experiência do legitimado;
- b) seu histórico de proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos dos membros do grupo, categoria ou classe;
- c) sua conduta em outros processos coletivos;
- d) a coincidência entre os interesses do legitimado e o objeto da demanda;
- e) o tempo de instituição da associação e a representatividade desta ou da pessoa física perante o grupo, categoria ou classe.

§ 2º. O juiz analisará a existência do requisito da representatividade adequada a qualquer tempo e em qualquer grau do procedimento, aplicando, se for o caso, o disposto no parágrafo 3º. do artigo seguinte.

Art. 9º. Legitimação ativa São legitimados concorrentemente à ação coletiva:

I – qualquer pessoa física, para a defesa dos direitos ou interesses difusos;

II – o membro do grupo, categoria ou classe, para a defesa dos direitos ou interesses coletivos e individuais homogêneos;

III – o Ministério Público, para a defesa dos direitos ou interesses difusos e coletivos, bem como dos individuais homogêneos de interesse social;

IV – a Defensoria Pública, para a defesa dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando os interessados forem, predominantemente, hipossuficientes;

V – as pessoas jurídicas de direito público interno, para a defesa dos direitos ou interesses difusos e coletivos relacionados às suas funções;

VI – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos direitos ou interesses protegidos por este código;

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

VII – as entidades sindicais, para a defesa dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos ligados à categoria;

VIII – os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas ou nas Câmaras Municipais, conforme o âmbito do objeto da demanda, para a defesa de direitos e interesses ligados a seus fins institucionais;

IX – as associações legalmente constituídas e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos direitos ou interesses protegidos neste código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º. Será admitido o litisconsórcio facultativo entre os legitimados.

§ 2º. Em caso de interesse social, o Ministério Público, se não ajuizar a ação ou não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.

§ 3º. Em caso de inexistência inicial ou superveniente do requisito da representatividade adequada, de desistência infundada ou abandono da ação, o juiz notificará o Ministério Público, observado o disposto no inciso III, e, na medida do possível, outros legitimados adequados para o caso, a fim de que assumam, querendo, a titularidade da ação. Havendo inércia do Ministério Público, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 10 deste código.

Capítulo III – Da comunicação sobre processos repetitivos, do inquérito civil e do compromisso de ajustamento de conduta

Art. 10 Comunicação sobre processos repetitivos O juiz, tendo conhecimento da existência de diversos processos individuais correndo contra o mesmo demandado, com idêntico fundamento, comunicará o fato ao Ministério Público e, na medida do possível, a outros legitimados (art. 9º), a fim de que proponham, querendo, ação coletiva.

Parágrafo único – Caso o Ministério Público não promova a ação coletiva, no prazo de 90 (noventa) dias, fará a remessa do expediente recebido ao órgão com atribuição para a homologação ou rejeição da promoção de arquivamento do inquérito civil, para que, do mesmo modo, delibere em relação à propositura ou não da ação coletiva.

Art.11 Inquérito civil. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, nos termos do disposto em sua Lei Orgânica.

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

§ 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ 2º. Os autos do inquérito civil ou das peças informativas arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 10 (dez) dias, ao órgão com atribuição para homologação, na forma da Lei Orgânica.

§ 3º. Até que, em sessão do órgão com atribuição para homologação, seja homologada ou rejeitada a promoção, poderão os interessados apresentar razões escritas e documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação.

§ 4º. Deixando o órgão com atribuição de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

Art. 12 Compromisso de ajustamento de conduta O Ministério Público e os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, sem prejuízo da possibilidade de homologação judicial do compromisso, se assim requererem as partes.

Parágrafo único – Quando o compromisso de ajustamento for tomado por legitimado que não seja o Ministério Público, este deverá ser cientificado para que funcione como fiscal.

Capítulo IV – Da postulação

Art. 13 Custas e honorários Os autores da ação coletiva não adiantarão custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem serão condenados, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

§ 1º. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença condenará o demandado, se vencido, nas custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, bem como em honorários de advogados.

§ 2º. No cálculo dos honorários, o juiz levará em consideração a vantagem para o grupo, categoria ou classe, a quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido pelo advogado e a complexidade da causa.

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

§ 3º. Se o legitimado for pessoa física, sindicato ou associação, o juiz poderá fixar gratificação financeira quando sua atuação tiver sido relevante na condução e êxito da ação coletiva.

§ 4º O litigante de má-fé e os responsáveis pelos respectivos atos serão solidariamente condenados ao pagamento das despesas processuais, em honorários advocatícios e até o décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 14 Da instrução da inicial Para instruir a inicial, o legitimado, sem prejuízo das prerrogativas do Ministério Público, poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias.

§ 1º. As certidões e informações deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução da ação coletiva.

§ 2º. Somente nos casos em que o sigilo for exigido para a defesa da intimidade ou do interesse social poderá ser negada a certidão ou informação.

§ 3º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, requisitá-las; feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça.

Art. 15 Pedido O juiz permitirá, até a decisão saneadora, a ampliação ou adaptação do objeto do processo, desde que, realizada de boa-fé, não represente prejuízo injustificado à parte contrária, à celeridade e ao bom andamento do processo e o contraditório seja preservado.

Art 16 Contraditório para as medidas antecipatórias Para a concessão de liminar ou de tutela antecipada nas ações coletivas, o juiz poderá ouvir, se entender conveniente e não houver prejuízo para a efetividade da medida, a parte contrária, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Art. 17 Efeitos da citação A citação válida para a ação coletiva interrompe o prazo de prescrição das pretensões individuais e transindividuais relacionadas com a controvérsia, retroagindo o efeito à data da propositura da demanda.

Art. 18 Audiência preliminar Encerrada a fase postulatória, o juiz designará audiência preliminar, à qual comparecerão as partes ou seus procuradores, habilitados a transigir.

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

§ 1º. O juiz ouvirá as partes sobre os motivos e fundamentos da demanda e tentará a conciliação, sem prejuízo de sugerir outras formas adequadas de solução do conflito, como a mediação, a arbitragem e a avaliação neutra de terceiro.

§ 2º. A avaliação neutra de terceiro, de confiança das partes, obtida no prazo fixado pelo juiz, é sigilosa, inclusive para esse, e não vinculante para as partes, sendo sua finalidade exclusiva a de orientá-las na tentativa de composição amigável do conflito.

§ 3º. Preservada a indisponibilidade do bem jurídico coletivo, as partes poderão transigir sobre o modo de cumprimento da obrigação.

§ 4º. Obtida a transação, será homologada por sentença, que constituirá título executivo judicial.

§ 5º. Não obtida a conciliação, sendo ela parcial, ou quando, por qualquer motivo, não for adotado outro meio de solução do conflito, o juiz, fundamentadamente:

I – decidirá se a ação tem condições de prosseguir na forma coletiva, certificando-a como coletiva;

II – poderá separar os pedidos em ações coletivas distintas, voltadas à tutela, respectivamente, dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, desde que a separação represente economia processual ou facilite a condução do processo;

III – fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se for o caso;

IV – esclarecerá os encargos das partes quanto à distribuição do ônus da prova, de acordo com o disposto no parágrafo 1º. do artigo seguinte.

Capítulo V – Da prova

Art. 19 Provas São admissíveis em juízo todos os meios de prova, desde que obtidos por meios lícitos, incluindo a prova estatística ou por amostragem.

§ 1º. O ônus da prova incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade em sua demonstração, cabendo ao juiz deliberar sobre a distribuição do ônus da prova por ocasião da decisão saneadora.

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

§ 2º. Durante a fase instrutória, surgindo modificação de fato ou de direito relevante para o julgamento da causa, o juiz poderá rever, em decisão motivada, a distribuição do ônus da prova, concedendo à parte a quem for atribuída a incumbência prazo razoável para a produção da prova, observado o contraditório em relação à parte contrária.

§ 3º. O juiz poderá determinar de ofício a produção de provas, observado o contraditório.

Capítulo VI – Do julgamento, do recurso e da coisa julgada

Art. 20 Motivação das decisões judiciais Todas as decisões deverão ser especificamente fundamentadas, especialmente quanto aos conceitos jurídicos indeterminados.

Parágrafo único Na sentença de improcedência, o juiz deverá explicitar, no dispositivo, se rejeita a demanda por insuficiência de provas.

Art. 21 Efeitos do recurso da sentença O recurso interposto contra a sentença tem efeito meramente devolutivo, salvo quando a fundamentação for relevante e puder resultar à parte lesão grave e de difícil reparação, hipótese em que o juiz pode atribuir ao recurso efeito suspensivo.

Art. 22 Coisa julgada Nas ações coletivas a sentença fará coisa julgada *erga omnes*, salvo quando o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas.

§ 1º. Os efeitos da coisa julgada para a defesa de interesses difusos e coletivos em sentido estrito ficam adstritos ao plano coletivo, não prejudicando interesses e direitos individuais homogêneos reflexos.

§ 2º. Os efeitos da coisa julgada em relação aos interesses ou direitos difusos e coletivos não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas coletiva ou individualmente, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos do art.37 e seguintes.

§ 3º. Na hipótese dos interesses ou direitos individuais homogêneos, apenas não estarão vinculados ao pronunciamento coletivo os titulares de interesses ou direitos que tiverem exercido tempestiva e regularmente o direito de ação ou exclusão.

§ 4º. A competência territorial do órgão julgador não representará limitação para a coisa julgada *erga omnes*.

Capítulo VII – Das obrigações específicas

Art. 23 Obrigações de fazer e não fazer Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º. O juiz poderá, na hipótese de antecipação de tutela ou na sentença, impor multa diária ao demandado, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 2º. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

§ 3º. Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além da requisição de força policial.

§ 4º. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 5º. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa.

Art. 24 Obrigações de dar Na ação que tenha por objeto a obrigação de entregar coisa, determinada ou indeterminada, aplicam-se, no que couber, as disposições do artigo anterior.

Art. 25 Ação indenizatória Na ação condenatória à reparação dos danos provocados ao bem indivisivelmente considerado, a indenização reverterá ao Fundo dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, de natureza federal ou estadual, de acordo com o bem ou interesse afetado.

§ 1º. Dependendo da especificidade do bem jurídico afetado, da extensão territorial abrangida e de outras circunstâncias consideradas relevantes, o juiz poderá especificar, em decisão fundamentada, a destinação da indenização e as providências a serem tomadas para a reconstituição dos bens lesados, podendo indicar a realização de atividades tendentes a minimizar a lesão ou a evitar que se repita, dentre outras que beneficiem o bem jurídico prejudicado.

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

§ 2º. A decisão que especificar a destinação da indenização indicará, de modo claro e preciso, as medidas a serem tomadas pelo Conselho Gestor do Fundo, bem como um prazo razoável para que tais medidas sejam concretizadas.

§ 3º. Vencido o prazo fixado pelo juiz, o Conselho Gestor do Fundo apresentará relatório das atividades realizadas, facultada, conforme o caso, a solicitação de sua prorrogação, para completar as medidas determinadas na decisão judicial.

§ 4º. Aplica-se ao descumprimento injustificado dos parágrafos 2º. e 3º. o disposto no parágrafo 2º. do artigo 29.

Capítulo VIII – Da liquidação e da execução

Art. 26 Legitimação à liquidação e execução da sentença condenatória Decorridos 60 (sessenta) dias da passagem em julgado da sentença de procedência, sem que o autor da ação coletiva promova a liquidação ou execução coletiva, deverá fazê-lo o Ministério Público, quando se tratar de interesse público, facultada igual iniciativa, em todos os casos, aos demais legitimados.

Art. 27 Execução definitiva e execução provisória A execução é definitiva quando passada em julgado a sentença; e provisória, na pendência dos recursos cabíveis.

§ 1º. A execução provisória corre por conta e risco do exequente, que responde pelos prejuízos causados ao executado, em caso de reforma da sentença recorrida.

§ 2º. A execução provisória não impede a prática de atos que importem em alienação do domínio ou levantamento do depósito em dinheiro.

§ 3º. A pedido do executado, o juiz pode suspender a execução provisória quando dela puder resultar lesão grave e de difícil reparação.

Capítulo IX – Do cadastro nacional de processos coletivos e do Fundo de Direitos

Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos

Art. 28 Cadastro nacional de processos coletivos O Conselho Nacional de Justiça organizará e manterá o cadastro nacional de processos coletivos, com a finalidade de permitir que todos os órgãos do Poder

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

Judiciário e todos os interessados tenham conhecimento da existência das ações coletivas, facilitando a sua publicidade e o exercício do direito de exclusão.

§ 1º. Os órgãos judiciários aos quais forem distribuídas ações coletivas remeterão, no prazo de dez dias, cópia da petição inicial ao cadastro nacional de processos coletivos.

§ 2º. O Conselho Nacional de Justiça editará regulamento dispondo sobre o funcionamento do cadastro nacional de processos coletivos, em especial a forma de comunicação pelos juízos quanto à existência das ações coletivas e aos atos processuais mais relevantes, como a concessão de antecipação de tutela, a sentença e o trânsito em julgado; disciplinará, ainda, sobre os meios adequados a viabilizar o acesso aos dados e o acompanhamento daquelas por qualquer interessado.

Art. 29 Fundo dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos O fundo será administrado por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais, de que participarão necessariamente membros do Ministério Público, juízes e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados ou, não sendo possível, à realização de atividades tendentes a minimizar a lesão ou a evitar que se repita, dentre outras que beneficiem o bem jurídico prejudicado.

§ 1º. Além da indenização oriunda de sentença condenatória, nos termos do disposto no caput do art. 25, constituem também receitas do Fundo o produto da arrecadação de multas judiciais e da indenização devida quando não for possível o cumprimento da obrigação pactuada em termo de ajustamento de conduta.

§ 2º. O representante legal do Fundo, considerado servidor público para efeitos legais, responderá por sua atuação nas esferas administrativa, penal e civil.

§ 3º. O Fundo será notificado da propositura de toda ação coletiva e da decisão final do processo.

§ 4º. O Fundo manterá e divulgará registros que especifiquem a origem e a destinação dos recursos e indicará a variedade dos bens jurídicos a serem tutelados e seu âmbito regional.

§ 5º. Semestralmente, o Fundo dará publicidade às suas demonstrações financeiras e atividades desenvolvidas.

PARTE II – DAS AÇÕES COLETIVAS PARA A DEFESA DOS DIREITOS OU INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

Art. 30 Da ação coletiva para a defesa dos direitos ou interesses individuais homogêneos Para a tutela dos interesses ou direitos individuais homogêneos, além dos requisitos indicados no art.8º. deste Código, é necessária a aferição da predominância das questões comuns sobre as individuais e da utilidade da tutela coletiva no caso concreto.

Art. 31 Determinação dos interessados A determinação dos interessados poderá ocorrer no momento da liquidação ou execução do julgado, não havendo necessidade de a petição inicial estar acompanhada da relação dos membros do grupo, classe ou categoria. Conforme o caso, poderá o juiz determinar, ao réu ou a terceiro, a apresentação da relação e dados de pessoas que se enquadram no grupo, categoria ou classe.

Art. 32 Citação e notificações Estando em termos a petição inicial, o juiz ordenará a citação do réu, a publicação de edital no órgão oficial e a comunicação dos interessados, titulares dos direitos ou interesses individuais homogêneos objeto da ação coletiva, para que possam exercer no prazo fixado seu direito de exclusão em relação ao processo coletivo, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social.

§ 1º. Não sendo fixado pelo juiz o prazo acima mencionado, o direito de exclusão poderá ser exercido até a publicação da sentença no processo coletivo.

§ 2º. A comunicação prevista no *caput* poderá ser feita pelo correio, por oficial de justiça, por edital ou por inserção em outro meio de comunicação ou informação, como contracheque, conta, fatura, extrato bancário e outros, sem obrigatoriedade de identificação nominal dos destinatários, que poderão ser caracterizados enquanto titulares dos mencionados interesses, fazendo-se referência à ação e às partes, bem como ao pedido e à causa de pedir, observado o critério da modicidade do custo.

Art. 33 Relação entre ação coletiva e ações individuais O ajuizamento ou prosseguimento da ação individual versando sobre direito ou interesse que esteja sendo objeto de ação coletiva pressupõe a exclusão tempestiva e regular desta.

§ 1º. O ajuizamento da ação coletiva ensejará a suspensão, por trinta dias, a contar da ciência efetiva desta, dos processos individuais em tramitação que versem sobre direito ou interesse que esteja sendo objeto no processo coletivo.

§ 2º. Dentro do prazo previsto no parágrafo anterior, os autores das ações individuais poderão requerer, nos autos do processo individual, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, que os efeitos das decisões

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

proferidas na ação coletiva não lhes sejam aplicáveis, optando, assim, pelo prosseguimento do processo individual.

§ 3º. Os interessados que, quando da comunicação, não possuírem ação individual ajuizada e não desejarem ser alcançados pelos efeitos das decisões proferidas na ação coletiva poderão optar entre o requerimento de exclusão ou o ajuizamento da ação individual no prazo assinalado, hipótese que equivalerá à manifestação expressa de exclusão.

§ 4º. Não tendo o juiz deliberado acerca da forma de exclusão, esta ocorrerá mediante simples manifestação dirigida ao juiz do respectivo processo coletivo ou ao órgão incumbido de realizar a nível nacional o registro das ações coletivas, que poderão se utilizar eventualmente de sistema integrado de protocolo.

§ 5º. O requerimento de exclusão, devida e tempestivamente protocolizado, consistirá em documento indispensável para a propositura de ulterior demanda individual.

Art. 34 Assistência Os titulares dos direitos ou interesses individuais homogêneos poderão intervir no processo como assistentes, sendo-lhes vedado discutir suas pretensões individuais no processo coletivo de conhecimento.

Art. 35 Efeitos da transação As partes poderão transacionar, ressalvada aos membros do grupo, categoria ou classe a faculdade de se desvincularem da transação, dentro do prazo fixado pelo juiz.

Parágrafo único – Os titulares dos direitos ou interesses individuais homogêneos serão comunicados, nos termos do art. 32, para que possam exercer o seu direito de exclusão, em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias.

Art. 36 Sentença condenatória Sempre que possível, em caso de procedência do pedido, o juiz fixará na sentença do processo coletivo o valor da indenização individual devida a cada membro do grupo, categoria ou classe.

§ 1º. Quando o valor dos danos sofridos pelos membros do grupo, categoria ou classe for uniforme, prevalentemente uniforme ou puder ser reduzido a uma fórmula matemática, a sentença coletiva indicará o valor ou a fórmula do cálculo da indenização individual.

§ 2º. Não sendo possível a prolação de sentença coletiva líquida, a condenação poderá ser genérica, fixando a responsabilidade do demandado pelos danos causados e o dever de indenizar.

Art. 37 Competência para a liquidação e a execução É competente para a liquidação e a execução o juízo:

I – da ação condenatória, quando coletiva a liquidação ou a execução;

II – do domicílio do demandado ou do demandante individual, no caso de liquidação ou execução individual.

Art. 38 Liquidação e execução coletivas Sempre que possível, a liquidação e a execução serão coletivas, sendo promovidas pelos legitimados à ação coletiva.

Art. 39 Pagamento Quando a execução for coletiva, os valores destinados ao pagamento das indenizações individuais serão depositados em instituição bancária oficial, abrindo-se conta remunerada e individualizada para cada beneficiário; os respectivos saques, sem expedição de alvará, reger-se-ão pelas normas aplicáveis aos depósitos bancários e estarão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da lei.

Art. 40 Liquidação e execução individuais Quando não for possível a liquidação coletiva, a fixação dos danos e respectiva execução poderão ser promovidas individualmente.

§ 1º. Na liquidação de sentença, caberá ao liquidante provar, tão só, o dano pessoal, o nexo de causalidade e o montante da indenização.

§ 2º. Decorrido o prazo de um ano sem que tenha sido promovido um número de liquidações individuais compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados coletivos promover a liquidação e a execução coletiva da indenização devida pelos danos causados, hipótese em que:

I – O prazo previsto neste parágrafo prevalece sobre os prazos prescricionais aplicáveis à execução da sentença;

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

II – O valor da indenização será fixado de acordo com o dano globalmente causado, que será demonstrado por todas as provas admitidas em direito. Sendo a produção de provas difícil ou impossível, em razão da extensão do dano ou de sua complexidade, o valor da indenização será fixado por arbitramento;

III – Quando não for possível a identificação dos interessados, o produto da indenização reverterá para o Fundo dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos.

Art. 41 Concurso de créditos Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação de que trata o artigo 25 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estes terão preferência no pagamento.

Parágrafo único – Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao Fundo ficará suspensa enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

PARTE III – DA AÇÃO COLETIVA PASSIVA

Art. 42 Ação contra o grupo, categoria ou classe Qualquer espécie de ação pode ser proposta contra uma coletividade organizada ou que tenha representante adequado, nos termos do parágrafo 1º. do artigo 8º, e desde que o bem jurídico a ser tutelado seja transindividual (art. 2º.) e se revista de interesse social.

Art. 43 Coisa julgada passiva A coisa julgada atuará *erga omnes*, vinculando os membros do grupo, categoria ou classe.

Art. 44 Aplicação complementar à ação coletiva passiva Aplica-se complementarmente à ação coletiva passiva o disposto neste código quanto à ação coletiva ativa, no que não for incompatível.

PARTE IV – PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Capítulo I – Do mandado de segurança coletivo

Art. 45 Cabimento Conceder-se-á mandado de segurança coletivo, nos termos dos incisos LXIX e LXX do artigo 5º. da Constituição Federal, para proteger direito líquido e certo relativo a interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 2º.).

Art. 46 Disposições aplicáveis Aplica-se ao mandado de segurança coletivo o disposto neste código, inclusive no tocante às custas e honorários (art. 16), e na lei 1533/51, no que não for incompatível.

Capítulo II – Do mandado de injunção coletivo

Art. 47 Cabimento Conceder-se-á mandado de injunção coletivo sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, relativamente a direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Art. 48 Competência É competente para processar e julgar o mandado de injunção coletivo:

I - o Supremo Tribunal Federal, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo Único – Compete também ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o mandado de injunção decidido em única ou última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

II - o Superior Tribunal de Justiça, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.

III - O Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de Governador, Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas local, do próprio Tribunal de Justiça, de órgão, entidade ou autoridades estadual ou distrital, da administração direta ou indireta.

Art. 49 Legitimação passiva O mandado de injunção coletivo será impetrado, em litisconsórcio obrigatório, em face da autoridade ou órgão público competente para a edição da norma regulamentadora; e ainda da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que, por inexistência de norma regulamentadora, impossibilite o exercício dos direitos e liberdades constitucionais relativos a interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Los abusos cometidos en nombre de la colectividad o grupo en los procesos colectivos y su resarcimiento

Art. 50 Edição superveniente da norma regulamentadora Se a norma regulamentadora for editada no curso do mandado de injunção coletivo, o órgão jurisdicional apurará acerca da existência ainda de matéria não regulada, referente a efeitos pretéritos do dispositivo constitucional tardiamente regulado, prosseguindo, se for a hipótese, para julgamento da parte remanescente.

§ 1º Dispondo a norma regulamentadora editada no curso do mandado de injunção coletivo inclusive quanto ao período em que se verificara a omissão legislativa constitucionalmente relevante, o processo será extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil, ficando o autor coletivo dispensando do pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.

§ 2º A norma regulamentadora, editada após o ajuizamento do mandado de injunção coletivo, respeitará os efeitos de eventual decisão judicial provisória ou definitiva proferida, mas será aplicada às projeções futuras da relação jurídica objeto de apreciação jurisdicional.

Art. 51 Sentença A sentença que conceder o mandado de injunção coletivo:

I – comunicará a caracterização da mora legislativa constitucionalmente qualificada ao Poder competente, para a adoção, no prazo que fixar, das providências necessárias;

II – formulará, com base na equidade, a norma regulamentadora e, no mesmo julgamento, a aplicará ao caso concreto, determinando as obrigações a serem cumpridas pelo legitimado passivo para o efetivo exercício das liberdades e prerrogativas constitucionais dos integrantes do grupo, categoria ou classe.

§ 1º A parcela do dispositivo que se revista do conteúdo previsto no inciso II se prolata sob condição suspensiva, a saber, transcurso *in albis* do prazo assinalado a teor do inciso I, para superação da omissão legislativa constitucionalmente relevante reconhecida como havida.

§ 2º Na sentença, o juiz poderá fixar multa diária para o réu que incida, eventualmente, em descumprimento da norma regulamentadora aplicada ao caso concreto, independentemente do pedido do autor.

Art. 52 Disposições aplicáveis Aplica-se ao mandado de injunção coletivo o disposto neste código, inclusive no tocante às custas e honorários (art. 16), quando compatível.

Capítulo III – Da ação popular

Art. 53 Disposições aplicáveis Aplica-se à ação popular o disposto na lei 4717/65, bem como o previsto neste código, no que for compatível.

Capítulo IV – Da ação de improbidade administrativa

Art. 54 Disposições aplicáveis Aplica-se à ação de improbidade administrativa o disposto na lei 8429/92, bem como o previsto neste código, no que for compatível.

PARTE V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 55 Princípios de interpretação Este código será interpretado de forma aberta e flexível, compatível com a tutela coletiva dos interesses e direitos de que trata.

Art. 56 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil Aplicam-se subsidiariamente às ações coletivas, no que não forem incompatíveis, as disposições do Código de Processo Civil.

Art. 57 Nova redação Dê-se nova redação aos artigos de leis abaixo indicados:

a) o inciso VIII do artigo 6º. da lei 8078/90 passa a ter a seguinte redação:

art. 6º. inciso VIII – a facilitação da defesa dos seus direitos, incumbindo o ônus da prova à parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações sobre os fatos, ou maior facilidade em sua demonstração.

b) o artigo 80 da lei 10741/2003 passa a ter a seguinte redação:

art. 80 – as ações individuais movidas pelo idoso poderão ser propostas no foro do seu domicílio.

Art. 58 Revogação Revogam-se a Lei 7347, de 24 de julho de 1985; os artigos 81 a 104 da Lei 8078/90, de 11 de setembro de 1990; o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 4717, de 29 de junho de 1965; os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei 7853, de 24 de outubro de 1989; o artigo 3º da Lei 7913, de 7 de dezembro de 1989; os artigos 210, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 222, 223 e 224 da Lei 8069, de 13 de junho de 1990; o artigo 2ºA da Lei 9494, de 10 de setembro de 1997; e os artigos 81, 82, 83, 85, 91, 92 e 93 da Lei 10741, de 1º de outubro de 2003.

Art. 59 Instalação dos órgãos especializados A União, no prazo de um ano, a contar da publicação deste código, e os Estados criarão e instalarão órgãos especializados, em primeira e segunda instância, para o processamento e julgamento de ações coletivas.

Art. 60 Vigência Este código entrará em vigor dentro de um ano a contar de sua publicação.

Agosto de 2005.